

24
25



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

**PODER MILITAR Y
NEOLIBERALISMO ECONOMICO:
EL CASO DE ARGENTINA, 1976-1983**

T E S I S

Que para obtener el título de:
**LICENCIADO EN RELACIONES
INTERNACIONALES**

P r e s e n t a :
José Luis León Manríquez

México, D. F.

Enero 1989

FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

PODER MILITAR Y NEOLIBERALISMO ECONOMICO: EL CASO DE ARGENTINA, 1976-1983

José Luis León Manríquez

INDICE

INTRODUCCION	1
I. CARACTERIZACION DE LOS ESTADOS FASCISTAS DEPENDIENTES EN AMERICA LATINA	7
1. Del pretorianismo arqueopolítico al poder militar moderno, 8	
2. El viejo y el nuevo fascismo: elementos para una comparación, 13	
● Los elementos accidentales, 13	
● Lo esencial, 16	
3. Hacia una caracterización del fascismo dependiente en América Latina, 19	
● El proyecto fundacional de los militares y su instrumentación jurídico-política, 19	
● La vertiente ideológica de la dominación fascista dependiente, 24	
Notas Capítulo I, 29	
II. DE LA "ARGENTINA POTENCIA" AL SUBDESARROLLO AUTOINDUCIDO. ELEMENTOS PARA UNA INTERPRETACION DE LA CRISIS ARGENTINA	29
1. Breve panorama histórico de la Argentina, 30	
A) De la formación oligárquica al golpe de Estado en 1930, 30	
B) La sustitución de importaciones, desde la "Década Infame" hasta el segundo gobierno peronista, 32	
2. Tres lecturas del problema argentino, 40	

- Estancamiento económico y transferencias intersectoriales, 42
 - Ideologías, partidos políticos y grupos de presión: un balance, 48
 - Crisis social e intervenciones militares, 55
- Notas Capítulo II, 56

III. EL GOLPE MILITAR DE 1976 Y LAS ETAPAS POLITICO-ECONOMICAS DEL "PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL"

59

1. La primera Junta Militar: "guerra sucia" en todos los frentes, 60
 2. Apertura tímida y pugnas en las fuerzas armadas: el *interregno* de Roberto Viola, 64
 3. Del expansionismo diversionista a la debacle del proyecto militar: los malos cálculos del general Galtieri y el fracaso monetarista, 66
 4. El gobierno de Bignone y la transición hacia un régimen civil, 69
- Notas Capítulo III, 72

IV. ARGENTINA: CRISIS ECONOMICA Y NEOLIBERALISMO

74

1. Origen último, fases y objetivos del modelo, 74
 - Origen último del modelo económico, 76
 - Las fases de la política económica, 77
2. El programa económico del gobierno y sus instrumentos, 79
 - Política financiera, monetaria y cambiaria, 79
 - Reducción del peso del Estado en la economía, 80
 - Distribución regresiva del ingreso, 80
 - Apertura externa, 80
 - Política fiscal y tributaria, 81
 - Política agrícola, 81
 - Política industrial, 82
3. Resultados de la aplicación del programa, 82
 - A) Estancamiento productivo, 82
 - La evolución del producto interno bruto (PIB), 82
 - Expansión del sector público, 84
 - Desinversión y especulación, 87
 - Desmantelamiento de la planta industrial, quiebras masivas y destrucción de la riqueza, 89
 - Crisis agrícola, 91

- B) Hiperinflación, 92
 - C) La política social y sus consecuencias, 93
 - Comportamiento del desempleo y subempleo, 93
 - Caída salarial y distribución regresiva del ingreso, 97
 - Reducción de los gastos sociales, 97
 - D) Las cuentas del sector externo, 99
 - Evolución de la balanza de pagos, 99
 - La deuda externa argentina, 100
 - Breve apostilla sobre la inversión extranjera directa (IED), 105
 - Epílogo: el fracaso del monetarismo en Argentina, 105
- Notas Capítulo IV, 106

V. LA DICTADURA EN ARGENTINA: SUPUESTOS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS

109

1. Los supuestos operativos de las fuerzas armadas, 109
 - La DSN en Argentina, 110
 - Mesianismo militar y expansión de la DSN: la Doctrina Viola, 111
 2. El desarrollo de la dictadura, 112
 - Desaparición del marco jurídico constitucional, 113
 - Desaparición de las mediaciones entre Estado y sociedad civil; la ola represiva, 113
 - El terrorismo de Estado en Argentina: hacia un balance, 119
 - Tensiones y disrupciones en la dominación, 122
 3. Consecuencias, 128
 - El debilitamiento de la dictadura, 128
 - La guerra de las Malvinas, 130
 - La transición a un gobierno civil, 131
- Notas Capítulo V, 132

CONSIDERACIONES FINALES

135

BIBLIOGRAFIA BASICA

139

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL

140

HEMEROGRAFIA

145

PODER MILITAR Y NEOLIBERALISMO ECONOMICO. EL CASO DE ARGENTINA, 1976-1983

José Luis León Manríquez

INTRODUCCION

Es indudable la importancia que revisten, hoy día, los estudios en torno a América Latina. Esto es así no sólo por la natural inquietud que despiertan personalmente el pasado, el presente y el futuro de la región por el simple hecho de haber nacido en ella, sino porque esta América nuestra se perfila, en lo que queda del presente siglo y en el que está por llegar, como un espacio privilegiado en la lucha contra el neocolonialismo, así como en la generación de alternativas para un orden interno e internacional más justo.

La América Latina contemporánea vive hoy al menos dos fenómenos políticos importantes. Uno está representado en las luchas centroamericanas, en donde coexisten visiblemente los intentos de las fuerzas populares por obtener el poder —entendido éste como un proceso para crear sociedades democráticas, igualitarias e independientes en el sentido más amplio de la palabra— con los intentos del gobierno de Estados Unidos por volver la historia a los tiempos de la 'cleptocracia somocista, por hacer naufragar el barco de la Revolución Centroamericana, por restaurar el Estado-sucursal de la neocolonia bananera y cafetalera. El otro fenómeno político se refiere al proceso de democratización creciente que se vive en el Cono Sur de América Latina.

Este último aspecto debe estudiarse contrastándolo con la situación prevaleciente en Sudamérica hace algunos años, cuando el mapa nos presentaba un subcontinente plagado de regímenes militares.

Es en este punto, entonces, en donde encuentra justificación el presente estudio; se trata de diagnosticar las causas que hicieron posible el militarismo de nuevo cuño en el Cono Sur, y en especial en Argentina, así como la actuación de la alianza

tecnocrático-militar y los desastrosos resultados que produjo en las naciones que la padecieron.

A partir de 1964, con el golpe militar en Brasil, surge un nuevo tipo de dictadura, que trasciende el tradicional caudillismo autoritarista de América Latina y entroniza en el poder ya no a tal o cual personaje, sino a las fuerzas armadas como institución. Este modelo es, *grosso modo*, el que se expresa de manera diáfana en Chile a partir de 1973, en Uruguay desde 1974 y en Argentina desde 1976.*

La hegemonía de las instituciones castrenses en el poder, sin embargo, parece condición necesaria pero no suficiente para explicar el nuevo militarismo conosureño. Existe por lo menos otra característica que define la especificidad de este fenómeno, esto es, el manejo tecnocrático y ortodoxo de la economía. En este sentido es posible afirmar que la Doctrina de la Seguridad Nacional ha venido a complementar las recetas monetaristas de la Escuela de Chicago.

El caso argentino me ha parecido particularmente interesante por varias razones. Primero, porque constituye una muestra representativa de la aplicación extrema del modelo descrito líneas arriba.

Segundo, porque obliga a reflexionar acerca de la manera en que ese país, que objetivamente posee todos los elementos para ser un espacio privilegiado, con altos niveles de vida y constituirse en un actor respetable en la lucha por las mejores causas de la humanidad, vive hoy sujeto a las contingencias del subdesarrollo.

Existen en el país no sólo problemas económicos (deuda externa, hiperinflación crónica sólo ocasionalmente paliada, alto desempleo, fuga de capitales, especulación, desinversión, desequilibrios sectoriales y regionales, etc.) sino políticos también (golpismo latente, dificultades para conseguir un pacto social renovado y viable, tensiones entre el movimiento sindical y el Estado, etc.).

Tercero, el caso de Argentina es un proceso que proporciona ocasión para ocuparse, así sea superficialmente, del autoritarismo populista y cuestionar, al mismo tiempo, su posible reimplantación en el ámbito latinoamericano.

El estudio del "neofascismo", "autoritarismo burocrático", "fascismo dependiente" o cualquiera que sea la terminología o nomenclatura para etiquetar a esta ominosa forma de régimen, resulta de interés para prevenir, en la medida de lo posible, su retorno, así como su presunta expansión hacia países de nuestra América que hasta hoy —y desde hace tiempo— han vivido bajo formas de dominación basadas más en el consenso que en la violencia coercitiva, como son México y Venezuela, principalmente.

* Algunos estudiosos del tema como Esteban Righi, Justo Escobar y Sebastián Velázquez consideran que la administración de Juan Carlos Onganía y sucesores, entre 1966 y 1973, constituye un ensayo general, o, mejor, un importante prolegómeno para la implantación del modelo en ese país.

La investigación que se ha llevado a cabo es también, a mi juicio, una buena oportunidad para detectar, describir y analizar los nexos entre la política y la economía, que no siempre se presentan inmediatamente perceptibles al lente del científico social.

Finalmente, el tema se justifica en tanto que puede proporcionar elementos para el análisis del capitalismo dependiente latinoamericano, así como permitir un estudio comparativo entre las políticas económicas y sus resultados bajo las dictaduras militares del Cono Sur durante los setenta y parte de los ochenta.

El primer problema que se nos plantea es una caracterización de los nuevos regímenes militares. Es deseable, en consecuencia, proponer un marco conceptual que aclare las diferencias entre los Estados de seguridad en el Cono Sur y los Estados fascistas típicos como la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, por un lado, y con los Estados latinoamericanos en donde se vive —o se ha vivido— el militarismo típico que entroniza la figura del caudillo antes que la hegemonía de las fuerzas armadas. Este marco conceptual, explicitado en el capítulo I, debe permitir la proposición de conceptos que, antes de adjetivar, expliquen la especificidad del nuevo autoritarismo latinoamericano. A partir de esta clarificación de conceptos se pretende llegar a una caracterización aplicable a los casos de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Debe aclararse que se trata de efectuar una delimitación precisa del fenómeno, mas no de acomodar la realidad a los moldes teóricos.

Una vez obtenida la caracterización de los Estados fascistas dependientes, se puede, en el capítulo II, ahondar en los aspectos históricos de la nación argentina, retomando sumariamente su desarrollo político, económico y social a partir de su incorporación al mercado mundial bajo la órbita neocolonial inglesa en el siglo XIX hasta llegar a los días previos al golpe militar de marzo de 1976. Intentar un análisis de la experiencia de 1976-1983 en Argentina sin un recuento de su historia, su economía y sus clases sociales (con las correspondientes alianzas), dificultaría la comprensión de lo que allí sucedió y de lo que puede suceder. Más adelante, y como complemento del análisis histórico, una significativa porción de este mismo capítulo se ocupa de encontrar las raíces históricas de la participación militar en el poder y la declinación general que desde la década de los treinta viene padeciendo la Argentina, destacando elementos tales como la prolongada inestabilidad política del país, el estancamiento económico, las pugnas intersectoriales entre agro e industria y el comportamiento poco proclive a la democracia por parte de ciertos grupos de presión, partidos políticos y las fuerzas armadas.

El capítulo III describe las motivaciones del golpe militar de marzo de 1976 y su carácter de clase, ya que de éste depende, en buena medida, el rumbo que la política y la economía instrumentada por los militares tomó posteriormente. No obstante, el desarrollo del llamado "Proceso de Reorganización Nacional" no fue uniforme, por lo

que se pueden distinguir varias etapas que van desde cierto consenso inicial (sobre todo entre algunos sectores medios, y qué decir de la gran burguesía), hasta un deterioro final que se vio exacerbado con la fracasada aventura de las Islas Malvinas, el renacimiento de la oposición y la conciencia generalizada del pésimo manejo de la economía efectuado por la tecnocracia.

Considerando que el modelo de 1976-1983 tenía tras de sí un diseño concreto que poseía a su vez toda una maquinaria de apologética y racionalización, en el capítulo IV nos proponemos desglosar los objetivos del proyecto económico llevado adelante por el elenco tecnoburocrático y sus implicaciones para el desarrollo argentino; describir la evolución de aspectos tales como balanza de pagos, indiscriminada apertura externa de la economía, evolución del empleo, tasas de inflación, endeudamiento externo, estancamiento productivo, distribución regresiva del ingreso, contracción del gasto público y reducción del papel del Estado en la economía, y demostrar a la vez quiénes fueron los beneficiarios del proyecto neoliberal.

En estrecha relación con los planteamientos anteriores, el capítulo V analiza los aspectos puramente políticos de la dictadura militar argentina. A partir de los supuestos contenidos en la Doctrina de Seguridad Nacional, las fuerzas armadas articulan una visión organicista de la sociedad, proponiéndose e imponiéndose por la coacción organizada— como ente “salvador” de un orden que se percibe resquebrajado, al borde del abismo. Los supuestos en que los militares encuentran su demiurgo justificatorio para el ejercicio del poder tienen un correlato práctico bastante conocido: anulación de las intermediaciones entre el Estado y la sociedad civil, esto es, de partidos políticos, sindicatos, etc.; brutalidad impune y violencia como única forma de diálogo, que deja como saldo más de 30 mil muertos y desaparecidos y una cantidad enorme (cerca de dos millones) de argentinos en el exilio; intentos repetidos y alucinantes de destruir todo vestigio de conciencia crítica; militarización de la vida civil, y ruptura de los marcos jurídico-políticos tradicionales, entre otras prácticas.

Si este lamentable proyecto político (expresión de la gran burguesía) fue sostenido durante siete años por la resignación y el miedo, el movimiento popular no dejó de manifestarse —primero de manera soterrada y después vehementemente— contra él.

Es conveniente, pues, profundizar en el estudio de aquellos sectores y fuerzas que se resistieron a ser sujetos pasivos de las prácticas políticas de la dictadura militar. Existe al respecto el extraordinario ejemplo de las Madres de la Plaza de Mayo, presentes cada jueves para denunciar ante el mundo la barbarie y pedir la vuelta de sus desaparecidos; los grupos de sindicalistas que tuvieron que luchar simultáneamente contra la represión del régimen y la aristocracia obrera, sumada ante los uniformados; los periodistas y medios que superaron la censura y la autocensura; los sectores de organizaciones políticas que nunca se dieron por vencidos; los grupos

defensores de los derechos humanos; ciertos intelectuales o artistas que tuvieron que sufrir persecución, cárcel o exilio y las personas que, abiertamente o en sigilo trabajaron por el reencuentro de la dignidad y el establecimiento de la democracia. Contra el pensamiento mesiánico de la casta militar y sus deseos de permanencia eterna en el poder se lanzaron estas minorías que más tarde tornáronse mayorías, empujando poco a poco a la institución castrense —con las Malvinas como poderoso catalizador— de nuevo a sus cuarteles. Es necesario retomar esa historia.

• • • •

En cuanto a las hipótesis de trabajo son varias las que se pueden extraer de los anteriores planteamientos. La primera es que la dictadura militar de la Argentina entre 1976-1983 y el prolongado lapso de terrorismo de Estado que tuvo lugar durante su mandato, es la expresión política de un modelo de acumulación capitalista periférica que, para ser instrumentado, necesita a corto o mediano plazos de la coacción para erradicar —o al menos intentarlo— a un movimiento popular (sindicatos, partidos políticos, otros grupos sociales, incluso organizaciones armadas) que se opone abierta o soterradamente a este proyecto de expoliación.

Una segunda hipótesis es que la ferocidad de la dictadura militar se encuentra en razón directa de la fuerte movilización previa de vastos sectores del pueblo argentino que amenazaba incluso con dificultar la reproducción del orden capitalista existente a mediados de los setenta; además, se postula que el autoritarismo de marras encuentra profundas raíces en la historia y el comportamiento de los actores políticos, económicos y sociales de la Argentina.

La tercera hipótesis asienta que el manejo tecnocrático** de la economía produjo daños profundos a la planta productiva del país; fue incapaz de detener la hiperinflación (recargó el peso del ajuste en las espaldas de los trabajadores), condujo a severos estrangulamientos del sector externo, no logró saldar el pago de la deuda externa satisfactoriamente y precipitó la mayor crisis de la economía argentina en lo que va del presente siglo.

Ello permite plantear, de manera tangencial y no propiamente como supuesto de trabajo, que la dictadura militar argentina presenta importantes semejanzas con sus similares del Cono Sur, en cuanto que constituye un botón de muestra del nuevo autoritarismo latinoamericano, cuyos objetivos últimos se encuentran relacionados con la primera hipótesis enunciada.

** Entiéndese por "manejo tecnocrático de la economía" aquella visión y praxis ultraliberales que, en el deslumbramiento que les provocan las propuestas eficientistas y presuntamente científicas de la teoría económica neoclásica, suelen colocar en segundo plano las consideraciones políticas y sociales.

••••

Sobre el manejo de las fuentes consultadas, aun cuando me fue posible obtener sólo algunos documentos de primera mano originados en la propia Argentina, sobre todo ciertos diarios citados al final del trabajo, la mayoría de las fuentes aquí utilizadas son secundarias, y casi todas provienen de publicaciones aparecidas en México.

Espero que la presente tesis sirva al menos para reflexionar sobre la demencia del terrorismo de Estado en América Latina y perder al respecto un "Nunca más", no sólo para la Argentina sino para todo nuestro subcontinente y el mundo. Ello implicaría también, de alguna forma, una invitación a cambiar la dependencia por todos los medios y cristalizar así, en un futuro que esperemos no sea muy lejano, el bello poema que Ernesto Cardenal escribiera hace algunos años:

No hemos nacido para ser patrones

no hemos nacido para ser obreros

hemos nacido para ser hermanos.

I. CARACTERIZACION DE LOS ESTADOS FASCISTAS DEPENDIENTES EN AMERICA LATINA.

Casi todos los cientistas sociales ocupados en el análisis de América Latina consideran que a partir de 1964, con el golpe de Estado que derriba a João Goulart en Brasil, se abre una nueva etapa en la participación de los militares en el poder del Cono Sur del continente. Ya no serán caudillismos o gorilatos los únicos fenómenos definitorios de tal dominio, sino también y ante todo la toma y ejercicio del poder de las fuerzas armadas como institución.

En torno a este consenso básico, la polémica ha tendido a centrarse, más bien, en la descripción e interpretación de los orígenes, el tiempo histórico en que arriban estos regímenes al poder, la ideología que ostentan, los métodos que emplean para mantener bajo su égida al aparato estatal, y el carácter de clase que los define.

Grosso modo, las discusiones han tomado tres rumbos principales. El primero de ellos se preocupa de la ubicación de los Estados militares sudamericanos en las tipologías de la Ciencia Política, e intenta explicarlos en la perspectiva de las distintas formas de Estado y gobierno. El riesgo implícito de esta vertiente analítica es que en ocasiones puede únicamente limitarse a la forma, mas no al contenido de la dominación.

Una segunda tendencia de estudio es aquella que intenta relacionar el militarismo latinoamericano con fases particulares del capitalismo dependiente, refiriéndose, de manera medular, a las modificaciones operadas dentro de la división internacional del trabajo, al agotamiento de los procesos sustitutos de importaciones en América Latina, a las transformaciones en la estructura económica local, a la influencia del sistema capitalista internacional sobre ésta, y a la conformación de alianzas interno-externas que juegan el papel de bloque de poder dominante. Este enfoque muestra el riesgo de caer en interpretaciones meramente economicistas, soslayando de esta forma otros elementos de juicio más particulares, pero no por ello menos importantes.

La tercera corriente en cuestión privilegia el estudio del estamento militar como actor social que resalta sobre los otros, a los que, en su mayoría, trata de imponer un inmovilismo forzoso. Aquí encontramos investigaciones sobre la historia y el nuevo

profesionalismo de las fuerzas armadas, la extracción social de la tropa, y los Estados de Seguridad Nacional. Olvidar que la acción (y la reacción) de los ejércitos no opera en un vacío social, o incurrir en una suerte de "historia complot", según la cual el monopolio de la violencia -frecuentemente influido por ideologías de factura externa- es el único factor a tomar en cuenta dentro de la cuestión militarista, constituyen dos tentaciones probables que se inscriben en el planteamiento relativo a nuestro comentario. Como se puede observar, el problema es mucho más complicado de lo que a simple vista parece. Con el objeto de desarrollar un modelo pertinente de análisis, en el presente estudio se ha elegido un método que retoma elementos situados tanto en la segunda como en la tercera corrientes descritas, sin que ello implique un deliberado escape del autor rumbo al eclecticismo cómodo y autocomplaciente. En realidad, me parece que ambas interpretaciones no se excluyen entre sí, sino, por el contrario, resultan mutuamente complementarias.

Sobra decir que el militarismo no es, en absoluto, un hecho reciente en los anales de nuestra área geográfica, aunque sus métodos y propósitos sí son distintos: no es lo mismo una dictadura clientelista, eminentemente unipersonal y sin proyecto político-económico consistente, como la de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, que un poder marcial organizado, institucional y provisto de proyectos y doctrinas bien elaborados, cual es el caso de la antecitada dictadura militar brasileña de 1964-1983. ¿En qué se distingue un régimen de otro? Encontrarlo es una de las tareas de este capítulo.

Por otra parte, se ha catalogado con insistencia a los gobiernos militares del Cono Sur como "fascistas". ¿En verdad lo son? Creemos que un análisis comparativo entre ellos y las formaciones sociales fascistas clásicas (Italia y Alemania nazi) puede arrojar luz sobre el tema y, a la vez, abrir espacio para aventurar, en momentos posteriores de reflexión, un esquema de caracterización más o menos fundamentado, del nuevo poder militar en nuestra América. Se pretende llegar a un modelo que al mismo tiempo sea operativo y rebase la etiqueta, la denostación y el estereotipo, útiles tal vez en otros campos, pero no en el del estudio científico de la realidad social.

1. DEL PRETORIANISMO ARQUEOPOLITICO AL PODER MILITAR MODERNO.

El siglo XIX latinoamericano fue abundante en regímenes autocráticos, que existieron más como regla que como excepción. Algunos, sin embargo, tuvieron los indudables méritos de organizar al Estado-nación, fijar sus fronteras, y construir un marco de relaciones sociales de producción distinto al de la época colonial, como lo ejemplifican los casos de Juan Manuel de Rosas en Argentina, Carlos Portales en

Chile, Gaspar Rodríguez de Francia y Francisco Solano López en Paraguay, y la teocracia republicana de Gabriel García Moreno en Ecuador.

Otras autocracias –ciertamente las más comunes– constituyeron simples mezclas de caudillajes mesiánicos o carismáticos con desarticulaciones evidentes de una sociedad civil en germen; de política premoderna con violencia desmedida. De no mediar el uso de la fuerza y el destino de millones de personas, estas dictaduras serían más antologables en documentos cómicos y, en el mejor de los escenarios, folklóricos, que en los que se ocupan de la historia política.

Ejemplos como el ritual velatorio de la pierna de Santa Anna abundan, e incluso hay algunos que exceden a aquél en lo pintoresco, como resulta ser el retrato que Alain Rouquié hace de un gobernante boliviano del último tercio del siglo pasado:

Melgarejo, soldado de infantería a los nueve años, según se dice, luego empleado de escribanía antes de llegar a "general", parece caracterizarse por sus desmesuras, más que por su popularidad entre las masas indígenas. Pero este militarote borracho, asesinado por su cuñado, también es un mestizo que, gracias a su valentía, hace una rápida carrera militar y llega a la cima del poder debido a un golpe de Estado. No está confirmado que haya fusilado a su camisa, ni que en 1870 haya declarado la guerra a Prusia para ayudar a Napoleón III, ni que haya dicho "dejadme gozar" cuando le preguntaron cuál era su programa político, pero el mito descansa sobre anécdotas como éstas...1

Lo que se ha llamado "pretorianismo arquetípico"² florece por lo general en sociedades con predominio agrario. El gobierno del caudillo se sostiene con la ayuda de un ejército cuyo grueso está formado por sectores sociales marginados, dirigidos a su vez por una oficialidad que, a juzgar por su extracción de clase, representa muy a menudo los intereses de grandes propietarios o "notables" vinculados a las oligarquías terratenientes. De ahí que dichos regímenes redunden en defensores del orden primario-exportador, la mayoría de las ocasiones.

Por otro lado, al comenzar el siglo XX, el contexto internacional se encontraba sujeto a profundas transformaciones cuantitativas y cualitativas. Las más notorias son, por un lado, la transición de un capitalismo de esencia industrial a un capitalismo dotado de un nuevo sentido, esta vez monopólico e imperialista, y por otro el inicio de la decadencia británica en favor de un poder que había igualado su producción industrial en 1880, para superarla en 1894: los Estados Unidos.

Con base en la "doctrina" Monroe de 1823 y en el Destino manifiesto enunciado por Sullivan en 1845-1846, los Estados Unidos habían ejercitado a lo largo del siglo XIX una avasalladora expansión territorial que, por las buenas o por las malas, los había hecho extender su dominio desde las originales y poco extensas Trece Colonias del este, hasta las costas del Océano Pacífico.

La guerra hispano-estadunidense de 1898 no representa sino la consolidación del un nuevo imperio, que incorpora a Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba a su órbita. Este hecho marca también un hito fundamental para América Latina: el afianzamiento de la hegemonía norteamericana en la zona. Denomínese *Big Stick* o "diplomacia del dólar", el poderío de esa nación se hará sentir sobre todo en Centroamérica y el Caribe, esto es, en el llamado "Mediterráneo Americano", y se expresa mediante inversiones directas, constitución de modernos enclaves agrícolas destinados a la agroexportación, control del comercio exterior y, por si lo anterior fuera poco, influencia progresiva sobre el aparato estatal.

En efecto, los primeros 30 años del presente siglo son pródigos en intervenciones armadas en lo que Estados Unidos consideraba (y aún considera) un *mare nostrum*. Cuba, Panamá, Haití, Nicaragua y la República Dominicana son sólo algunas muestras de esta política de fuerza.

Antes de retirarse, sin embargo, los *marines* dejaron escuela en las naciones ocupadas; se trataba de fuerzas policiales militarizadas nativas, que funcionaban como garantes de los intereses norteamericanos. Las guardias nacionales o *constabularias* serían, así, actores básicos para la represión de movimientos populares y la creación de Estados-satélites.

Conviene no perder de vista este fortalecimiento de la política estadounidense en América Latina, porque es un hecho que en lo sucesivo estaría presente, de uno u otro modo, en la historia de la región. No todas las veces resulta determinante, pero es un condicionante al que siempre resulta útil tener en cuenta.

Efectuadas las anteriores consideraciones, es más fácil comprender la naturaleza del pretorianismo arqueopolítico, que encaja a la perfección al hablar de regímenes como el de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (1931-1944) Rafael Leónidas Trujillo en Dominicana (1930-1961); Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944); Tiburcio Carías en Honduras (1932-1948); la dinastía somocista en Nicaragua (1937-1979); la larga dictadura de los Duvalier en Haití, derrocada finalmente en 1986; los discontinuos mandatos de Fulgencio Batista en Cuba y, más cercano a nosotros, el persistente reinado de Alfredo Stroessner en Paraguay, iniciado en el año 1954. Con diferencia de matices, todos estos gobiernos son consecuencia tanto de una deformación flagrante del capitalismo, como de un avanzado estadio de unión neocolonial con los monopolios norteamericanos. Comparten, además, las siguientes características esenciales:

En primer lugar, la crisis interna de la sociedad agraria –agudizada ciertamente por las secuelas de la Gran Depresión de 1929, transmitida a estas economías primario-exportadoras por la vía del sector externo– hace necesaria la imposición de una fracción de las clases dominantes, la cual, en defensa del orden que ha permitido su reproducción, asume la consolidación del poder mediante la violencia.⁴

En segundo término encontramos que la mayoría de esas formaciones sociales son predominantemente rurales y agroexportadoras; el grado de industrialización es precario y el Estado-nación, en su sentido más amplio, con las implicaciones de soberanía política y económica que esto conlleva, se encuentra aún en ciernes. Una cosa, sin embargo, es segura: la hegemonía oligárquica.

Como tercer punto, el "Estado-sucursal", al instalarse en el poder, crea una vasta red de administradores, policías y militares que es la que, a la postre, se encarga de reforzar su dominio. Son muy comunes, en este sentido, el enriquecimiento personal y las prácticas clientelistas. Baste recordar que en la República Dominicana casi el 75% de sector asalariado trabajaba en servicios públicos o en las empresas pertenecientes a la familia Trujillo y, por lo tanto, se hallaban prácticamente a su merced; que en la Nicaragua somocista la dictadura controlaba, en 1979, entes que producían alrededor de la cuarta parte del producto interno bruto, o que en el Paraguay stroessneriano la legitimidad se obtiene por la vía de la participación creciente de la población en labores de contrabando.

En cuarto lugar, el pretorianismo arqueopolítico no duda en recurrir al uso sistemático del terror como instrumento de poder y muestra, además, un desprecio absoluto por los derechos humanos, las garantías individuales y la creación científica. Cabe señalar que existen importantes conexiones entre la maquinaria represiva del dictador y el imperialismo.

En quinto lugar —y este es un rasgo determinante— el poder del caudillo es ilimitado: dispone de bienes y vidas, de animales y tierras, de autoridad y deificación personal, de respeto basado en el temor y negocios. La solidez de su dominio torna innecesario el ejercicio del poder por parte de las fuerzas armadas en su conjunto, las que, por lo tanto, no llegan a constituirse como corporación con intereses propios, a no ser que se trate de la defensa compulsiva del *statu quo*.

Finalmente, este militarismo latinoamericano más típico —que se refleja en las ficciones literarias de Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, e incluso Ramón del Valle Inclán— se desarrolla históricamente antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque en ocasiones llega a subsistir después de esa coyuntura, como lo demuestran Trujillo, Somoza, Stroessner o *Baby Doc*.

En síntesis, el pretorianismo arqueopolítico se incubaba en sociedades agrícolas, monoexportadoras y poco diversificadas. El proletariado rural, clase más numerosa, se encuentra poco capacitado para oponer una resistencia tenaz y efectiva ante la dictadura. Los métodos de gobierno, desde el punto de vista de la estructura estatal, son simples y poco sofisticados, pues cristalizan en la represión generalizada, por un lado, y por otro, en formas casi feudales de dominio: el compadrazgo, el clientelismo y la complicidad por la vía de la componenda.

A diferencia del modelo descrito, el nuevo militarismo irrumpe en la región en el periodo posterior a la segunda posguerra, particularmente en las décadas de 1960 y 1970. Su entorno geográfico ya no es Centroamérica y El Caribe, sino el Cono Sur del continente. Las naciones en donde se suscita se caracterizan por poseer una masa crítica más abundante, una composición social apenas mayoritariamente urbana, un movimiento popular pluriclasista y ascendente y una cultura política a menudo dotada de tradición y arraigo.

En algunos casos, como en Chile y Uruguay, nos encontramos con sistemas de democracia representativa bastante avanzados, que serán víctimas de los gobiernos castrenses. En casi todas las ocasiones, el poder se asalta con el beneplácito del Departamento de Estado, aunque las clases que sustentan a estos gobiernos ya no son únicamente oligarquías agrarias, sino -entre otras- fracciones burguesas de estirpe financiera, industrial o comercial con poderosos socios en el extranjero.

Una vez encaramados en el ejercicio del poder, los militares chilenos, brasileños, argentinos y uruguayos, si bien guardan en general buenas relaciones con los Estados Unidos, son igualmente capaces de mostrar cierta autonomía relativa y aun de mantener divergencias con la metrópoli, lo que es muy raro en el pretorianismo arqueopolítico. De este modo, Brasil compra tecnología nuclear a la República Federal Alemana; Argentina hace caso omiso a los llamados estadounidenses para no ocupar las Islas Malvinas, y Pinochet discrepa abiertamente de la política de derechos humanos, bandera de la Administración Carter.

Otro punto divergente de suma importancia es que, en el militarismo conosureño más reciente, las fuerzas armadas toman el poder como institución con intereses y proyectos propios, y no como instrumento de tal o cual jefe militar. Exceptuando a Pinochet, en el resto de los casos existe el relevo de la figura presidencial sin efectos determinantes para el sistema que es capaz de absorber con relativa facilidad estos impactos. Castelo Branco, Garrastazú Medici, Geisel y Batista Figueiredo se suceden en Brasil, de la misma manera que lo hacen Videla, Viola, Galtieri y Bignone en Argentina, en donde tenemos el ejemplo más atrasado de Onganía, Levingston y Lanusse.

Pero ¿acaso la recurrencia al terror como forma de gobierno es común a ambos modelos militares? En efecto, esa es una coincidencia evidente, pero ello no puede asimilarse como único elemento definitorio de la identidad entre uno y otro, pues el terror lo encontramos en sucesos históricos tan disímiles como la Revolución Francesa, el stalinismo, la cacería de brujas macartista, el régimen de Pol Pot en Camboya y, por supuesto, el nazismo.

Vistas las diferencias entre el pretorianismo arqueopolítico y el neomilitarismo conosureño, parece pertinente realizar un estudio comparativo entre éste y los Estados fascistas clásicos.

2. EL NUEVO Y EL VIEJO FASCISMO: ELEMENTOS PARA UNA COMPARACION.

Es obvio que el nazifascismo engendrado en el periodo de entreguerras en Europa y el fenómenos del Estado marcial en América Latina guardan entre sí semejanzas y diferencias como las que pueden tener todos aquellos sistemas políticos analizados bajo el lente del estudio comparado. Para no caer en confusiones al respecto considero necesario efectuar un análisis que separe, en ambas instancias, lo esencial del accidente.

Los elementos accidentales.

Para explicar los rasgos periféricos comunes y disímiles del fascismo clásico y el neomilitarismo latinoamericano, se tomaran los siguientes elementos:⁴ Vías de acceso al poder, función y composición del partido fascista, pautas de legitimidad, valoración del papel del Estado, tiempo histórico, situación económica previa, movilización del sector popular, concentración del poder estatal, supresión de las libertades públicas y las garantías individuales, proscripción de los partidos políticos, asociaciones civiles y sindicatos, fusión de los aparatos ideológico y administrativo del Estado, y reglamentación de la cultura.

En lo que respecta a las vías de acceso al poder, el fascismo clásico no echa mano del golpe de Estado como tal. La marcha de Mussolini hacia Roma al frente de 30 mil "camisas negras" deviene, ante todo, en "un acto de dimisión de las principales fuerzas democrático-liberales de Italia y del Rey, antes que un golpe de Estado", todo ello facilitado por el desgaste de los mecanismos representativos tradicionales y la audacia del autodenominado "Duce".

En el acceso del nazismo, la situación de no recurrencia al golpe de Estado es aún más clara, pues se ubica en el escenario de la descomposición política de la República de Weimar. No es tampoco un golpe de fuerza lo que lleva a Hitler al poder, sino el llamado del presidente Paul von Hindenburg, en enero de 1933, para el gobierno legal de las fuerzas nazis y la consagración del Führer como canciller, de acuerdo a los preceptos constitucionales.

En contraste, el expediente del golpe de Estado y la ruptura violenta del orden preestablecido son claramente detectables en las experiencias latinoamericanas. Brasil en 1964, Chile en 1973, Argentina en 1976 y, en menor medida, Uruguay en 1973-1974, son muestra de ello.

En referencia al partido fascista, encontramos que en Italia y Alemania se instrumenta una contrarrevolución de masas que, agrupando a la burguesía y a los

sectores populares y campesinos, en conjunción con una clase media pauperizada, se alza para bloquear el ascenso de los movimientos populares. La composición de los grupos favorables al *establishment* en América Latina es socialmente similar, aunque aquí encontramos una participación menor, de manera sensible, del proletariado urbano y rural.

Sumado a su composición de clase, el partido fascista cumple en Alemania e Italia —aunque no en otras partes de Europa, como Yugoslavia, Bulgaria o Finlandia— la función vertebral de combatir a la clase obrera, de aplicar el terror y de movilizar a la población en apoyo al régimen. Se observa que el partido fascista no es una agrupación de cuadros, sino de masas.

A contrapelo, en América Latina el partido fascista de masas no existe, sino que es reemplazado por la institución militar. Su propuesta política no sólo no acude al apoyo de las masas, sino que lo evade. En este sentido es perfectamente comprobable que la existencia de amplios sectores pequeño-burgueses e incluso populares favorables a las experiencias autoritarias en Chile y Argentina, no quiso ser enjaezada a su favor por las cúpulas castrenses que se habían encaramado al poder en esas naciones.

Otro punto de comparación donde se encuentran situaciones dispares, es el que se refiere a las pautas de legitimidad. Hitler y Mussolini presentan a sus respectivos pueblos nacionalismos cuya intención última encuentra sus raíces en un proyecto de expansión imperialista, entendida ésta como un plan de engrandecimiento colonial que busca ampliar mercados y controlar fuentes de materias primas accesibles. El expansionismo germano, justificado en la presuntamente científica teoría del espacio vital y el nazismo implicaban un nacionalismo no sólo retórico sino muy práctico, efectivo y redituable.

A contracorriente, el nacionalismo esgrimido por el poder neomilitar latinoamericano —hecho sinonimia con el anticomunismo y la xenofobia— casi siempre es puramente discursivo, (quizá con la excepción de la variable expansionista del “Sub-imperialismo” brasileño) en la medida que los resortes fundamentales de la independencia económica y la soberanía nacional se ven paralizados en relación directa con la apertura externa que suelen practicar estos regímenes.

Por lo que hace la valoración del papel del Estado, el fascismo clásico otorga a éste un rol desmedido, pues realiza una desvalorización total del individuo frente a dicha institución. “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, era la sentencia operativa de Benito Mussolini. En cambio, bien podría decirse que la vivencia latinoamericana sacrifica al individuo y al Estado en favor de su lealtad sobreideologizada al mundo de raigambre “occidental y cristiana”, con el recurso adicional de una práctica económica similar en la teoría a la escuela de Manchester pero distinta a ella en la práctica.

En el Cono Sur, como se verá más adelante, el Estado se autolimita en la esfera productiva y, aún más, lanza severas cruzadas en favor de la privatización empresarial, que en la práctica se traducen en enajenación de las empresas públicas y desnacionalización creciente del aparato productivo. Es decir, el principio de subsidiariedad del Estado opera en la práctica realizando las inversiones estatales en las ramas menos dinámicas de la economía, o bien acudiendo al rescate de la empresa privada allí donde ésta ha sido incapaz de afrontar por sí misma a las fuerzas del mercado "libre". La razón última del manejo económico del Estado neofascista es la vieja fórmula: socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias.

En contraste con la atonía del gobierno en las esferas de la producción y el bienestar social, el Estado militar en América Latina favorece una hipertrofia del aparato represivo: la "mano invisible" en lo económico, la mano de hierro en lo político y social.

Regresando al tiempo histórico, los fascismos europeos, al igual que la mayoría de los pretorianismos arqueopolíticos ya enunciados, se suscitan en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de una cerrada competencia entre los distintos capitalismos monopolísticos que se disputan mercados y concesiones. Operan, además, como reacciones ante la amenaza que les representa la Revolución Rusa.

Por su parte los fascismos latinoamericanos posteriores a la segunda conflagración bélica mundial, florecen en medio de la expansión indiscutible del capital transnacional y de un bipolarismo que, en Occidente, hace suya la defensa del "mundo libre". En América Latina, el fascismo de nuevo cuño obtiene un poderoso catalizador frente a la amenaza que representa, en su concepción, la Revolución Cubana de 1959.

Existen también similitudes difíciles de soslayar entre los sistemas fascistas de entreguerras y los de América Latina en las décadas de los sesentas y los setentas.

No es casual, en consecuencia, que la situación económica previa a la toma de poder en los dos casos resulte muy similar. En ambas oportunidades históricas, el gobierno se asume en situaciones de profunda crisis económica, manifestada sobre todo en los altos índices de crecimiento de los precios. Abundan sobre el particular anécdotas en torno a la inflación weimariana, mientras que los datos para Sudamérica son contundentes: en el momento de los golpes de Chile en 1973 y Argentina en 1976, la inflación superaba el 500%, parecía inminente una moratoria en el pago de servicios de la deuda externa, y la inversión foránea había descendido a los niveles más bajos.

El asalto al poder en ambos casos se ve antecedido, por otra parte, de intensas movilizaciones del sector popular. Frente a éstas, el fascismo aparece como una política antiproletaria, antiliberal, anticomunista y antipluralista que percibe a la democracia formal como el peldaño que el socialismo utiliza como instancia previa a su toma de la hegemonía estatal.

Una esfera en la que también coinciden los dos sistemas en cuestión es la de mayor concentración de poder; la eliminación de los poderes seccionados a la manera de Madison y Montesquieu; la prescindencia de las legitimaciones democrático-burguesas y, frente a ello, el reclutamiento de los cuadros gubernamentales entre las élites, con objeto de asegurar lo que algunos célebres teóricos llamaban "la conducción de los mejores" en la política y la economía.

La supresión de las libertades públicas, las garantías individuales, los partidos políticos y los sindicatos es otro rasgo que comparten los dos fascismos, al igual que la simbiosis de los aparatos ideológicos y administrativos del Estado, con un manejo muy bien estructurado de la información. "Una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad", decía Goebbels, y sus émulos sudamericanos han retomado a la perfección ese aserto. El perfeccionamiento permanente, el uso generalizado y el control riguroso de la *mass media*, dice Kaplan, permiten realizar tareas y lograr objetivos que se plasman, sobre todo, en la

...supresión, manipulación y distorsión de la información pública y privada. Se ocultan o falsifican los datos significativos y los temas sustantivos que son o deberían ser importantes para la sociedad, los grupos o los individuos. Se trivializa la información (énfasis en lo catastrófico, lo criminal, lo sexual, lo deportivo), y se degrada la importancia relativa de aquella en favor de los intereses privilegiados en el sistema (consumismo; símbolos de prestigio; exaltación de las realizaciones efectivas y sobre todo ficticias del régimen; legitimación de la estructura de poder y de sus métodos; descrédito de los modelos alternativos).⁶

Para redondear los rasgos accidentales coincidentes, en ambos casos se instrumenta una reglamentación de la cultura y un asedio constante a los que se consideran centros reales y potenciales de crítica. No son muy disimiles, en consecuencia, las actitudes asumidas por el general Millán Astray cuando, en la Universidad de Salamanca, a la sazón dirigida por Miguel de Unamuno, gritó: ¡Viva la muerte, muera la inteligencia!, y la del decano interventor responsable del cese de 1 350 docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que afirmó, en declaraciones a la prensa efectuadas el 6 de diciembre de 1974, en alusión a los nuevos desempleados: "que se vayan a enseñar Freud a París y Marx a Moscú".⁷

Lo esencial.

Puede argumentarse, con sobrada razón, que los rasgos anteriores no son determinantes para afirmar el carácter fascista de las experiencias neomilitares latinoamericanas. Estimamos, sin embargo, que la comparación ha despejado el

camino para entrar en el estudio de los rasgos esenciales de ambas formas de gobierno.

De este modo, hay que reconocer que, como apunta el profesor Eberhardt Hackethal "no todo ejercicio terrorista del poder significa fascismo. *El factor decisivo es el carácter de clase*".⁸

Lo esencial está circunscrito, en consecuencia, no tanto a las formas, tiempos y lugares sino a las causas y aún más, a determinar *quién ejerce el dominio sobre quién*. Es decir, lo que define en última instancia al fascismo o a cualquier sistema político es su esencia clasista, la organización de las formas de propiedad, y las relaciones de producción que se entablan en su seno. Para explicar lo que a mi juicio resulta una apropiada concepción de los rasgos centrales del fascismo, me permito la cita *in extenso* de Agustín Cueva, quien destaca los siguientes elementos de ese régimen:

1. Se trata no solamente de una dictadura burguesa, sino de una dictadura en la que el sector monopólico tiene el predominio omnímodo, incluso entre los sectores burgueses no monopólicos.
2. Esta dictadura adquiere un carácter terrorista hasta el punto de producir un cambio cualitativo en la forma de dominación y consecuentemente en la forma de Estado, operando una ruptura radical con las formas democrático-burguesas.
3. Esta forma de dominación se ejerce en lo fundamental contra la clase obrera, que la burguesía identifica como su enemigo principal.
4. Tal dictadura aparece como "el remedio infalible en donde el capitalismo atraviesa por una crisis y teme un colapso" (Togliatti).⁹

Ensamblando los elementos citados, se encuentra la definición que Jorge Dimitrov y otros marxistas han realizado del fascismo, la cual destaca, de manera muy clara, que "el fascismo es la dictadura terrorista que los sectores más reaccionarios del capital monopólico ejercen sobre la clase obrera primordialmente, en situaciones de crisis o cuando por cualesquiera otras circunstancias sienten amenazado su sistema de dominación".¹⁰

Queda claro entonces que el fascismo constituye una forma de gobierno específica del sistema capitalista. En este punto resulta legítimo preguntarse, sin embargo, si las diferencias accidentales que se han delineado —como la falta de apoyo de las masas, la inexistencia del partido fascista o la omisión de un proyecto expansionista dentro de las dictaduras latinoamericanas— no son finalmente un obstáculo para declarar su carácter fascista.

La respuesta, clave para el modelo que se propone, es negativa, pues estas divergencias encuentran su raíz en la condición dependiente que signa a América Latina entera. Es un hecho que la penetración del gran capital financiero y productivo

ha ido conformando en Nuestra América un segmento monopólico que, en conjunto con la fracción más internacionalizada del capital nativo y algunos sectores de la alta burocracia civil y militar, se transforma en un bloque interno-externo de poder, que a su vez "constituye el eje de una dominación eventualmente fascista".¹¹

Así las cosas, el "gobierno de toda la burguesía", que posibilitó durante el periodo de la industrialización sustitutiva de importaciones el establecimiento de Estados de compromiso, e incluso de gobiernos populistas, es sustituido por regímenes que, para asegurar la reproducción del bloque interno-externo de poder, no vacilan en segregarse a las fracciones no monopólicas de la burguesía (i.e. el "empresariado nacional") y a los grupos sociales que en el pasado fueron copartícipes de su influencia en el interior del Estado.

Sobre el carácter terrorista de los fascismos latinoamericano y europeo, es bien poco el esfuerzo que hay que hacer para demostrarlo. Los desaparecidos argentinos, los encarcelados uruguayos o los brasileños asesinados compartieron un destino común a las víctimas de los camisas negras en Italia o de la GESTAPO en la Alemania hitleriana.

El siguiente punto de la definición, según el cual el fascismo se ejerce en lo fundamental contra la clase obrera, parece también incuestionable si atendemos a la pauperización absoluta que la política económica de los regímenes militares consoñados representó para los asalariados. En Argentina, por ejemplo, se observa que los ingresos percibidos por estos fueron de 31 mil 728 millones de dólares en 1974 y de 22 mil 400 en 1979, mientras que los beneficios recibidos por el capital pasaron de 34 mil 372 a 45 mil 560 millones de dólares en el mismo periodo. En Alemania nazi, por su parte, la situación no fue muy distinta y "...a raíz de la disolución de todas las organizaciones obreras... el índice oficial del salario nominal-hora para los hombres y las mujeres de las minas, la industria y los transportes, bajó de 84 en 1932 (base 100 en 1929), que es el fondo de la crisis a 80 en 1937. La baja ...no dejó nunca de existir y es particularmente característica, puesto que se produce en periodos de auge económico."¹² La ofensiva contra la clase obrera es claramente económica, aunque también se da en lo político.

Respecto al último elemento de la definición aportada por Cueva, en donde éste cita el pensamiento de Togliatti acerca de la aparición del fascismo en el contexto de las crisis donde el capitalismo teme un colapso, es muy claro que en los setenta, en los países de América del Sur, las fuerzas autoritarias sentían que el caos generalizado crecía con tal rapidez que amenazaba incluso la supervivencia de la condición capitalista de la sociedad. En Chile la actividad del gobierno de Allende y los partidos políticos; en Argentina el Movimiento Montoneros y el ERP y en Uruguay las organizaciones guerrilleras (MLN-Tupamaros) y los movimientos legales de izquierda (Frente Amplio), fueron los pretextos esgrimidos por los militares para tomar el

poder. El ascenso de Mussolini está precedido de la ocupación de latifundios por campesinos, la formación de soviets y de la toma obrera de numerosos complejos industriales en Milán y Turín, que quedaron bajo control de "guardias rojos", y el de Hitler de una considerable iniciativa política y sindical acumulada por las fuerzas de izquierda. En ambos episodios —el latinoamericano y el europeo— existe un alto grado de actividad política de los sectores populares, que aparecían como agentes de una seria amenaza para la preservación del orden social en vigor. Es por esta razón que la toma fascista del poder y la eliminación de la democracia liberal se plantea también como una derrota política de los sectores más avanzados de la clase trabajadora. No debe perderse de vista, además, que los fascismos surgen, como ya se ha comentado en este y en muchos otros trabajos, en medio de profundas crisis económicas.

Si hay algo que resume todos los argumentos anteriores, es la afirmación de que, en consideración a ellos, bien puede hablarse de un nuevo proceso político-económico en América Latina, al que se puede denominar con toda propiedad *fascismo dependiente*. Vislumbrar, describir y analizar cómo opera en la práctica y cuál es la política económica que instrumenta; explicar la relación que emerge entre la espada y la tecnocracia, y avanzar en una caracterización común de este proceso en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, es la tarea que se intenta en el siguiente acápite.

3. HACIA UNA CARACTERIZACION DEL FASCISMO DEPENDIENTE EN AMERICA LATINA.

Si es correcto que las sociedades se mueven en el nivel de la superestructura jurídico-política, de la superestructura ideológica y de la estructura económica, que en *última instancia* determina a las demás, entonces nuestro análisis del fascismo dependiente no puede menos que atender a esas tres variables.

El proyecto fundacional de los militares y su instrumentación jurídico-política.

El primer punto de este análisis descansaría en el hecho de que los militares, tomado el poder después del *putsch*, imbuyen a su ejercicio gubernamental el carácter de una cruzada para salvar "salvar a la patria", a la que creen en peligro frente a todo género de acechanzas, que originan y estimulan su franca descomposición.

La consecuencia de esta visión negativa de la realidad social es la propuesta de un nuevo orden fundacional, guiado por una nueva racionalidad, que en todo caso habría de resultar autoritaria, violenta y vertical. La cúpula militar siente que su mandato se sintetiza en "normalizar la economía" y restaurar —pero más que nada, recrear— un ambiente pacífico que consiga obtener del capitalismo internacional una renovada

confianza, y de la clase obrera nativa un inmovilismo total en cuanto que fuerza política.

La consecuencia inmediata del nuevo proyecto fundacional recae en la degradación del fenómeno jurídico y un distanciamiento evidente de las nociones liberales de Estado y Derecho. Las dictaduras fascistas no reconocen sino sus propios valores, y por ende no reconocen cortapisa alguna para su poder. Las constituciones anteriormente vigentes se derogan y, en la mayoría de los casos, se pasa a gobernar mediante decretos- ley. Observa Marcel Niedergang:

Es muy conocida la ocurrencia: cuando tocan a tu puerta a las cinco de la madrugada, puede tratarse del lechero o de la policía. Si es el lechero, vives en un régimen democrático. Si es la policía estás bajo el dominio de una dictadura. De hecho la diferencia es más sutil. Los estados liberales pueden muy bien enviar a la policía a las cinco de la mañana si las leyes escritas lo autorizan. No la enviarán a tu casa a las cuatro, si los ordenamientos lo prohíben expresamente. Las dictaduras ni siquiera reconocen esta distinción capital que ofrece al ciudadano un último recurso contra la arbitrariedad.¹³

Esa degradación del fenómeno jurídico se expresa, quizá aún con mayor nitidez, en la esfera de lo político, donde el fascismo dependiente disuelve los parlamentos (como en Argentina y Chile) o les confiere funciones extremadamente secundarias (como en Brasil); degrada, interviene y maniatada al Poder Judicial; proscribire los partidos políticos en cuanto que "erosionan la unanimidad nacional"; agrede a la prensa crítica, e instrumenta un asalto literal a universidades y centros de investigación.

Las fuerzas armadas no sólo no reconocen vallas a su capacidad coactiva ni a su permanencia en el poder, sino que intentan desde éste una militarización intensiva de la vida pública, de la actividad civil y de todos los ámbitos del acontecer nacional. La represión se universaliza, en consecuencia, y adquiere dimensiones muy amplias. "Es a la vez psicológica, física, cultural, ideológica, social y política. Se ejerce sobre todos los aspectos y problemas de la existencia colectiva e individual, contra los cuerpos y las conciencias, las prácticas y las instituciones sociales", recuerda Marcos Kaplan.¹⁴ El ejército, como corporación, es actor principal en desapariciones, asesinatos, torturas. Este y otros segmentos del aparato represivo del Estado asumen, en Sudamérica, la fórmula que el porfiriato mexicano, cien años antes, usaba para deshacerse de quienes no le eran afines: destierro, encierro o entierro. En el pequeño Uruguay, los gastos militares del gobierno se disparan, en los setenta, hasta el 50% del presupuesto total; los cinco mil presos políticos, quince mil ciudadanos en libertad vigilada y alrededor de sesenta mil personal que han pasado por las cárceles certifican a la perfección el buen funcionamiento de la maquinaria inquisitorial. América Latina deja de ser tierra de inmigración y se convierte en expulsora de cuadros calificados perseguidos por el fascismo dependiente. Para 1977 un millón de chilenos vivían fuera

de las fronteras de su país, lo que representaba una cifra aproximadamente igual al 10% de su población.¹⁵ Reclamar cualquier derecho equipara al ciudadano común con el subversivo desde la óptica del poder militar, que convierte en víctimas a los más diversos grupos sociales, desde trabajadores sindicalizados hasta residentes extranjeros, pasando por militantes de partidos reformistas o revolucionarios, campesinos, minorías étnicas e intelectuales críticos.

Es de añadir que, bajo tales medidas coercitivas, las mediaciones efectivas entre el individuo y el Estado se desvanecen. Nociones como pueblo, ciudadanía y representatividad se soslayan o posponen, mientras el régimen pasa a hacer del miedo y la resignación los principales pilares de su incierto consenso. Lo público, así, se evade, y la privatización cada vez más aguda de la vida cotidiana cristaliza en una frase pronunciada una y otra vez en Chile, en Uruguay, en Argentina: "no te metás".

Cuando los conflictos llegan, pese a todo, a tocar superficie, son presentados por la élite burocrática, técnica y política del fascismo como cuestiones de naturaleza "económica y científico técnica, no social, política e ideológica".¹⁶

No obstante, la fachada de fuerza que ostentan los fascismos dependientes no alcanza a ocultar su debilidad de fondo. Siendo su proyecto de muy largo plazo, sólo pudieron permanecer en el gobierno, en el mejor de los casos (Brasil), veinteaños. No es poco, sobre todo si se toma en cuenta la capacidad destructiva que mostraron, pero tampoco es mucho si recordamos que la idea de la eternidad no les disgustaba en absoluto. No podían durar demasiado tiempo en la carencia de mediaciones, es decir, sin construir y mantener un consenso sustentado más en la hegemonía que en la violencia.

Sabían estos regímenes que siempre existe el expediente de intentar el dominio con la democracia, pero les parecía una idea demasiado audaz. Al practicar ese valor, estaban conscientes de que, como el aprendiz de brujo, podían desatar fuerzas que no únicamente liquidasen al fascismo, sino a su *ultima ratio*, la organización social capitalista. Y ¿no era acaso esto lo que habían intentado evitar cuando accedieron al poder?

La vertiente ideológica de la dominación fascista dependiente.

Una de las justificaciones más usadas por los uniformados para hacerse cargo del aparato estatal era el "restablecimiento del orden", argumento que encuentra un expediente privilegiado en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), ideología oficial del fascismo en América Latina.

Es necesario, para explicar los componentes de la DSN, reseñar brevemente sus orígenes históricos. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la concepción predominante en las relaciones internacionales pasó a ser la bipolaridad, o sea el

enfrentamiento entre el Este socialista y el Oeste capitalista. En América Latina, coto de influencia directa de uno de los poderes en lucha, la tarea de las fuerzas armadas se redefine y actualiza en función de la pertenencia del área al "mundo libre, occidental y cristiano".

Es la Guerra Fría el momento histórico en que la DSN nace. Por su contenido, la doctrina es una concepción militar presuntamente científica que, mediante una amalgama *sui generis*, presenta reminiscencias de la geopolítica de Nicholas Spykman, Karl Haushofer y Halford Mackinder, mezcladas con nociones de seguridad y desarrollo que persiguen a toda costa la estabilidad de la estructura estatal.¹⁷

Para los exponentes latinoamericanos de esta teoría (Golbery da Couto e Silva en Brasil, Osiris Villegas y Benjamín Rattenbach en Argentina, y Augusto Pinochet en Chile, entre otros) los enemigos de Occidente no sólo ejercen sus acechanzas desde el exterior, sino que primordialmente se encuentran activos en el interior de las fronteras latinoamericanas. En esta perspectiva, los males de la sociedad encuentran su origen en el "enemigo interno", encarnado por la subversión en sus más variadas formas. La "subversión", como se puede imaginar, es un concepto bastante amplio que es asimilado con cualquier muestra de pensamiento o acción independientes.

En la práctica de la DSN, la paranoia antisubversiva encuentra su génesis en una concepción organicista donde las fuerzas armadas asumen la función de cabeza de un cuerpo social enfermo, al que es urgente someter a una cirugía mayor para extirparle el tumor que lo amenaza de muerte. La intervención quirúrgica requiere, desde luego, erradicar todos los conflictos que puedan distraer al país de su tarea primordial:

El instrumento de acción estratégica en esta era de guerras totales sólo puede ser el que resulta de la integración de todas las fuerzas nacionales, de todos los recursos físicos y humanos de que dispone cada nación, de toda su capacidad espiritual y material, de la totalidad de medios económicos, políticos, sociales y militares, en suma, de su poder nacional.¹⁸

Todos estos hechos, juntos y separados, culminan en que el Estado y el gobierno, en nombre de los intereses superiores de la patria que combate al enemigo interno, deben estar intervenidos por el ejército y sus aliados de la tecnoburocracia civil. Al respecto, el religioso Joseph Comblin¹⁹ apunta, en un escrito ya clásico sobre el tema, lo siguiente:

En realidad, los autores (de la DSN) hablan en términos elevados de libertad y democracia: son objetivos nacionales permanentes de gran valor. Son elementos permanentes de la herencia del Occidente. Pero, tratándose de la política, se habla más de la lucha por la libertad y la justicia que de su ejercicio. La lucha por la libertad y la democracia requiere que se prescindiera de ellas. En nombre de la libertad, la seguridad requiere el sacrificio

momentáneo de todas las libertades. Claro que el sacrificio se presenta como temporario y que la libertad prometida es tanto más deseable cuanto más importantes hayan sido los sacrificios consentidos. Sin embargo no aparece claramente cómo el sacrificio de la libertad podrá llevar un día al restablecimiento de la libertad, sobre todo si la guerra es concebida como permanente y total.

Las necesidades de la guerra permanente hacen que el objetivo de la libertad y la democracia se pierda en lo indefinido de la utopía intemporal. En lo concreto de la historia lo que prevalece son las necesidades de la seguridad nacional.

No es ajena, en el proceso de adopción de la DSN por los medios castrenses latinoamericanos, la indoctrinación de éstos por las ideas estratégicas facturadas en Estados Unidos. La propia DSN es un planteamiento originalmente norteamericano, pues se elaboró en el Colegio Nacional de Guerra, que es el instituto de estudios militares más prestigiado en el medio estadounidense. Instrumentos como los programas de ayuda militar (PAM), la venta de armas, el envío de expertos "antisubversivos" y, en un plano más didáctico, el adiestramiento de oficiales latinoamericanos en colegios como la ya desaparecida Escuela de las Américas en Fort Gulick, Zona del Canal de Panamá; la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas; la Academia de Guerra Naval de Rhode Island, y la International Police Academy de Washington D.C., entre otras, se han venido utilizando para transmitir tanto la visión de la Guerra Fría en su vertiente estadounidense, como las doctrinas de contrainsurgencia a los milites de América Latina.

Así, entre 1951 y 1975, 71 mil 651 soldados latinoamericanos habían recibido entrenamiento en las diferentes escuelas militares y policiales estadounidenses.²⁰ De acuerdo con los conocedores del tema, los datos más fehacientes en relación con la más conocida de esas instituciones, la United States Army School of the Americas (USARSA = Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos) ubicada en Fort Gulick, Zona del Canal, Panamá, fijan en aproximadamente 46 mil el número de graduados en cursos especiales de todos los ejércitos de América Latina y el Caribe desde 1951 hasta el 30 de Septiembre de 1984, fecha en que de acuerdo a los tratados Torrijos-Carter del 7 de septiembre de 1977, Estados Unidos entregó el establecimiento a la República de Panamá.

A pesar de su evidente importancia, creemos que este elemento, el llamado "pentagonismo", resulta insuficiente para explicar la dinámica profunda del neofascismo latinoamericano. Puede ser un acelerador, pero muy difícilmente es motor del proceso. Por ello, hablar de un Estado de Seguridad Nacional o de Contrainsurgencia parece excesivo para explicar el militarismo consurenado de los sesenta y setenta. No es ocioso recordar que:

la acción imperialista en favor del fascismo presupone sin embargo que las tendencias de esta índole, sus prerequisites y sus realizaciones, han ido surgiendo por la iniciativa y la acción y bajo el liderazgo de la élite oligárquica y sus aliados internos. El imperialismo puede mucho pero no es omnipotente ni creador de lo nuevo a partir del vacío. Estimula y fortalece, sostiene y aprovecha, coorganiza un proceso y un producto políticos de tipo fascista que de todas maneras emerge y avanza a partir de... factores, componentes y mecanismos... que son primordial y esencialmente internos.²¹

Por su parte los ejércitos, factores internos de poder que persiguen intereses corporativos específicos, responden ante todo a la dinámica social, en la cual la dependencia exterior –y el planteamiento ideológico-estratégico que de ella se derivan– son elementos condicionantes, pero no explicativos.

El neoliberalismo y la política económica del fascismo dependiente.

Antes de detallar cualquier descripción de la política económica de la generalidad de este tipo de regímenes, es menester referirse a la coalición clasista que implementa y usufructúa dicha política, al contexto de crisis económica mundial (nuevamente, la excepción sería el Brasil de 1964) en que se encuentra inmersa, y a los principios básicos del neoliberalismo de la Escuela de Chicago, corriente en donde se inscriben los postulados teóricos de aquella. Respecto al primer punto, para nadie es un secreto que el bloque interno-externo de dominación está constituido por los sectores más internacionalizados de la burguesía nativa, sus socios del exterior –sobre todo el capital financiero– y las fuerzas armadas que, en conjunto con la tecnocracia civil, se encargan de dar al proyecto formas concretas. No resulta extraño, por lo tanto, que la política económica sea eminentemente funcional a los intereses de estos sectores.

En segundo término, la gestión comercial, industrial, financiera, crediticia, etc. del fascismo dependiente no opera en el vacío, sino rodeada de una situación de cambio estructural del sistema económico internacional, que se manifiesta desde mediados de la década del sesenta, y que produce recambios en la división internacional del trabajo cuya lógica esencial tiende a transferir “la producción de ramas relativamente atrasadas –desde una perspectiva tecnológica y económica– desde los países dominantes a los países dependientes reservándose a los primeros aquellas ramas más dinámicas y por tanto más rentables”.²²

En la nueva situación las economías menos desarrolladas comienzan a absorber la producción de los segmentos dinámicos, elaboradores de bienes de consumo durable, escasos renglones de bienes de producción y, en especial, materias primas de origen industrial. Dentro de la nueva división internacional del trabajo, precipitada por la crisis económica general, todas las naciones deben replantear su inserción en el

sistema y buscar las ventajas comparativas que les confieren un nivel adecuado de competencia en el mercado internacional. Los fascismos dependientes enfrentan el reto, *grosso modo*, modernizando su producción agropecuaria; también incidiendo a la baja sobre el costo del capital variable, esto es, de la fuerza de trabajo, y facilitando la penetración del capital extranjero en sus estructuras económicas. Volveremos sobre el particular más adelante.

El corpus teórico que utiliza el fascismo dependiente para racionalizar su política económica es, sin duda, el neoliberalismo económico, cuyo exponente más calificado es el profesor Milton Friedman de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Adoptado por los sectores tecnocráticos civiles del fascismo dependiente, el paradigma friedmaniano monetarista recupera una visión verosímil del pasado, propone un futuro posible y previsible, y se reproduce en las fracciones dominantes de la burguesía. En su perspectiva, es necesario reestructurar la economía y la sociedad, para acercarla al espejo de la eficiencia neoclásica, contemplada desde la doble óptica de la invocación al pasado y la proyección del futuro. El librecambismo ambiente se pretende aséptico, neutral, científico, medido, inteligente, ordenado, eficiente, práctico e infalible. "Esa corriente —apunta Guillermo O' Donnell— se coloca en el centro de las grandes simplificaciones y de las seguridades regresivas que los cuerpos sociales suelen buscar en ocasiones semejantes (de crisis). Su discurso tiene la simplicidad del manual; como meta, una economía eficiente, basada en ventajas comparativas, con mercados en equilibrio y sin precios "artificiales"²³ y, como corolario en América Latina, atacar de raíz la inflación.

Reducción del déficit fiscal, liberación de precios, eliminación de subsidios y aranceles, reducción del tamaño del Estado, garantías a la inversión privada y emisión restringida de circulante para alejar al fantasma de la inflación: el canto del monetarismo ortodoxo se puede recitar como una letanía gratificante para los ministros civiles del fascismo dependiente (Jorge Cauas y Sergio de Castro en Chile; D. Netto en Brasil; Vegg Villegas en Uruguay, Krieger Vasena y Martínez de Hoz en Argentina), pero no para quienes cotidianamente lo padecen.

Los esfuerzos estabilizadores —gradualistas o de *shock*— que esos técnicos enderezan, engarzan a la perfección con el sistema monetario y financiero internacional, y con los circuitos de la órbita especulativa planetaria, unificados todos ellos en su apelación a la "mano invisible" del axioma smithsoniano.

Revisados los puntos anteriores, es más propicio el terreno para abordar la estrategia de política económica propiamente tal que adoptó el fascismo dependiente.²⁴

Cabe anotar en primer término, que este proyecto conlleva a la desnacionalización creciente de la economía. En Brasil, en 1972, a sólo ocho años de que el fascismo tomara las riendas del Estado, los consorcios transnacionales controlaban el 72.3% del

capital más reservas de las diez empresas más importantes del sector de producción de bienes de capital, el 78.3% en el sector de bienes de consumo durable y el 53.4% en el de bienes de consumo no durable.²⁵ Aunque no en todos los casos posteriores el flujo de capital fue tan abundante, la desnacionalización económica es parte vertebral de la política económica de los gobiernos militares en Argentina, Chile y Uruguay, al menos en las intenciones originales.

La segunda medida a destacar, relacionada a la vez con la anterior, es el desmantelamiento del capitalismo del Estado, en donde a la desestatización de empresas acompaña la consabida desnacionalización. Las tendencias autonomistas quedan así completamente sepultadas, máxime cuando las medidas de apertura indiscriminada a la competencia trasnacional terminan por liquidar las posibilidades de un desarrollo económico más acorde a las necesidades de los distintos países.

En tercer lugar, la pauperización absoluta de la clase obrera se utiliza como un medio para la extracción de superganancias, a consecuencia de lo cual los trabajadores dejan de percibir miles de millones de dólares. Esto lleva, desde luego, a que la pirámide social amplie cada vez más sus bases y cada vez menos su cúspide. En relación a 1963, el salario real había perdido en Brasil el 37% de su poder adquisitivo en 1976, mientras que las ganancias monopólicas crecían geométricamente. En Chile, con el gobierno de la Unidad Popular, empleados y obreros recibían el 62.9% del ingreso nacional total y los sectores propietarios se adueñaban del 37.1%. Dos años más tarde, en 1974, la situación había cambiado por completo: 61.8% para el capital y 38.2% para el trabajo.²⁶ En Uruguay y Argentina el poder de compra de los salarios y la tajada de los trabajadores dentro del producto nacional bruto también disminuyó sensiblemente.

Como cuarto punto, tenemos que, con una visión muy semejante a la del darwinismo social, la política económica del neofascismo está explícitamente orientada a desencadenar un proceso de selección natural en donde únicamente sobrevivan los sectores "internacionalmente competitivos". En realidad, esta política conduce a una crisis de realización y de inversiones que a la postre facilita la concentración y centralización de capitales. Los talleres artesanales, las empresas medianas y pequeñas y los sectores de servicios no monopólicos no pueden sostener esta competencia, y terminan siendo absorbidos por los grandes emporios.

Otra de las grandes líneas de la política económica es la modernización del sector agrario, con el objetivo, por un lado, de proveer de "bienes alimentos" baratos que disminuyan indirectamente el precio de la fuerza de trabajo, y por otro, de aprovechar la ventaja comparativa de la producción y exportación de artículos primarios. Esto se logra mediante devaluaciones que fomentan la producción agrícola, engrosando las ganancias de los grupos terratenientes. Se eliminan las trabas al comercio exterior agropecuario, se reducen al máximo los subsidios estatales en el agro y, en algunos

casos, se da marcha atrás en los procesos de reforma agraria previamente emprendidos.

Finalmente, como sexto punto, la política económica del neofascismo despliega importantes esfuerzos antinflacionarios que se estructuran a partir de las ya aludidas tesis monetaristas: reducción del gasto público, liberación de precios, controles salariales y toda la serie de medidas propias del librecambismo contemporáneo.

Tales son, a grandes rasgos, las líneas principales que en lo jurídico-político, en lo ideológico y en lo económico, orientan al régimen que hemos designado indistintamente como neofascismo, neomilitarismo latinoamericano o, con más insistencia, fascismo dependiente.

Se ha hecho énfasis en lo más general, aunque en cada país el proceso toma características propias. Antes de pasar a revisar lo específico del fascismo dependiente en Argentina, creemos que es necesario construir un marco histórico que explique las raíces políticas, económicas y sociales que facilitaron su implantación en ese país entre 1976 y 1983, porque, como se verá, los ecos de este régimen vienen del pasado y se proyectan aún hacia el futuro.

NOTAS CAPITULO I

¹ Alain Rouquié, *El Estado militar en América Latina*, México, Siglo XXI, 1984, pp.71-72.

² El término es de Alain Rouquié y aparece en *ibidem*.

³ Cfr. Gérard Pierre-Charles, "Fascismo y crisis de la dominación imperialista", en *Nueva Política*, vol.I, no.1, enero-marzo de 1976, pp.165 y ss.

⁴ Cfr. Luis Maira, "Notas para un estudio comparado entre el Estado fascista clásico y el Estado de seguridad nacional", en ILDIS, *El control político en el Cono Sur*, México, Siglo XXI, 1980, pp.40-80.

⁵ *ibidem*, p.46.

⁶ Marcos Kaplan, "¿Hacia un fascismo latinoamericano?", en *Nueva Política*, vol.I, no.1, enero-marzo de 1976, pp.137-138.

⁷ Cit. en Latin American Studies Association, *La represión en Argentina, 1973-1974. Documentos*, México, FCPyS-UNAM, 1978, p.181.

⁸ Eberhardt Hacketal, "Fascismo y lucha antifascista", en *Nueva Política*, vol.1, no.1, enero-marzo de 1976, p.181.

⁹ Agustín Cueva, "Fascismo y sociedad en América Latina", en Gabriel Gaspar (comp.), *La militarización del Estado latinoamericano (Algunas interpretaciones)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, s/f, p.17. La versión original de este ensayo se publicó en la *Revista Mexicana de Sociología*, vol.39, núm.2, abril-junio de 1977.

¹⁰ *Ibidem*, p.17.

¹¹ *Ibidem*, p. 19.

- ¹² Charles Bettelheim, cit. por Alvaro Briones, *Economía y política del fascismo dependiente*, México, Siglo XXI, 1978, p.278.
- ¹³ Marcel Niedergang, "El fascismo en América", en *Nueva Política*, vol.I, no.1, enero-marzo de 1976, p.84.
- ¹⁴ M. Kaplan, *Op. cit.*, p.142.
- ¹⁵ Raúl Ampuero, "El nuevo poder militar", en *Nueva Política*, vol.II, nos.5-6, abril-septiembre de 1977, p.277.
- ¹⁶ M. Kaplan, *Op. cit.*, p.134.
- ¹⁷ Un estudio bastante amplio de todas las vertientes de la Doctrina de la Seguridad Nacional se puede encontrar en Antonio Cavalla Rojas (comp.), *Geopolítica y seguridad nacional en América*, México, UNAM, 1979, 453 pp.
- ¹⁸ General Gustavo Alvarez Aguila, jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, cit. por Alvaro Briones, *Op. cit.*, p.312.
- ¹⁹ Joseph Comblin, cit. por Gregorio Selser, "El Pentágono impone las reglas del juego", en *Nueva Política*, vol.II, nos.5-6, abril-septiembre de 1977, p.300.
- ²⁰ Según las cifras del "NACLA'S Latin American & Empire Report", vol. 10, no. 1, Nueva York, enero de 1976, cit. en *Ibidem*, p.302.
- ²¹ M. Kaplan, *Op. cit.*, pp.123-124.
- ²² Alvaro Briones, *Ideología del fascismo dependiente*, México, Edicol, México, 1978, p.18.
- ²³ Guillermo O'Donell, "El Estado autoritario en el Cono Sur de América Latina", en *Revista de la Universidad de México*, vol.XXXVIII, Nueva época, no.12, abril de 1982, p.18.
- ²⁴ Sobre los rasgos fundamentales de la política económica del fascismo dependiente consúltense las siguientes obras: Agustín Cueva, "La política económica del fascismo en América Latina" en ILDIS, *El control político en el Cono Sur*, México, Siglo XXI, 1980, pp.100-115; los comentarios de Andrés Varela en el mismo volumen, pp.115-131, así como las obras de Alvaro Briones citadas en los números 12 y 22 de estas Notas.
- ²⁵ Cf. A. Cueva, "La política económica..." p.101.
- ²⁶ Cf. *ibidem*, p.107.

II. DE "LA ARGENTINA POTENCIA" AL SUBDESARROLLO AUTOINDUCIDO. ELEMENTOS PARA UNA INTERPRETACION DE LA CRISIS ARGENTINA.

Como cualquier otro país, Argentina ha atravesado por etapas sucesivas de prosperidad y crisis. Sin embargo, al revés de lo que sucede en muchas otras formaciones sociales cuyo ascenso es lento y penoso, pero existente, la Argentina parece ir de más a menos o, en otras palabras, de la cima a la sima. "La Argentina -declaró Raúl Prebisch en un espíritu crítico y autocrítico envidiable- es un caso excepcional de un país en vías de subdesarrollo por su propio esfuerzo".¹

Hay pues, en el balance de la historia Argentina de los últimos dos siglos, la sensación de un paraíso perdido; un sueño que no sólo no se cumplió sino que se transformó en pesadilla. Esta sensación aumenta cuando se echa un vistazo al enorme potencial de que la Argentina está dotada, así como también a su capítulo de estabilidad política y auge económico, vivido con intensidad entre 1862 y 1930.

En efecto, el de Argentina es un enorme territorio cuya extensión, cercana a los 3 millones de Km², alberga impresionantes recursos naturales. Dueño de prácticamente toda la diversidad de climas, que van desde los subtropicales del norte hasta los invernales permanentes del sur, el país dispone también de una superficie cultivable de un millón 700 mil Km² (es decir, una extensión similar a la de todo el territorio ocupado por México), es autosuficiente en materia de hidrocarburos y cuenta con vastos caudales hídricos para ser utilizados en riego y generación de energía eléctrica. Aunado a lo anterior, el país no está perturbado por enfrentamientos étnicos o problemas raciales preocupantes, dada a la homogeneidad que en ese sentido caracteriza a sus habitantes; éstos a su vez constituyen, en América Latina, uno de los núcleos más avanzados en cuanto a alfabetismo, que es mayor al 90 por ciento de la población adulta.

Como se revisará enseguida, entre finales del siglo pasado y principios del presente, la inserción de Argentina en la división internacional del trabajo, le permite dinamizar su economía mediante el recurso de la exportación de productos agropecuarios. Así, en los albores del siglo XX, ocupaba "el segundo puesto detrás de los Estados Unidos en el hemisferio occidental para el comercio exterior y se situaba tercero en el mundo

delante de cuarenta países (incluyendo a Alemania y Gran Bretaña) por el valor per cápita de sus exportaciones".²

No resulta extraño, en consecuencia, que la Argentina moderna, forjada entre 1880 y la Primera Guerra Mundial mantuviera, al término de ésta, indicadores de desarrollo económico y social comparables –o, más aún, superiores– a los de los países industrializados. Hacia la década de 1920 la Argentina era, a decir de Aldo Ferrer, "un país subindustrializado, pero no un país subdesarrollado",³ lo que contribuye a explicar el clima de optimismo social, orgullo nacional y euforia colectiva que diseña y difunde el sueño de la "Argentina Potencia".

A partir de 1930, sin embargo, las tendencias autodestructivas se apoderan del país para lanzarlo a un largo periodo de inestabilidad y decadencia relativa y absoluta, periodo que todavía no termina.

Al llegar a este punto, resulta legítimo preguntarse: ¿Cuál o cuáles son las razones que han posibilitado la involución argentina? ¿A que se debe la insistente recurrencia al militarismo y la no menos crónica inestabilidad política del país? ¿Cómo opera el impacto de las instituciones en la sociedad civil y viceversa? ¿Cuál es el papel de las fuerzas armadas en esta relación? ¿Existen causas estructurales que permiten explicar con coherencia el caso argentino?

A nuestro juicio, para responder lo más adecuadamente posible a dichas interrogaciones, resulta imprescindible el recuento histórico y la formulación de hipótesis explicativas en los siguientes campos: económico, ideológico, político y social, que es, como se verá, la Roma a la que conducen todos los caminos de la larga crisis argentina.

1.- BREVE PANORAMA HISTORICO DE LA ARGENTINA.

A) De la formación oligárquica al golpe de Estado en 1930.

En términos generales el espacio geográfico que ocupó el Virreinato del Río de la Plata fue una región que los conquistadores españoles no consideraban de suma importancia, ya que sus intereses se orientaban más hacia la explotación intensiva de los metales preciosos en otras de sus posesiones.

Argentina obtiene su independencia en 1821 y, desde esa fecha hasta la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder en 1829, se registra un lapso marcado por caudillismo y luchas internas. La gestión de Rosas, sin embargo, habría de ser el inicio de la unificación nacional bajo la égida de una oligarquía en ciernes. En efecto, en 1836 se inicia la venta de tierras públicas, de modo tal que al promediar el siglo XIX la concentración de la propiedad era ya muy clara: los terrenos más fértiles y mejor localizados de la pampa pertenecían a 300 personas aproximadamente.⁴

Por esas épocas se promulgó la Constitución de 1853, y más tarde, después de la caída del caudillo y de la batalla de Pavón en 1861, una coalición de terratenientes ganaderos, intelectuales y comerciantes vinculados a la exportación se erige y afianza como élite oligárquica. Esta, conocida como la "Generación del 80", concentra aceleradamente el poder económico y también el político, al tiempo que se esfuerza, con éxito, por integrar plenamente a la Argentina al sistema económico internacional entonces vigente. Con base en las ventajas comparativas que le proporcionaban sus amplias y bien irrigadas superficies de cultivo y su consiguiente facilidad para exportar productos agropecuarios —carnes, lana y sobre todo cereales— el comercio exterior del país registró visibles aumentos, que lo elevaron de 45.5 millones de pesos oro en 1860, a 108.8 millones en 1872, a 268 millones en 1900, a 1 015 millones en 1914 y a 1 437 millones para 1930. Sin duda, un crecimiento portentoso para lo que se comenzó a llamar "el granero del mundo".⁵

Sin embargo, en el panorama político, en 1890 había surgido de la Unión Cívica Radical (UCR), agrupación formada por chacareros, arrendatarios, clases medias urbanas marginadas, trabajadores de la ciudad y del campo con escasa movilidad social, artesanos y medianos empresarios ligados al mercado interno. Es decir, en la UCR se nuclearon los sectores que de una u otra forma eran los segregados del modelo oligárquico.

Al paso de los años el sistema de dominación política fue resintiéndose los embates del radicalismo y otros actores disidentes, a tal grado que en 1912 una fracción lúcida de la oligarquía hizo promulgar la Ley Sáenz Peña que, al facilitar la ampliación de la base del sufragio, allanó también el camino para el triunfo electoral de la UCR en 1916.

Durante los dos gobiernos de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), los radicales intentan aumentar la democratización de la vida nacional y paliar el predominio de los intereses extranjeros en la estructura económica, promoviendo asimismo la intervención estatal en ella y practicando una política exterior independiente frente a Estados Unidos.⁶

Con todo, la UCR mantiene intocadas las bases materiales del estrato oligárquico; éste, en conjunción con la gran prensa, el Partido Conservador, la Federación Universitaria y las fuerzas armadas habría de ir socavando paulatinamente las bases de legitimidad de la UCR y preparando el golpe de Estado que el 6 de septiembre de 1930 terminó con una estabilidad política de casi 70 años, desechó una tradición institucional de abstención militar en asuntos políticos vigente al menos desde 1905 y desató los apetitos políticos de las fuerzas armadas que intervendrían indiscriminadamente en la constelación argentina de poder en las décadas posteriores. Al propio tiempo Argentina, en buena medida por el impacto negativo que le representó económicamente la Gran Depresión mundial de 1930, concluía su

próspera etapa de "crecimiento hacia afuera" para dar paso a una nueva conformación de su estructura económica.

B) La sustitución de importaciones, desde la "Década Infame" hasta el segundo gobierno peronista.

Encabezado por el general José Félix Uriburu, el gobierno que emanó del cuartelazo de septiembre de 1930 fue, ante todo, un acabado intento de restaurar poder a las fuerzas que habían sido desalojadas del gobierno en 1916. La administración emanada de lo que Manuel Gálvez llamó "Termidor de la historia argentina" aplicó de inmediato la ley marcial, restableció la pena de muerte y enderezó una política de fusilamientos, persecuciones, torturas y deportaciones. Los fraudes electorales se convirtieron en moneda corriente.

Pero el ejército no estaba en total armonía, pues existían en él dos líneas de acción discordantes: una, la de Uriburu, era partidaria de la permanencia indefinida de la dictadura y la otra, comandada por los golpistas Justo y Sarobe, vinculada a partidos políticos de centro-derecha, se proponía únicamente el reemplazo de Yrigoyen y la convocatoria de elecciones a mediano plazo en respeto de la Ley Sáenz Peña y la Constitución vigente.⁷ A fin de cuentas se impuso la última tendencia, por lo cual el general Uriburu se vio obligado a convocar a elecciones "fraudulentas" en las que se abstienen los radicales y triunfa la coalición denominada Concordancia que postulaba al general Agustín P. Justo y a Julio Argentino Roca.⁸

Este gobierno jugó, paradójicamente, la carta de una política económica muy semejante a la keynesiana que aumentó la intervención del Estado en la actividad económica, en contraste notable con la ideología librecambista que históricamente ha animado a la oligarquía argentina. El Estado debió renegociar también su dependencia con la Gran Bretaña mediante la firma del Tratado Roca-Runciman (1934) que, por lo desequilibrado de sus términos en detrimento de Argentina, fue calificado en su sucesivo como "el estatuto legal del coloniaje".

Sin embargo, quizá resulte de igual importancia para explicar los hechos subsecuentes la crisis del modelo de "desarrollo hacia afuera" que, como ya lo indicábamos, presenció la década de los treinta, y los inicios de la política de sustitución de importaciones orientada inicialmente a las industrias primarias en los ramos de textiles, cuero y caucho vinculadas a la industria agropecuaria así como a artefactos eléctricos, algunas herramientas y escasa maquinaria.

A consecuencia de la industrialización incipiente aumenta la migración interna del campo a la ciudad, se afirma la tendencia hacia la urbanización y surgen nuevos actores en el escenario argentino. Como dice Marcos Kaplan:

Emergen y se consolidan... nuevos grupos sociales con impulso ascensional: clases medias (empresariales, profesionales, burocráticas), proletariado industrial, masas marginales de reciente e incompleta incorporación al mundo urbano... Los grupos medios y populares presionan a favor de un mayor reconocimiento y de una participación ampliada en el ingreso nacional, las decisiones básicas, la distribución y el ejercicio del poder...

En lo político el gobierno de Justo se caracteriza, al igual que su predecesor y sucesores, por la sistemática recurrencia al "fraude patriótico", que se hace presente otra vez en la elecciones de 1937, cuando la fórmula concordancista derrota a los candidatos de la UCR. Como resultado de ello, en 1937 asume el poder de la dupla integrada por los civiles Roberto Ortiz (de filiación antipersonalista) y Ramón Castillo (conservador). En esta época el factor externo resultó determinante para la evolución de la política argentina; la Segunda Guerra Mundial se había iniciado en Europa y, frente a ello, la clase dominante argentina se escindió en grupos probritánicos, pronorteamericanos y proalemanes. Los dos primeros abogaban por el ingreso a la guerra de parte de los Aliados, y los segundos porque Argentina permaneciera neutral, favoreciendo así los intereses de las potencias del Eje.

En tanto, el presidente Ortiz, enfermo durante casi toda su gestión, a la que por demás intentó dar cierto liberalismo electoral, murió a mediados de 1942, por lo que el poder quedó en manos del vicepresidente Castillo quien mantuvo la política de neutralidad de su antecesor, retornó al fraude electoral abierto, recurrió al estado de sitio e hizo todo lo posible por cooptar a la casta militar.

No habiéndolo logrado, el 4 de junio de 1943 el ejército, para entonces erigido en único vertebrador del dominio oligárquico, y dotado también de fuerza económica (en 1941 se había creado la Dirección General de Fabricaciones Militares, encargada entre otras cosas de extender la industrialización a las ramas de la industria pesada) derroca a Castillo. Concluía de esta forma la etapa que se conoció con el nombre de "década infame".

Luego del golpe de Estado de junio de 1943 rápidamente se sucedieron en el poder los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez (quien finalmente rompería lanzas con el Eje, el 26 de enero de 1944, sólo unos meses antes de la rendición de Alemania y Japón) y Edelmiro J. Farrell.

Peró la figura que habría de emerger como definitiva en los años siguientes sería la del coronel Juan Domingo Perón, quien logra encumbrarse desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hasta el Ministerio de Guerra primero, la vicepresidencia de la República después y la presidencia finalmente.

El encumbramiento de Perón puede explicarse por su política social generosa,¹⁰ la organización de las masas obreras en sindicatos, su habilidad personal para captarse

simpatías y emplear en su favor los medios de comunicación, y su audacia indiscutible para la política *in palazzo*.

Ya en el poder, al que arribó después de superar una serie de fricciones con ciertos sectores oligárquicos, con otros más de las fuerzas armadas, así como con la representación diplomática de los Estados Unidos, el presidente prosigue su estrategia, que consiste en mantenerse en el gobierno apoyándose en las fuerzas armadas, la Iglesia Católica, la policía, la burocracia gubernamental y las masas menesterosas tanto de la ciudad como del campo.¹¹

En el campo económico el gobierno de Perón instrumenta, a partir de su establecimiento en 1946, una política fuertemente dirigista, cuyo objetivo final era mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante el desarrollo del mercado interno. En el frente político Perón intentó y logró montar un aparato sindical burocrático y vertical, que a la larga facilitaría el fortalecimiento y la corrupción de los líderes, que a su vez terminarían por devenir en una suerte de *nomenklatura* obrera. También trató, aunque con menor éxito, de erigir un sistema semicorporativo que, al tiempo de mantener elecciones, recabase las peticiones sectoriales mediante organizaciones granindustriales ya existentes (UIA), sindicales (CGT) y de pequeños y medianos empresarios (CGE, creada en 1952).

El general Perón se reeligió en 1952, pero su segundo periodo consecutivo resultó mucho menos exitoso que el primero, debido sobre todo a las limitaciones que naturalmente encontró. En efecto, para esos años la crisis había hecho presa de la economía argentina, cuyo dinamismo decreció sensiblemente; asimismo, el gobierno de Perón empezó a enfrentar serios problemas políticos, sobre todo en el seno de dos grupos que inicialmente habían contribuido a su éxito: las fuerzas armadas y la Iglesia. La conjunción de todos estos elementos —explicados aquí a *grosso modo*— condujo, después de conatos de guerra civil, a un levantamiento armado que se inició en Córdoba bajo el liderazgo del general retirado Eduardo Lonardi y que contó con apoyo de la Armada. Este movimiento prosperó, y en septiembre de 1955 logró la renuncia de Juan Domingo Perón quien, sin embargo, habría de ejercer una influencia mayúscula dentro de la política argentina, ya sea mediante su sola influencia personal o bien a través del “peronismo” o justicialismo, es decir, una ideología difusa que amalgama elementos de la doctrina social de la Iglesia con una retórica de conciliación de clases y una “tercera posición” (esto es, “ni capitalismo ni socialismo, ni el Este ni el Oeste”). La doctrina justicialista aún persiste, aunque con diversas adaptaciones y cambios.¹²

El régimen producto del exitoso *putsch* contra Perón se hizo autonombrar “Revolución Libertadora” y mantenía en su seno dos líneas de acción: la primera estaba encabezada por el golpista Lonardi, era de tipo “falangista criollo” y logró mantenerse unos pocos meses en el poder; la segunda, que a la postre sería

dominante, era de inspiración "conservador-liberal" y estaba liderada por el general Pedro E. Aramburu.¹³

Los años de la "Revolución "Libertadora" se caracterizan, en lo económico, porque la oligarquía retoma el poder absoluto de la vida nacional. Los intereses agropecuarios, bastante maltrechos desde 1945, volverían a florecer y además se enderezó un plan económico neoliberal y privatizador que de inmediato intentó dar marcha atrás en las medidas dictadas por la administración peronista.

El proyecto políticoeconómico, no obstante, se habría de enfrentar a la resistencia de los trabajadores, así como al descontento de ciertos sectores de las fuerzas armadas que no habían sido purgados y seguían respondiendo a una filiación peronista.

Presionados por estos y otros factores, los militares convocaron a elecciones para instalar una Asamblea Constituyente en 1947. En los comicios el peronismo es proscrito, en tanto que los radicales se dividen en dos corrientes principales: a) La Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) es proclive a negociar con la "Revolución Libertadora" y logra conservar la mayor parte del apoyo partidario. Gasta una retórica incendiaria y demagógica y su líder es el abogado Ricardo Balbín, y b) La Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) nuclea en torno suyo -y de su figura más conspicua, Arturo Frondizi- a un conglomerado muy heterogéneo en donde se incluyen desde militantes de izquierda hasta técnicos, pasando por viejos cuadros de la UCR y algunos miembros de la oligarquía.

Pero la mayor fuerza de la UCRI provenía, en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1958, de un pacto secreto mediante el cual Perón, exiliado en Santo Domingo, acordó con el líder intransigente proporcionar a éste el voto de sus múltiples seguidores a cambio de que, una vez en el poder, Frondizi permitiera el retorno del justicialismo. A la vez, y a hurtadillas, Frondizi prometía a la cúpula militar proseguir las líneas fundamentales de la "Revolución Libertadora", sobre todo en lo referente a la proscripción del peronismo y la izquierda y la profundización de la estrategia en materia de política económica.

Triunfador en las urnas, el dirigente de la UCRI enfrentaría, empero, nuevos y más complejos problemas. Entre ellos el más grave sería que su gestión se encontrara expuesta a la imposible concertación de fuerzas centristas. Ergo, la estabilidad de su gobierno resultaría inversamente proporcional a su oportunismo y a su grado de ambigüedad político-ideológica.

En efecto, Frondizi otorgó a su gestión económica un sesgo explícitamente desarrollista que reasumía y adecuaba las directrices de la administración de Aramburu. En ese sentido se explican las facilidades que a partir de 1958 se otorgarían para la promoción industrial a ultranza y para la radicación de capitales extranjeros en el petróleo, la industria automotriz, el comercio y las finanzas. También

en esta perspectiva se verificó el desplazamiento progresivo de la industria nacional estatal y privada; el crecimiento con desempleo; la disminución de la participación asalariada en el PIB (de 50.9% en 1954 descendió a 40.9% en 1961); y una tenaz labor de reprivatización y desmantelamiento de las empresas del Estado.

Otro puntal de la gestión de Frondizi era la "integración" que se tradujo en un llamado conciliatorio para todos los argentinos, pero principalmente dirigido a tres instituciones: el movimiento obrero, la Iglesia católica y las fuerzas armadas; hacia el exterior, el presidente no vaciló en apelar al apoyo de Estados Unidos, por entonces embarcado en la Alianza para el Progreso, proyecto de bases muy similares al desarrollismo.

Los esfuerzos de toda esta obsecación integracionista obtuvieron, a final de cuentas, magros frutos. El movimiento obrero, sobre todo después de hacerse pública la ruptura Perón-Frondizi en 1962, se convierte en una fuerza crecientemente opuesta a la política económica; con la Iglesia Frondizi se anotó el único punto favorable de su proyecto político, al promulgar una ley que autorizaba el funcionamiento de universidades privadas (sobre todo católicas) y anulaba el monopolio del Estado en ese nivel educativo. Por otra parte, las relaciones del gobierno frondizista con las fuerzas armadas fueron bastante accidentadas, registrándose en ese mandato más de 30 pronunciamientos y planteos militares. *Last but not least*, Estados Unidos no apoyó al gobernante frente al virtual eclipse que le imponían aquéllos, de modo tal que Frondizi fue derrocado a finales de marzo de 1962.

El presidente del Senado, José María Guido, se hizo cargo de la presidencia de la nación el 29 de marzo, en medio de una crisis económica recrudecida —el PIB había disminuido a -4% en ese año—, una inestabilidad política constante, un ambiente social de indiferencia y una aguda disensión en el seno de las fuerzas armadas en torno a la cuestión peronista.

En la pugna intracastrense se encontraban los *colorados*, partidarios de restablecer los preceptos básicos de la "Revolución Libertadora" en su vertiente conservadora-liberal (léase liquidar al peronismo); los *azules*, a su vez, aunque eran también antiperonistas, reconocían que el justicialismo era, a pesar de sus excesos, una corriente cristiana de pensamiento que había logrado distanciar a las masas del comunismo. Su líder era el general Juan Carlos Onganía y estaban dotados de un pensamiento católico integrista.

Finalmente se impusieron los *azules* —no sin fuertes escaramuzas— y se convocó a elecciones, con el justicialismo segregado de nuevo, para julio de 1963.

En los comicios se impuso la UCRP, cuyo candidato, el médico Arturo Illia, ganó con el 25.8% de los votos, en elecciones caracterizadas por la enorme dispersión del sufragio. El gobierno de Illia realizó una labor económica brillante, ya que consiguió disminuir la inflación y, con base en una política de ampliación del mercado interno

sustentada en la propomoción de la pequeña y la mediana industria, logró reactivar visiblemente el crecimiento económico.¹⁴

Lamentablemente, el doctor Illia no pudo obtener semejantes haberes en la conducción política del país ante la acción boicoteadora de los *aparatchiks* del sindicalismo peronista, así como de las fuerzas armadas y los medios de comunicación masiva, en especial la gran prensa. Socavado su gobierno en estas fuerzas, y sin resistencias de la UCRP ni de la sociedad argentina, el 28 de junio de 1966 las fuerzas armadas intervinieron para ejecutar el golpe de Estado que puso fin a la administración de Illia, una de las más serias y bienintencionadas que registra la historia argentina.

Para el ejercicio del poder, los militares golpistas de 1966, acaudillados por Onganía y amparados en el nombre de "Revolución Argentina", encontraron aliados en los monopolios nacionales y extranjeros, algunos núcleos de la clase media e, inicialmente, la poderosa burocracia sindical peronista; además, esta nueva "Revolución", que tomó como modelo al vecino Brasil, recibió también la aprobación estadounidense.

El programa militar preveía tres tiempos —el económico, el social y el político, en ese orden— pero no especificaba cuánto duraría cada uno. Lo cierto es que el empeño por llevar adelante la primera de las tres etapas indujo al gobierno a promulgar el Acta y el Estatuto de la Revolución Argentina, a los que quedó supeditada la Constitución vigente con anterioridad. Por supuesto, las dos nuevas legislaciones se dictaron en medio de la destitución de todos los poderes federales y fueron el andamiaje jurídico para instrumentar medidas de espionaje, represión y terror sociales, y ataques rabiosos a las universidades y su autonomía.

La contraparte de ese antiliberalismo político fue, como se ha hecho costumbre en la mayoría de las dictaduras argentinas, un férreo liberalismo económico, expresado fundamentalmente en el plan Krieger Vasena, de enero de 1967, que constituyó un planteamiento estabilizador de neta estirpe librecambista al disponer la devaluación del peso frente al dólar, la liberación total del mercado cambiario, el congelamiento de salarios y una sustancial rebaja en los aranceles para productos extranjeros.

Desde su propia perspectiva, los resultados del plan fueron óptimos, pero políticamente redundaron en la expresión cada vez más abierta de la inconformidad de las capas medias y la insurgencia sindical de los núcleos obreros antiburocráticos. Así, el 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes —con el apoyo y la simpatía de las clases medias— marcharon juntos por las calles de la ciudad de Córdoba, sede de plantas industriales y automotrices y centro académico de renombre y tradición. Ante la agresión del Ejército se produjeron levantamientos masivos en toda la ciudad, que se extendieron hasta el 1o. de junio y dejaron un saldo de varias decenas de muertos y heridos.

El "Cordobazo", como se conocería a esa encendida jornada, fue no sólo el punto de arranque de una serie de movilizaciones similares en todo el país, sino también y ante todo el principio del fin de la presidencia de Onganía y del proyecto de la "Revolución Argentina".

A Onganía lo sucedió, en junio de 1970, el general Roberto M. Levingston, quien instrumentó un giro de 180 grados en materia de política económica; su ministro del ramo, Aldo Ferrer, estableció ciertas limitaciones para la entrada de capital extranjero al país, redujo la rigidez de la política salarial y virtió su apoyo a las empresas estatales.

En marzo de 1971 un golpe palaciego derribó a Levingston, quien fue relevado por el general Alejandro Lanusse. Entonces, ante la formación de un conglomerado opositor llamado "Hora del Pueblo", en el que participan los partidos Justicialista, Radical del Pueblo, Socialista Argentino, Conservador Popular, Demócrata Progresista y UCR Bloquista, el nuevo mandatario se dio a la tarea de recomponer el consenso perdido mediante un proyecto para unificar a todas las fuerzas políticas en torno al combate de la pujante subversión guerrillera y el apuntalamiento de las instituciones.

La intentona, conocida como Gran Acuerdo Nacional (GAN), terminó por abortar; los militares impusieron una salida última: convocaron a elecciones en las cuales se permitió la participación del peronismo, pero no la de Perón. Las fuerzas leales al "conductor", ante ese éxito relativo, se avocaron a la tarea de construir el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), que sustituyó a la "Hora del Pueblo", ya abandonada por el Partido Radical y por el propio justicialismo, sus principales fuerzas. El FREJULI presentó como candidato a la presidencia al doctor Héctor J. Cámpora, quien triunfó con un poco menos de la mitad de los sufragios en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Cabe destacar que "el 82% de los electores votaron por candidatos adversos al régimen *de facto*".¹⁵

Los mejores augurios caracterizaron al inicio del gobierno de Cámpora, el 25 de mayo de 1973. El nuevo presidente derogó toda la legislación represiva y logró disminuir la violencia anterior a su mandato, amén de liberar a los presos políticos reclusos en la cárcel de Villa Devoto.¹⁶ Durante el breve intervalo de Cámpora también se intentó poner en práctica los principios programáticos del FREJULI, que buscaban retomar y potenciar las pautas fijadas durante las administraciones peronistas de los cuarenta y los cincuenta.

En el primer año de gobierno los resultados del programa económico del ministro Juan Gelbard fueron francamente alentadores, pero pasado ese tiempo, el diseño económico comenzó a mostrar agotamiento, catalizado éste en buena medida por la acción boicoteadora de la oligarquía terrateniente, financiera e industrial.

Por otro lado, el 20 de julio de 1973, día en que regresó Juan Domingo Perón a la Argentina después de un largo exilio, peronistas del ala derecha dispararon, en las cercanías del aeropuerto internacional de Ezeiza, contra integrantes de la Juventud Peronista —es decir, la izquierda del movimiento— ultimando a más de 300 integrantes de dicha facción.

A partir de entonces el peronismo se dividió en una izquierda que *grosso modo* consideraba que el retorno del caudillo era el preludio del establecimiento de un régimen socialista de corte revolucionario, y una derecha enquistada en los sindicatos, controlados a su vez por la línea más ortodoxa de la aristocracia obrera. Estos últimos elementos estructuraron su ofensiva a partir de los sangrientos hechos de Ezeiza; en su favor gravitaría el apoyo de Perón, quien pugnó por neutralizar al flanco izquierdo de su propio partido, el cual se radicalizó aún más fortaleciendo así al movimiento guerrillero ya existente desde finales de los sesenta.

Cámpora renunció el 13 de julio de 1973 y lo sustituyó Raúl Lastiri, de la derecha justicialista. En las nuevas elecciones de septiembre se impuso holgadamente (62% de los votos a su favor) el binomio Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón. Pero la victoria electoral del matrimonio no fue óbice para el recrudecimiento de la violencia estatal y guerrillera. Por el contrario, en el último y breve periodo peronista se atentó contra los medios de información, se decretó el estado de sitio, se rehabilitaron las leyes represivas derogadas por su antecesor y se elaboraron otras nuevas, y se maniató y entorpeció la impartición de justicia.¹⁷

Esto facilitaría el ejercicio extremo de la violencia tanto por parte de las fuerzas armadas, la policía y los grupos paramilitares del corte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), como por los grupos guerrilleros llamados Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, de filiación trotskista) y Montoneros (peronistas de izquierda).

En julio de 1974 falleció Perón y bajo la presidencia de la nueva mandataria, María Estela Martínez, las tendencias autoritarias y derechistas del régimen se acentuaron, *pari pasu* con la inestabilidad, la corrupción, el aventurerismo, el saqueo, la violencia y la ineficacia administrativa.

Para junio de 1975 el panorama económico era tan preocupante como el político. La inflación estaba desbocada, había una difícil situación de la balanza de pagos y el déficit del sector público crecía velozmente. Ante esa situación el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, presentó un programa de estabilización que, mediante políticas de *shock*, sólo consiguió agudizar la crisis. En 1975 la inversión bruta interna fue inferior en 16% a la de 1974, el PNB decreció 2% y la inflación prosiguió su galopante ritmo. A principios de 1976, más de lo mismo: nueva devaluación, nuevos aumentos de precios a servicios y bienes del sector público, nuevos topes salariales.

Por otro lado, el 20 de julio de 1973, día en que regresó Juan Domingo Perón a la Argentina después de un largo exilio, peronistas del ala derecha dispararon, en las cercanías del aeropuerto internacional de Ezeiza, contra integrantes de la Juventud Peronista —es decir, la izquierda del movimiento— ultimando a más de 300 integrantes de dicha facción.

A partir de entonces el peronismo se dividió en una izquierda que *grosso modo* consideraba que el retorno del caudillo era el preludio del establecimiento de un régimen socialista de corte revolucionario, y una derecha enquistada en los sindicatos, controlados a su vez por la línea más ortodoxa de la aristocracia obrera. Estos últimos elementos estructuraron su ofensiva a partir de los sangrientos hechos de Ezeiza; en su favor gravitaría el apoyo de Perón, quien pugnó por neutralizar al flanco izquierdo de su propio partido, el cual se radicalizó aún más fortaleciendo así al movimiento guerrillero ya existente desde finales de los sesenta.

Cámpora renunció el 13 de julio de 1973 y lo sustituyó Raúl Lastiri, de la derecha justicialista. En las nuevas elecciones de septiembre se impuso holgadamente (62% de los votos a su favor) el binomio Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón. Pero la victoria electoral del matrimonio no fue óbice para el recrudecimiento de la violencia estatal y guerrillera. Por el contrario, en el último y breve periodo peronista se atentó contra los medios de información, se decretó el estado de sitio, se rehabilitaron las leyes represivas derogadas por su antecesor y se elaboraron otras nuevas, y se maniató y entorpeció la impartición de justicia.¹⁷

Esto facilitaría el ejercicio extremo de la violencia tanto por parte de las fuerzas armadas, la policía y los grupos paramilitares del corte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), como por los grupos guerrilleros llamados Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, de filiación trotskista) y Montoneros (peronistas de izquierda).

En julio de 1974 falleció Perón y bajo la presidencia de la nueva mandataria, María Estela Martínez, las tendencias autoritarias y derechistas del régimen se acentuaron, *pari pasu* con la inestabilidad, la corrupción, el aventurerismo, el saqueo, la violencia y la ineficacia administrativa.

Para junio de 1975 el panorama económico era tan preocupante como el político. La inflación estaba desbocada, había una difícil situación de la balanza de pagos y el déficit del sector público crecía velozmente. Ante esa situación el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, presentó un programa de estabilización que, mediante políticas de *shock*, sólo consiguió agudizar la crisis. En 1975 la inversión bruta interna fue inferior en 16% a la de 1974, el PNB decreció 2% y la inflación prosiguió su galopante ritmo. A principios de 1976, más de lo mismo: nueva devaluación, nuevos aumentos de precios a servicios y bienes del sector público, nuevos topes salariales.

En marzo de 1976, buena parte de los diversos sectores sociales, desde los trabajadores e intelectuales hasta el gran capital y la clase media, pasando por los partidos políticos, cuestionaban a la presidenta Martínez de Perón y sus asesores.

Las fuerzas armadas, aun con la huella del desprestigio reciente en la memoria, habían adoptado una actitud de "prescindencia profesional" y esperaban el momento de la descomposición total del gobierno -al que contribuían- para que la mayoría inconforme las llamase a "restaurar el orden".

Ello -y en consecuencia la recusación definitiva de la viabilidad del populismo a destiempo y en épocas de crisis, así como el fin de la larga etapa en que el desarrollo argentino se había guiado por la sustitución de importaciones y sus correspondientes alianzas de clase- sucedió puntualmente el 24 de marzo de 1976. Otra vez la incertidumbre. Todo y nada estaba por decirse (y hacerse) en la República Argentina.

Cabe destacar que en el lapso en estudio (a partir del golpe de Estado que consagró a José Félix Uriburu como presidente de facto y hasta la caída de la mandataria María Estela Martínez de Perón por la vía del cuartelazo), Argentina vio pasar seis *putschs* exitosos, muchos otros más abortados, numerosos pronunciamientos militares, connatos de guerra civil y tendencias cada vez más descubiertas respecto a la utilización de la violencia como medio para superar los enfrentamientos en la arena social. Para completar el cuadro, únicamente dos mandatarios elegidos más o menos constitucionalmente (Justo y Perón), lograron finalizar su gestión. A ello debe agregarse que:

De 1930 hasta 1980 ningún presidente fue libremente elegido sin condicionamiento ni veto militar dentro de un proceso normal de sucesión. Si bien el mandato constitucional es de seis años, el promedio de las presidencias entre 1930 y 1971 fue de dos años y diez meses... de dieciséis presidentes que tuvo el país entre 1930 y 1973, once eran militares.¹⁸

Tal situación, calificada como "golpe de estado permanente",¹⁹ puede revisarse con más detenimiento en el cuadro 1, que enumera las causas, sujetos y duración de los cambios de gobierno en la Argentina entre el 6 de septiembre de 1930 y el 23 de marzo de 1976.

A continuación, a efectos de encontrar explicación a la evidente inestabilidad argentina desde 1930, nos permitimos agrupar las posibles causas en tres grandes secciones: el problema del estancamiento económico y las transferencias intersectoriales, la cuestión de las ideologías, partidos políticos y grupos de presión, y por último la relación entre crisis social e intervenciones militares.

2.- TRES LECTURAS DEL PROBLEMA ARGENTINO.

CUADRO 1

CAMBIOS DE PRESIDENTE EN ARGENTINA, 1930-1976

FECHA DE TOMA DEL PODER	CAUSA	JEFE DE ESTADO	DURACION
6/IX/1930	Golpe militar	Gral. José F. Uriburu	1 año 5 meses
20/II/1932	Elecciones presidenciales	Gral. Agustín P. Justo	6 años
20/II/1938	Elecciones presidenciales	Dr. Roberto M. Ortiz	4 años 4 meses
27/II/1942	Sucesión presidencial por muerte de Ortiz	Dr. Ramón Castillo	11 meses
4/VI/1943	Golpe militar	Gral. Arturo Rawson	1 día
5/VI/1943	Revolución de palacio	Gral. Pedro P. Ramírez	8 meses
24/II/1944	Revolución de palacio	Gral. Edelmiro J. Farrell	2 años 4 meses
4/VI/1946	Elecciones presidenciales	Gral. Juan D. Perón	6 años
4/VI/1952	Reelección J.D. Perón	Gral. Juan D. Perón	3 años 6 meses
21/IX/1955	Golpe militar	Gral. Eduardo Lonardi	2 meses
13/XI/1955	Revolución de palacio	Gral. Pedro E. Aramburu	2 años 3 meses
23/II/1958	Elecciones presidenciales	Dr. Arturo Frondizi	4 años 1 mes
28/III/1962	Golpe militar	Dr. José María Guido, presidente del Senado	1 año 4 meses
7/VII/1963	Elecciones presidenciales	Dr. Arturo Illia	2 años 11 meses
28/VI/1966	Golpe militar	Gral. Juan Carlos Onganía	4 años
8/VI/1970	Revolución de palacio	Gral. Roberto M. Levingston	9 meses
23/II/1971	Revolución de palacio	Gral. Alejandro M. Lannusse	2 años 2 meses
25/V/1973	Elecciones presidenciales	Dr. Héctor Cámpora	2 meses
13/VII/1973	Golpe palaciego	Raúl Lastiri	3 meses
23/X/1973	Elecciones presidenciales	Juan D. Perón	10 meses
1/VII/1974	Sucesión presidencial por muerte de Perón	Ma. Estela Martínez de Perón	1 año 8 meses
23/III/1976	Golpe militar	Junta militar presidida por el Gral. Jorge R. Videla	4 años 6 meses

Fuente: elaboración del autor, con base en datos extraídos de diversas publicaciones.

Estancamiento económico y transferencias intersectoriales.

Desde su incorporación al sistema capitalista internacional, en la Argentina han sido puestos en práctica por lo menos tres modelos de desarrollo, a saber: el desarrollo hacia afuera, que hace crisis en 1930, pero subsiste hasta nuestros días; la industrialización sustitutiva de importaciones, descalificada oficialmente por el equipo económico que tomó las riendas en 1976, y el intenso proyecto de transformación transnacional, monopólica y financiera llevado adelante por la tecnocracia que acompañó a los militares hasta 1983.²⁰

Desde luego estos modelos no se encuentran en su forma pura en la Argentina; antes bien, frecuentemente se yuxtaponen entre sí.

De cualquier manera, lo que resulta evidente en el desarrollo económico del país en los últimos 50 o 60 años, es la presencia de una declinación o, en el mejor de los casos, estancamiento de la producción, las exportaciones y el crecimiento demográfico con respecto a los demás países de América Latina. Por otra parte existen flujos de recursos intersectoriales que tienden a gravitar, más de lo que comúnmente se piensa, en el terreno político y social.

Con respecto a las exportaciones, la participación de América Latina en el comercio mundial ha sufrido, entre 1938 y 1977, un decremento relativo, pues si bien las exportaciones latinoamericanas se multiplicaron por 30 en ese periodo, las mundiales lo hacían por 48. Dentro del total registrado para la región, la parte correspondiente a la Argentina ha disminuido sensiblemente; así, en 1938 las exportaciones argentinas representaban el 30% del total de las exportaciones de lo que más tarde sería la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); en 1977 sólo abarcan el 13.34 por ciento.²¹

Esta situación contrasta notablemente con la de Brasil, cuyas exportaciones como porcentaje total de las de la ALALC han registrado un curso inverso, pasando del 19.7% en el primer año a 28.5% en el último. Menos espectacular, México se ha mantenido por lo menos estable, ya que sus porcentajes para idénticas situaciones y fechas fueron de 10.88 y 11.36 por ciento (véase Cuadro 2).

Si el estudio se realiza a partir de épocas más recientes, los resultados no varían mucho. En 1975, por ejemplo, las exportaciones totales argentinas habían crecido 174% con respecto a las de 1960 (en dólares corrientes), frente a una expansión de 583% en Brasil y de 364% en México.²²

En cuanto a la participación de las manufacturas en el producto interno bruto (PIB), Argentina se mantenía, apenas en 1960, en franca ventaja frente a México y Brasil, pues en la primera tal porcentaje alcanzaba el 31%, frente a 23 y 25% de los segundos, respectivamente. En 1979, empero, las distancias se acortaron, y los

CUADRO 2

EXPORTACIONES DE ALALC, ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO (Millones de dólares y porcentajes)

Años	1 ALALC	2 Argentina	3 2/1 %	4 Brasil	5 4/1 %	6 México	7 6/1 %
1938	1,461	438	29.97	289	19.77	159	10.88
1948	5,428	1,629	30.01	1,173	21.61	465	8.56
1958	6,763	994	14.69	1,243	19.85	735	10.86
1968	10,071	1,368	13.58	1,881	18.67	1,258	12.49
1974	37,831	3,931	10.39	7,952	21.04	3,545	9.37
1977	42,054	5,610	13.34	12,139	28.56	4,781	11.36

FUENTE: Carlos Quijano, "Declinación y estancamiento", Cuadernos de Marcha. Diciembre 1984, enero 1985, p. 119.

porcentajes fueron los siguientes: 35% para Argentina, 30% para México y 29% para Brasil.²³

En el terreno de la producción, y nuevamente en una perspectiva comparada, en 1960, Argentina reuña 25% del PIB anual latinoamericano, frente a 30% de Brasil y 18% de México. Hacia finales de la década del setenta, Argentina pasó a ocupar el tercer lugar con 16.4% del producto regional, en contraste con el 39% de Brasil y el 22% de México.²⁴ Tal vez pudiese pensarse que, aun frente a la evidencia de los anteriores datos, la Argentina podría haber conservado su primacía tradicional en el terreno donde sus ventajas comparativas son abrumadoras frente a las otras dos naciones más importantes de nuestra América, es decir, en el producto agrícola. Si bien es cierto que la nación platense sigue siendo uno de los mayores exportadores de productos agropecuarios en el mundo, no es menos verdadero que dicho producto agrícola, entre 1950 y 1977, solamente creció 1.82 veces, frente a 3.20 veces de Brasil y 2.47 veces de México.²⁵

Otro indicador frecuentemente usado para medir los problemas económicos es el incremento de la inflación, entendida ésta en el sentido de aumento anual de los costos al consumidor. A este respecto se observa en el lapso comprendido entre 1966 y 1970, que la tasa promedio de inflación fue de 19.7% en Argentina, frente a 29.3% en Brasil y 3.7% en México. Más tarde, en el periodo 1971-1975, el promedio anual de aumento en los precios al consumidor fue de 71.9% para Argentina, de 21.2% para Brasil y 12.3% para México. Todo esto para no hablar de la segunda mitad de los setenta y la primera de los ochenta, cuando la hiperinflación* se apoderó decididamente de la economía argentina.

Por lo que hace al aumento de la población, cuya importancia no debe pasar desapercibida para cualquier nación con aspiraciones de potencia mundial, en América Latina el número total de habitantes entre 1920 y 1980 se multiplicó por 4.3; en Brasil, por 4.5; en México, por 4.9 y en Argentina, por 3.2. A ello debe agregarse que, siempre de acuerdo con el Cuadro 3 en 1920 la población de Argentina (10.43% del total), equivalía a 32.3% de la de Brasil, y en 1980 sólo era del 22.7 por ciento. Haciendo proyecciones hacia el año 2000, Argentina retendrá, para ese tiempo, el 5.5% de los habitantes de América Latina, frente al 33.8% de Brasil y el 21.19% de México. Esto significa, en otras palabras, que la relación demográfica entre Argentina y Brasil, que en 1920 fue de 1 a 3, será de 1 a 6 en el amanecer del siglo XXI.²⁶

*Entendemos por hiperinflación aquel proceso en donde el aumento anual de los precios alcanza niveles superiores al 300%, o bien cuando, debido a lo anterior, las empresas se ven impedidas de planificar sus actividades a mediano o largo plazo.

CUADRO 3

POBLACION DE AMERICA LATINA, ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO (Miles de habitantes y porcentajes)

Años	1 América Latina	2 Argentina	3 2/1 %	4 Brasil	5 4/1 %	6 México	7 6/1 %
1920	84,885	8,861	10.43	27,404	32.28	14,500	17.08
1930	102,889	11,896	11.56	33,568	34.55	16,589	16.12
1940	124,194	14,169	11.40	41,233	33.20	19,185	15.44
1950	157,094	17,085	10.87	52,326	33.30	26,640	16.95
1960	207,032	20,850	10.07	70,327	33.96	36,046	17.41
1970	274,914	24,352	8.85	93,245	33.92	50,718	18.44
1980	366,821	28,218	7.69	124,000	33.80	71,387	19.46
1990	487,258	31,909	6.54	164,374	33.73	99,669	20.45
2000	637,245	35,274	5.53	215,510	33.81	135,089	21.19

Fuente: misma del cuadro 2.

No resultaría aventurado en exceso afirmar que todos los datos arriba consignados se reproducen fielmente al contemplar la inserción argentina dentro de la economía mundial, y de manera específica en el comercio. Baste señalar, para el caso, que luego de la Segunda Guerra Mundial, mientras la producción y exportación de maíz, trigo, lana y carne de los principales competidores de Argentina (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) aumentan de prisa, aquella experimenta un marcado retroceso de su participación en el mercado mundial de productos de origen agropecuario. Así, antes de 1940, Argentina cubría el 20% de la demanda mundial de maíz y 40% en el comercio de la carne; una década después, los porcentajes para idénticos rubros descendieron hasta 9 y 19%, respectivamente.²⁷

La lectura más optimista de las cifras señaladas parece dejar poco espacio para la duda y la afirmación concluyente: el crecimiento económico en Argentina se ha detenido, y, más aún, muestra tendencias marcadamente regresivas. A juzgar por los indicadores económicos, la "tercermundización" de ese país se viene cumpliendo tenaz y aceleradamente desde 1930. Esa, no obstante, es sólo la vertiente externa —la más espectacular, también— de la declinación argentina.

Pero el problema estructural en donde puede hallarse una mayor correlación positiva entre la política y la economía de esa nación resulta ser, sin duda alguna, el de las transferencias intersectoriales, cuyo carácter es a todas luces interno.

De hecho, en la Argentina, al contrario de lo que sucede en los esquemas deseables de crecimiento, no se produce el "efecto locomotora", es decir, el mecanismo gracias al cual el sector más dinámico de la economía estimula a su vez el crecimiento de los restantes. Lo que sucede en el otrora "granero del mundo" es, muy por el contrario, el desarrollo de unos sectores a expensas de los otros.

El instrumento de política económica que ha permitido afirmar en las diversas circunstancias el predominio de un sector determinado de la economía sobre otro(s) es, en todo caso, el mismo: la manipulación monetaria.

La sobrevaluación del peso provoca exacciones que, provenientes del sector agropecuario, favorecen de manera nítida a la acumulación industrial; de modo semejante, la devaluación de la unidad monetaria argentina redundan en demérito no sólo del sector industrial, sino también de los ingresos del segmento económico asalariado. La primera de las situaciones descritas ocurrió durante el primer gobierno peronista (1946-1955) y en el periodo presidencial de Onganía (1966-1970); y la segunda sucedió en los periodos posteriores a los golpes de 1955 y 1962 y la revolución palaciega de 1970.

A las transferencias intersectoriales descritas debe agregarse el estancamiento agrícola, reflejado en los siguientes datos: la superficie total utilizada para labores rurales prácticamente ha permanecido estacionaria desde 1935, en tanto que la inversión para incorporar tecnología al campo ha sido mínima, lo que redundan, a su

vez, en decrecimientos de la productividad, sobre todo en lo tocante en ganadería extensiva.²⁸

Debe destacarse también, en este sentido, la elevada participación del factor tierra en la formación del producto agropecuario. En el periodo 1958-1961, verbigracia, esa participación fue de 52%, al tiempo que la de la mano de obra era de 19%, la maquinaria 9%, y la del ganado 10%. La situación visible en Argentina destaca con la estudiada en una encuesta realizada por Hayami y Ruttan para 38 países, en donde se encontró que, en promedio, el factor tierra participa con 5.6%, la mano de obra con 33.5%, la maquinaria con 19.2% y el ganado con 19.1 por ciento.²⁹

Con base en todos los anteriores elementos, consideramos que el camino para el planteamiento de hipótesis en torno a la forma en que el estancamiento económico y los desequilibrios intersectoriales se reflejan dentro de la realidad argentina está despejado.

La primera observación que al respecto puede enunciarse, es que la baja productividad agropecuaria, relacionada simultáneamente con la desproporcionada participación del factor tierra en el producto sectorial, reduce la disponibilidad de divisas necesarias para el correcto funcionamiento económico del país. Si partimos del supuesto de que la mayor parte de los ingresos argentinos proviene de sus exportaciones agropecuarias, y si a ello agregamos que para 1900 sólo el 46% de la producción agrícola era destinado al consumo interno, en tanto que esa cifra había ascendido al 80% en 1958, la situación resulta meridianamente clara: en la medida en que el excedente exportable se reduce, también disminuye la disponibilidad de recursos necesarios para sufragar el costo de las importaciones —indispensables para el florecimiento industrial en las formaciones sociales dependientes— lo que redundará en una atonía general de la actividad económica.

En segundo término se observa que la tierra, por su alto valor, ha devenido una riqueza *si misma*, más que un medio para producir riquezas. En la Argentina, pues, la propiedad agrícola ha pasado a ser una herramienta para la ganancia especulativa y la vara para medir el *status* social de sus poseedores. Incluso aquellos que han amasado fortunas al amparo de la protección industrial, tienden a orientar sus capitales en nuevas actividades, más “nobles”, menos “riesgosas” y más prestigiadas, vale decir, las actividades agropecuarias. Todo esto tiene, como se intentará demostrar más adelante, un alto costo político y social.

En tercer lugar, es evidente que el angostamiento de excedentes, relacionado en última instancia con lo descrito en párrafos anteriores, exacerba las pugnas entre diversos sectores de la economía por apropiarse de más y mejores “tajadas del pastel”. Por ello no resulta descabellado, creemos, retomar la hipótesis de Rouquié en el sentido de que “las intervenciones del poder militar modifican las posiciones relativas de los distintos sectores en varios sentidos”.³⁰

Ello permite, por un lado, afirmar que los golpes marciales han cumplido la función de restaurar (así sea efímeramente) el muy precario equilibrio entre los sectores económicos de la Argentina y, por otro, matizar la afirmación —bastante ideologizada— de que las fuerzas armadas argentinas son, siempre y ante todo, el “perro guardián” de la oligarquía terrateniente, aunque es necesario reconocer que sus intervenciones tienden a identificarse mucho más con el orden establecido que con las corrientes transformadoras en el país.

Planteado el problema de la repercusión de lo económico en lo político y lo social, es pertinente avanzar en las interpretaciones dentro de los dos últimos terrenos, sin descuidar el mundo del pensamiento ideológico de los diferentes actores del drama argentino.

Ideologías, partidos políticos y grupos de presión: un balance.

El sistema político estable que parecía inaugurarse en el año de 1916 en la Argentina, a raíz de la asunción del poder por parte del radicalismo, se vio transformado por el poder militar de Uriburu en 1930. Desde entonces hasta ahora, la inestabilidad política es el hilo conductor de la historia del país.

Al echar un vistazo al comportamiento de los actores políticos argentinos, fácil resulta detectar dos grandes tendencias: por un lado la pérdida de relevancia de los partidos políticos en favor de los diversos grupos de interés y presión, entre los que sobresale notablemente el estamento castrense; y por otro, la conformación de una cultura política en donde el autoritarismo y los intereses faccionales han penetrado el pensamiento y la praxis de las principales fuerzas políticas.

Para demostrar la validez de ambas afirmaciones, resulta conveniente efectuar un análisis más o menos detallado de esos partidos y grupos en los últimos 70 años. Primero, los partidos políticos y sus respectivas ideologías.

El grupo heteróclito conocido como Unión Cívica Radical, surgido de la unión y yuxtaposición de sectores relativamente marginales a la preeminencia oligárquica a fines del siglo XIX logró, a principios del XX, afirmarse como una fuerza política nacional vigorosa y con arraigo entre la población. Sin embargo, a pesar de los individuales aciertos que se apuntaron los radicales en las presidencias de Yrigoyen (2 ocasiones) y Alvear, el fantasma de la división se fue haciendo presente al promediar la década de los veinte.

De este modo, disputarían la hegemonía del partido los personalistas y los antipersonalistas, quienes no están exentos de la responsabilidad de la caída del viejo líder de la UCR en 1930.

A partir de esta fecha el partido pugna, entre proscripciones y coqueteos, con las fuerzas armadas. En 1958, la UCR había sufrido una nueva escisión, esta vez entre los

"intransigentes" de tendencia desarrollista, y los "del pueblo" quienes, comandados por Ricardo Balbín, decían reivindicar el radicalismo histórico. Luego de la experiencia tan democrática como efímera del gobierno de Arturo Illia, la UCR se repliega para reaparecer, ya en los sesenta, aliada tácticamente con el peronismo dentro de la "Hora del Pueblo", que pedía el restablecimiento de la democracia conculcada por la "Revolución Argentina" de los generales Onganía, Levingston y Lanusse.

En el seno del radicalismo han confluído las más diversas corrientes ideológicas y prácticas, que van desde la democracia nacionalista -no exenta de cierto sesgo autoritario- de Yrigoyen, hasta el populismo casi peronista de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), pasando por el desarrollismo frondizista, el eficientismo de Alvear y el colaboracionismo de los líderes como Balbín con los militares. En todo caso este espectro de pensamientos y tendencias dentro del radicalismo tiene que ver menos con la variedad de clases sociales que encuentran sustento en él, que con el caleidoscopio ideológico característico de su principal núcleo militante: las clases medias.

Por su parte, el peronismo, sistema híbrido que conjuga contenidos paternalistas, autoritarios, antiliberales, integristas y semicorporativos con un discurso en donde privan el antimperialismo, la redistribución del ingreso y el nacionalismo económico salpicado de posturas terceristas y mesiánicas, constituye el paradigma indiscutible del populismo argentino. Luego de mantener el poder por un espacio de diez años (1945-1955), el general Perón marchó al exilio en Paraguay, no sin antes dejar tras de sí un dilema que la sociedad política y civil en Argentina adoptó durante mucho tiempo, colocándolo en el centro del debate, sea por acción o por omisión; esta dicotomía (peronismo vs. antiperonismo) definió, por lo menos entre 1945 y 1976, los contornos del quehacer político del país.

Entre tanto, y de forma similar a la UCR, el vago concepto de "justicialismo" invocado por los simpatizantes de Juan Domingo Perón, se hace tan amplio que abarca corrientes burocráticas, profascistas, autoritarias, liberales, integristas y de izquierda, por mencionar sólo algunas de ellas. De cualquier forma, es posible argumentar que la contradicción central del justicialismo -cualquiera que sea el nombre que adopte como partido- se da entre los cuadros superiores de una burocracia sindical verticalista, autoritaria y frecuentemente promilitar, y una constelación de militantes medios y de base que actúa en contraposición de la cúpula sindical, aunque sin lograr sustituir la hegemonía de ésta. No resulta extraño, en consecuencia, que el movimiento obrero argentino, soporte tradicional del justicialismo, se mueva entre esas dos alternativas, es decir, entre la esclerosis y el cambio.

En el ámbito de la izquierda, el panorama no es mucho mejor. Ernesto Giudici ha escrito que el problema de la izquierda en Argentina puede ser examinado a partir del siguiente hecho contradictorio: "de un lado, el desarrollo creciente de ideas que genéricamente pueden considerarse de izquierda y, del otro, el debilitamiento creciente de las organizaciones de izquierda".³¹

En efecto, la memoria no puede desentenderse de teóricos tan notables como Anibal Ponce, José Ingenieros o Deodoro Roca. Pero tampoco puede, si quiere ser sincera, olvidar que la izquierda argentina ha cometido, como dice Ernesto Giudici, "atrocidades teóricas, dignas de una antología".³²

Creemos que convendría, a los efectos de nuestro estudio, desarrollar algunos puntos descriptivos que aclaran un poco más el panorama de la izquierda argentina.

El Partido Socialista, fundado por Juan B. Justo, primer traductor de *El Capital* de Carlos Marx al español, fue también pionero al llevar a su representante Alfredo L. Palacios al Congreso Nacional, en calidad de primer diputado socialista de América en 1904. Durante los primeros años del siglo XX el Partido Socialista comienza a acumular cada vez mayor fuerza y su presencia se observa en amplios sectores de la sociedad civil. Sin embargo, el partido sufre una seria división en 1927, cuando la facción acaudillada por Federico Pinedo y Antonio de Tomaso funda el Partido Socialista Independiente, de corte antiyrigoyenista y dispuesto a realizar alianzas con las fuerzas conservadoras. Como dice Alberto Ciria: "el Partido Socialista Independiente surgió como puente entre el ala derecha del socialismo tradicional y la derecha conservadora, en el afán de dotar a ésta de una flexibilidad de maniobra más pronunciada en el esquema político del país ... los socialistas independientes ... en realidad eran conservadores liberales".³³

De esta contradicción entre su nombre y su ideología, el Partido sale mal librado, pues ya hacia 1940 había prácticamente desaparecido. No fue más venturoso el camino del Partido Socialista, el que después de desplegar una intensa labor parlamentaria durante la "década infame", minó su dinamismo, de tal forma que el experimento del general Perón lo encontró en un franco repliegue.

Mención aparte merece el Partido Comunista Argentino (PCA), fundado en la década de los veinte bajo la sombra de un prosovietismo innegable. Los vaivenes ideológicos del PCA lo han hecho ubicarse, desde antes de 1930, en el extremo contrario del movimiento popular. Así, antes que la oligarquía, el enemigo principal del comunismo argentino fue, primero, Hipólito Yrigoyen y, después, el peronismo, al que no se dudó en calificar de "fascista". Más recientemente y a pesar de haber sufrido enormes persecuciones bajo los gobiernos *de facto*, el PCA sigue empeñado en encontrar "militares nasseristas", allí donde la realidad nos indica la presencia de uniformados imbuidos, en general, de pensamientos retardatarios; ello no obsta para

que el partido en cuestión haya apoyado golpes de Estado como el de 1976 y, más tarde, la guerra de las Malvinas.

Junto a la pérdida de dinamismo de los sectores de izquierda, merece consignarse la atonía de los conservadores argentinos (una vez más, se demuestra que la política no es un juego de "suma-cero").

El Partido Conservador, que a fines del siglo pasado constituía el eje del dominio oligárquico del Estado, sufrió un acelerado proceso de desintegración. Ahora bien, "en los tiempos modernos, los intentos de fundar un partido conservador por parte de un militar -Jorge Manrique- o un ministro de Economía -Alvaro Alsogaray- chocaron contra la desconfianza de los sectores terratenientes y el descrédito de la sociedad civil".³⁴ Esto significa, en una primera lectura, que la debilidad de las expresiones partidistas de la derecha argentina tiende más que a compensarse con la recurrencia conservadora a los militares golpistas.

Tal es, *grosso modo*, el panorama de los partidos políticos argentinos hasta 1976. Desde luego, los enunciados no son los únicos partidos existentes en el país, aunque sí los de más arraigo entre el electorado, lo que resulta aún más evidente en el caso del justicialismo y la UCR en todas sus formas. Una vez revisados los partidos políticos, es posible intentar la disección de los principales grupos de presión e interés de la Argentina. Se estudiará, pues, a los grupos económicos y las asociaciones de propietarios, a la iglesia, a los sindicatos y a las fuerzas armadas.

Toda explicación del comportamiento de estos sectores debe partir de los recambios efectuados en el seno de la oligarquía argentina, la cual, en los últimos decenios, ha pasado de ser una oligarquía agraria terrateniente, a una nueva élite oligárquica que puede calificarse de polioligárquica.³⁵ Esta, dice Marcos Kaplan:

Se adapta a las nuevas realidades y se autotransforma... Se reestructura e integra con representantes y miembros del gran capital nativo (financiero, industrial, comercial, agrario), en alianza con las corporaciones multinacionales de la potencia hegemónica y de países avanzados de segunda línea... la nueva élite oligárquica establece coincidencias operativas y constituye coaliciones concretas -temporarias o duraderas- con las fuerzas armadas, la Iglesia, sectores de la clase media... e incluso de la burocracia sindical y de la aristocracia obrera.³⁶

La preservación del dominio oligárquico ha desembocado, insiste el propio Kaplan, en un hecho social de enormes consecuencias:

... la aparición tardía, la debilidad relativa, el apaciguamiento, la falta de autonomía y de proyecto propio de las clases y grupos que deberían haber tenido o en cierta medida tuvieron interés en el desarrollo general, el crecimiento, la modernización, la democratización, la autonomía internacional.³⁷

Una vez planteado este esquema, resulta necesario estudiar cómo ha actuado la oligarquía en sus distintas expresiones.

La gran burguesía agraria se ha manifestado, desde 1866, a través de la Sociedad Rural Argentina (SRA), organización que logró colocar a muchos de sus afiliados en altos puestos de los gobiernos provinciales o federales hasta 1946. Después de ese año, dicha tradición se erosionó, y desde entonces la SRA ha sido crítica de la mayoría de las administraciones, en particular de aquéllas que han favorecido la exacción de recursos del agro hacia la industria.

Es de añadir que lo más definitorio de la gran burguesía agraria es su pérdida relativa de poder y hegemonía que, sin embargo, ha podido conservarse "bajo la forma de un importante poder de invalidación para enfrentar y neutralizar iniciativas de otros sectores sociales y de fuerzas políticas que eran hostiles a sus intereses. Esa combinación entre *incapacidad de dirigir* y el *poder de invalidar* constituye ... el rasgo más característico de la gran burguesía agraria argentina".³⁸

Muy cercanos a los postulados ultraliberalistas en lo económico de la SRA, han estado otros sectores empresarios del agro que datan del siglo XIX como las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dentro de las cuales destaca la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), integrada en su mayoría por ganaderos criadores. Por el contrario, la Federación Agraria Argentina (FAA), creada en 1912 como vocera de los sectores arrendatarios, así como de los pequeños y medianos empresarios rurales, ha efectuado propuestas alternativas a las de la capa de grandes terratenientes, llegando inclusive a apoyar la realización de una reforma agraria; en otras coyunturas, sin embargo, la FAA se ha unido con la SRA y las CRA para protestar ante los poderes públicos o defender los ingresos de los productores agropecuarios en general.³⁹

La burguesía industrial, por su parte, ha materializado su acción por dos canales: la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General Económica (CGE). La UIA, creada en 1887, representa los intereses de la burguesía industrial tradicional en la Argentina. Opuesta al gobierno de Yrigoyen, esta organización, siempre contestaria frente a cualquier intento de mejoras en la legislación laboral, fue intervenida y disuelta por el primer gobierno peronista. Más tarde, ya rehabilitada, se une en 1958 con la SRA y otras organizaciones de propietarios para formar la entidad denominada Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) que, como su nombre lo indica, es la instancia que une a todos los sectores granburgueses defensores del liberalismo económico. En 1973, la UIA se retira de la ACIEL, en lo que resultó ser un interesante giro en las relaciones entre las cúpulas propietarias dentro de la sociedad argentina. A su vez, entre 1931 y 1970 se forma y se consolida la nueva burguesía industrial. Defensora del proteccionismo, la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del mercado interno, adquiere su expresión

orgánica –no por casualidad– entre finales de 1952 y principios de 1953, es decir, bajo la influencia de la restructuración semicorporativa que el peronismo intentó realizar en el Estado argentino. La Confederación General Económica es el resultado inmediato de ello y, por su filiación peronista, ha sido víctima propiciatoria de administraciones militares como la que desalojó al justicialismo en 1955, pero también ha logrado escalar a posiciones importantes dentro del aparato estatal, como lo demuestra el nombramiento de su ex dirigente, Juan Gelbard, como ministro de Economía durante el segundo gobierno peronista en 1974. Debe destacarse también que las relaciones de la CGE con el resto de las agrupaciones de propietarios no han sido del todo buenas; entidades como la SRA reprochan a la CGE su origen peronista y, por ello, la ubican como “totalitaria”.⁴⁰

En el ámbito del comercio y las finanzas, las principales organizaciones han sido, respectivamente, la Bolsa de Comercio y la Sociedad de Bancos ambas fundadas desde el siglo pasado. En el caso de la primera, su importancia tendió a aumentar en razón directa de la “terciarización” de la economía argentina, dentro de la cual el comercio –y sobre todo el gran comercio– ha jugado un papel muy importante. Asimismo, su relevancia se ha manifestado en el aumento de las sociedades anónimas y el incremento del volumen monetario en el mercado. Por lo que hace a la segunda, se reconoce que ha constituido, desde su fundación, adalid de los planteamientos más conservadores en todos los renglones. No en balde la élite comercial y de finanzas –sobre todo esta última, conocida irónicamente como la “patria financiera”– ha emergido como beneficiaria en casi todas las coyunturas político-económicas de la historia argentina.

Respecto a la participación de grupos económicos extranjeros en la actividad del país, resulta muy claro que los cambios ocurridos a lo largo del siglo XX dentro de la conformación del poder internacional han incidido notablemente en la naturaleza de la penetración de capitales foráneos. Al neto predominio inglés observado en este campo durante el siglo XIX y ya bien entrado el presente (sobre todo en ferrocarriles, seguros, petróleo, transportes urbanos, servicios portuarios y empresas eléctricas) lo ha relevado, sobre todo desde 1945, una creciente participación de capitales estadounidenses en las ramas más dinámicas de la economía.

La Iglesia católica, en tanto que institución, ha permanecido como una de las más retardatarias, pero también más hábiles de América Latina, pues ha logrado mantener indudables cuotas de influencia dentro de los sucesivos gobiernos civiles y militares en la Argentina. La ideología eclesial retoma y difunde, en general, los ritos, mitos y posiciones de la jerarquía apostólica preconciliar. Cuando el poder que la Iglesia ejerce sobre considerables sectores de la población se ha visto inclusive ligeramente amenazado, el pronto veto de esa instancia ha entrado en acción. Trátese de legalizar el divorcio o de recuperar –restándolas al Estado– ciertas parcelas de la educación,

las posiciones clericales fueron y son contrarias a todo cambio social. De ahí el apoyo de la jerarquía eclesiástica a la mayoría de los gobiernos militares que, por lo demás, tienden a retroalimentarse con la retórica de su pertenencia a la "sociedad occidental y cristiana".

Con respecto a las organizaciones sindicales, ya se ha esbozado, al referirnos al papel del partido peronista, el proceso de burocratización creciente mediante el cual organizaciones como la CGT pueden servir como apoyo de gobiernos militares y antipopulares; pueden y pudieron adquirir tanto o más poder que el líder del peronismo, o bien pueden servir (como en el caso de la CGT de los argentinos después de 1968) como vanguardia en las luchas sociales progresistas. De cualquier manera, el sindicalismo argentino, a pesar de su tradición reivindicativa en términos de salarios y prestaciones, escasas ocasiones ha cuestionado la validez del modelo agroexportador o de la inserción subordinada del país dentro de la división internacional del trabajo, a semejanza de lo que ocurre con las clases medias.

Finalmente, las fuerzas armadas, por su inserción en la sociedad, sus atribuciones económicas, su capacidad de imponerse sobre el resto de los actores sociales y su papel de instancia decisoria dentro del acontecer nacional, son, sin duda alguna, la institución que mejor parece confirmar la hipótesis atinente a la pérdida de importancia de los partidos políticos y el correlativo fortalecimiento de los grupos de presión en la Argentina.

La preeminencia del monopolio armado pasa por su participación económica en las empresas estatales, pero no se agota ahí. Si bien es cierto que, efectivamente, los conglomerados productivos agrupados en la órbita de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares han llegado a ser partícipes de más del 2% del producto nacional bruto,⁴¹ y que las instituciones marciales cuentan con una vigorosa tradición industrialista (como lo demuestran los casos de los generales Savio, Mosconi o Quihilalt, impulsores de la siderurgia, el petróleo o las actividades nucleares), no es menos verdadero que, como causa y consecuencia de lo anterior, los militares han extendido su influencia a la mayoría de las esferas sociales y políticas, aun bajo gobiernos civiles.

Pero esos datos no pueden interpretarse aisladamente, sino que deben valorarse en el contexto más amplio del papel político de los militares. En la medida en que la inestabilidad política se ha apoderado de la Argentina desde 1930 —en buena parte por las intervenciones del Ejército—, las fuerzas armadas, tanto en sus versiones "liberal" y "autoritaria-corporativista", como en su vertiente "industrialista-tecnocrática",⁴² constituyen la única instancia capaz, gracias al poder de las armas, de ejercer un dominio (aunque no una hegemonía plena) sobre el resto de los segmentos sociales. Que el estrato militar —marcado por el autoritarismo, el desprecio a los "polítiqueros" civiles y, más recientemente, por un anticomunismo a

ultranza emparentado con las premisas de la Guerra Fría –no es sólo un grupo de presión, sino *la* instancia más importante de la política argentina, se intentará demostrar en el siguiente acápite. Interesa retener, por ahora, la idea de su enorme y lamentable gravitación en todos los ámbitos.

Antes de cerrar la presente sección, es necesario retomar un concepto apenas insinuado al inicio de ella, esto es, la conformación de una cultura política autoritaria y poco inclinada al respeto de la institucionalidad. Cabe anotar al respecto, como lo hace Susana Mallo, que:

La oligarquía por su ubicación y sus convicciones y el Ejército –por su estructura y sus reglas de funcionamiento– son, en esencia, autoritarios. Pero también lo fueron los dos partidos mayoritarios que se estructuraban alrededor de un líder ... Asimismo, el autoritarismo penetró en las organizaciones sindicales...⁴³

Queda en el ánimo, después de contemplar situaciones como las que se han descrito, la idea de que el autoritarismo y el militarismo poseen, en la Argentina, raíces sociales mucho más profundas que las que insinúan los continuos golpes de Estado y pronunciamientos militares. Veamos, pues, las causas sociales que subyacen a los conflictos políticos y económicos.

Crisis social e intervenciones militares

Si se acepta el concepto de crisis en el sentido de “riesgo y oportunidad”, bien puede asegurarse que en la Argentina el vocablo se asimila mucho más a la primera connotación que a la segunda.

No deja de ser sintomático que, a partir de que las realidades de la economía mundial cuestionaron seriamente el modelo agroexportador en América Latina en general y en Argentina en particular, este país no ha podido sacudirse del todo la forma de acumulación basada en el comercio de productos agropecuarios y, lo que es más preocupante, sigue percibiendo el grueso de sus divisas por dicho concepto.

Tampoco puede soslayarse que la pérdida relativa de hegemonía detentada por la oligarquía terrateniente tradicional no ha podido ser compensada por la hegemonía de otras clases o fracciones de clase en un plano estructural, vale decir, más o menos permanente. Sin embargo, este vacío hegemónico en lo político contrasta con el poder económico incuestionable que da a la polioligarquía la facultad de controlar los resortes fundamentales de la vida económica argentina.

Ante tales hechos, no es descabellado suponer que las intervenciones militares –habida cuenta del peso innegable que las fuerzas armadas tienen en la vida nacional– cumplen el papel de restaurar la hegemonía en una sociedad que carece de ella.

En este sentido, es necesario recordar que el militarismo en la Argentina no sólo se produce mediante el asalto de los uniformados al aparato estatal, sino también adquiere, frecuentemente, la aprobación implícita o explícita de amplios sectores civiles, cuando no es el caso de una tácita bienvenida, como en 1966 y 1976.

Una primera explicación de estos fenómenos es la que da Rouquié al hablar del "sueño del general propio", gracias al cual en los últimos años "todas las fuerzas políticas prefieren obtener la victoria sobre el adversario que se encuentra en el poder antes que salvaguardar las instituciones... Cuando se encuentran en la oposición ... todos los partidos por turno tramam complots, alientan a los militares golpistas y combaten los esfuerzos del gobierno para preservar la frágil legalidad constitucional".⁴⁴

Esto, que parece nuevo, no lo es tanto. Ya el general Rodríguez, eminencia gris en el gobierno concordancista de Justo, pronunciaba lo siguiente, en 1932, ante la Cámara de Diputados:

El militarismo no nace siempre del ejército; el militarismo suele ser una enfermedad, un mal que crean los partidos políticos cuando utilizan el ejército para lo que no deben, ya sea para hacer propaganda en la forma que se viene realizando por algunos diputados, o ya porque los partidos políticos lo emplean con propósitos que lo alejan de su misión.⁴⁵

Y cuando los partidos políticos actúan así, nada raro es que el ejército sufra un proceso creciente de politización. Si a estas dos deformaciones se suma la alta personalización de la política argentina, resulta más sencillo comprender el fortalecimiento de tendencias corporativas y particularistas en ese país.

En síntesis, por lo menos desde 1930, la crisis económica, política y social de la Argentina tiene sus orígenes en los factores que se acaban de explicar. Ellos explican también el golpe militar de marzo de 1976, que es materia de estudio en los siguientes capítulos de la presente tesis.

NOTAS CAPITULO II

- ¹ Raúl Prebisch, cit. por Gregorio Selser, "Rendición, derrota y ruina; pero siguen en el poder", en *Cuadernos de Marcha*, segunda época, año III, núms. 17-18, ene.-abr. 1982, p.59.
- ² Alain Rouquié, "Hegemonía militar, Estado y dominación social", en A. Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, México Siglo XXI, 1982, p. 13.
- ³ Aldo Ferrer, "La economía argentina al comenzar la década de 1980", en el *Trimestre Económico*, vol. XLVIII (4), núm. 1982, oct.-dic. 1981, p. 833.
- ⁴ Leopoldo Allub, *Orígenes del autoritarismo en América Latina*, México, Editorial Katún, 1983, p. 69.

- ⁵ *Ibidem*, p. 88.
- ⁶ Según Robert A. Potash, *El Ejército y la política en la Argentina, 1928-1945. De Yrigoyen a Perón*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1971, p. 70.
- ⁷ Alberto Ciria, *Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946)*, Buenos Aires, Jorge Alvarez Editor, 1964, p. 19.
- ⁸ R. A. Potash, *op. cit.*, pp. 36-37.
- ⁹ Marcos Kaplan, "50 años de historia argentina (1925-1975): el laberinto de la frustración", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: historia de medio siglo*, México, Siglo XXI, 1985, p. 17.
- ¹⁰ La enunciación de estas medidas aparece en Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina, t. II, 1943-1973*, Buenos Aires, Emecé Editores, 1982, p. 52.
- ¹¹ Cfr. M. Kaplan, *op. cit.*, p. 21.
- ¹² Un análisis más detallado de la ideología justicialista se encuentra en Mario Salazar Valiente. "Peronismo, proceso político argentino: una interrogante", en *Deslinde*, núm. 52, abril 1974, pp. 16-18.
- ¹³ M. Kaplan, *op. cit.*, p. 50.
- ¹⁴ Cfr. A. Rouquié, "Poder militar...", *op. cit.*, p. 151.
- ¹⁵ *Ibidem*, p. 295.
- ¹⁶ Sobre estos hechos consúltese Justo Escobar y Sebastián Velázquez, *Examen de la violencia argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, p.29.
- ¹⁷ Véase *Ibidem*, pp. 59-66.
- ¹⁸ A. Rouquié, *El Estado militar en América Latina*, México, Siglo XXI, 1984, p. 304.
- ¹⁹ *Ibidem* p. 304.
- ²⁰ Véase Jorge Schvarzer, "Experiencias fracasadas de crecimiento. El caso argentino", en *Nueva Sociedad*, núm. 78, sep.-oct. de 1985, pp. 48-58.
- ²¹ Cfr. Carlos Quijano, "Declinación y estancamiento, en *Cuadernos de Marcha*, segunda época, año V, núms. 30-31, dic.1984-ene.1985, p. 117.
- ²² Cifras de la CEPAL, *Estudio Económico de América Latina*, Santiago de Chile, 1980.
- ²³ Cifras del BID, cit. por Carlos Abalo, "Argentina 1976-1981. Objetivos y resultados de la política económica (primera parte)", en *Comercio Exterior*, vol. 31, núm 6, junio de 1981, p. 636.
- ²⁴ *Idem*, p. 636.
- ²⁵ *Idem*, p. 636.
- ²⁶ Cfr. C. Quijano, "Declaración ..." *op. cit.*, p. 120.
- ²⁷ Cifras de la CEPAL, *Desarrollo económico de la Argentina, parte I: Los problemas del crecimiento económico argentino*, México 1959.
- ²⁸ Cfr. La muy bien documentada obra de Carlos F. Díaz-Alejandro, *Essays on the economic history of the Argentine Republic*, New Haven, Yale University Press, 1970, pp. 335 y ss.

- ²⁹ Cit. por C. Abalo, "Aldo Ferrer y el dilema económico de Argentina" en *Comercio Exterior*, México, vol. 28, núm. 8, agosto de 1978, pp. 994-995.
- ³⁰ Alain Rouquié, "Poder militar..." *op. cit.*, p. 397.
- ³¹ Ernesto Giudici, "El problema de la izquierda en Argentina", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm 61, julio-agosto de 1982, p.87.
- ³² *Ibidem*, p.91.
- ³³ A. Ciria, *op. cit.* p. 147.
- ³⁴ Susana Mallo Reynal, "Argentina: en busca del tiempo perdido", en *Estudios Políticos*, nueva época, vol. 3, núm. 3, julio-septiembre de 1984, p.15.
- ³⁵ Según la expresión de J. Escobar y S. Velázquez, *op. cit.*, p. 22.
- ³⁶ Marcos Kaplan, *op. cit.*, p. 32.
- ³⁷ *Ibidem*, p. 32.
- ³⁸ Ricardo Sidicaro, "Poder y crisis de la gran burguesía agraria argentina", en A. Rouquié, *Argentina, hoy...* *op. cit.*, pp. 66-67. Los subrayados se encuentran en el original.
- ³⁹ Véase *Ibidem*. p. 77.
- ⁴⁰ *Ibidem*, p. 73.
- ⁴¹ A decir de Martin Andersen, "Dateline Argentina: Hello democracy", en *Foreign Policy*, núm. 55. otoño de 1984, p. 157.
- ⁴² La clasificación es de A. Rouquié, "Poder..." *op. cit.*, p. 348.
- ⁴³ S. Mallo, *op. cit.*, p. 14.
- ⁴⁴ A. Rouquié, *Poder...*, pp. 340-341.
- ⁴⁵ Cit. por A. Ciria, *op. cit.*, p. 240.

III. EL GOLPE MILITAR DE 1976 Y LAS ETAPAS POLITICO-ECONOMICAS DEL "PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL".

El 24 de marzo de 1976, los militares irrumpen por séptima vez desde 1930 al poder de la República Argentina. En esta ocasión, sin embargo, su permanencia en la Casa Rosada no está prevista como un hecho temporal, sino como un proyecto "fundacional" que intenta recomponer, desde la raíz, un sistema sociopolítico y económico que los militares y sus aliados perciben como inoperante, ineficiente, insostenible. Más que un *putsch* típico, el de 1976 constituye un nítido intento de conformar un nuevo aparato estatal apoyado por la fuerza de las armas.

¿En beneficio de quién? Es obvio, por lo que se anotará en las siguientes páginas, que el modelo surgido del golpe beneficia (aunque no sistemáticamente a un sólo grupo) a los grandes propietarios y a los sectores sociales en los que el capital se encuentra más concentrado, esto es, los grupos agroexportadores de la pampa húmeda, los financistas y especuladores nacionales y extranjeros, y el núcleo más competitivo de la gran industria. En contraste, los perjudicados serán aquellos que conforman el 90% o más de la población argentina: obreros, clases medias, arrendatarios agrícolas y pequeños y medianos empresarios.

Este proceso de agresión política, económica y física contra la mayoría no fue, sin embargo, uniforme y conviene, por ello, hablar de etapas. El discurso es semejante en cada una de ellas, pero es posible distinguir matices en cada una de las cuatro fases que enumeramos.

Desde luego, la periodización tiene algo de arbitraria y no responde de manera exacta a acontecimientos clave. Es, más que nada, un panorama general de los avatares de un proyecto que, a pesar de lo que sus impulsores hubiesen deseado, no resultó del todo monolítico y menos aún exitoso.

Hechas las anteriores advertencias, no resultaría ocioso recordar los primeros momentos de la dictadura porque son fundamentales para comprender el resto del periodo. Al tomar el poder las fuerzas armadas apresan a la presidenta constitucional; declaran la caducidad de todas las autoridades civiles desde el Ejecutivo hasta las gubernaturas; disuelven el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los

consejos municipales y la Sala de Representantes de la capital federal; destituyen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia Federal, al procurador Federal de la Nación, a los miembros de los tribunales superiores de Justicia en las provincias, y al procurador del Tesoro y suspenden, para "serenar los espíritus", la actividad política y sindical.

A partir de esas acciones, el llamado "Proceso de Reorganización Nacional" crea, de acuerdo con sus intereses y a su entero arbitrio, una nueva legalidad contenida en el "Estatuto" y los "Objetivos Básicos" del citado "Proceso". Dichos ordenamientos, junto con nuevas disposiciones, pasan a ocupar un sitio superior a la Constitución de 1853 y anulan *de facto* gran parte de las garantías individuales. El terreno, pues, estaba abonado y el hombre fuerte se llamaba Jorge Rafael Videla.

1. LA PRIMERA JUNTA MILITAR: "GUERRA SUCIA" EN TODOS LOS FRENTE.

Acompañado por el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, el general Videla se convirtió en el más férreo impulsor de una *conditio sine qua non* para el funcionamiento correcto del modelo instaurado: la represión, eufemísticamente llamada "guerra sucia" por los cuadros de las fuerzas armadas que la instrumentaron, pero mejor caracterizada como "terrorismo de Estado" por los que se han dedicado al estudio y/o la denuncia de esta orgía sangrienta que dejó un saldo de entre 10 mil y 30 mil desaparecidos, más de 8 mil víctimas de las fuerzas de seguridad y cientos de miles de argentinos en el exilio.

La acción de la guerra sucia abarcó múltiples parcelas de la actividad nacional, entre las que resaltan cuatro principales:

a) Acciones represivas contra el movimiento sindical y las iniciativas de los trabajadores, que se manifiestan en la suspensión *sine die* del derecho de huelga, la interrupción de la actividad gremial, la intervención de la CGT y la mayoría de las asociaciones profesionales de primer y segundo grado y la suspensión de las negociaciones colectivas de trabajo.

b) Disposiciones represivas que afectan al pueblo en su conjunto; se reflejan en el mantenimiento del estado de sitio, la creación de tribunales militares especiales y la vigencia de leyes que anteponen la seguridad nacional a los derechos humanos.

c) Acciones represivas contra los partidos políticos, a los que se les prohíbe realizar sus tareas específicas.

d) Represión de hecho: más allá de cualquier ley, esta vertiente es la más utilizada en la primera fase de la dictadura. Incluye, como ya se ha anotado, la supresión física, la tortura, el encarcelamiento, las amenazas que conducen al exilio y las

"desapariciones". Los beneficiarios de toda esta furia son, por lo general, dirigentes políticos y sindicales, estudiantes, abogados defensores de derechos humanos, periodistas, profesores universitarios, minorías étnicas, sexuales y religiosas y *sospechosos* de perturbar el orden social propuesto por los militares.

Con estas severas limitaciones, resultaba sumamente difícil que el sector popular no hubiese actuado como lo hizo, es decir, permaneciendo a la defensiva durante la mayor parte de la gestión de Videla.

No obstante, ese monolitismo aparente, basado en la unidad de los militares y en la aceptación silenciosa de la mayoría, comenzó poco a poco a resquebrajarse.

Primero, la clase obrera traslada su actividad política desde fuera hacia adentro de las fábricas. Comienza así a extenderse el trabajo a desgano y el sabotaje a la producción, como ocurrió tempranamente en los casos de Renault, Ilsa y Alpargatas y se reafirmó de manera más combativa y abierta con la huelga general del 27 de abril de 1979, que logró concitar cierto apoyo popular. El ápice de la resistencia obrera en el período videliano sería, finalmente, la cristalización de la Conducción Unificada de los Trabajadores Argentinos (CUTA) en 1979, que agrupó, en principio, a casi 2 millones de trabajadores filiación mayoritariamente peronista.

Otro importante núcleo contestatario fue el de las Madres de la Plaza de Mayo quienes, en reclamo de sus familiares desaparecidos, comenzaron a ocupar cada jueves, a partir de 1977, el corazón cívico e histórico del país. Hubo también ciertos núcleos intelectuales y estudiantiles que iniciaron de manera paulatina el descongelamiento de la movilización social.

Ya a principios de 1981, es decir, en las postrimerías de la administración de Videla, la prensa reflejaba esto en alguna medida, con el aumento de noticias, reportajes y cartones en tono crítico hacia la política del gobierno. También algunos miembros de la alta jerarquía de la Iglesia Católica aliada fiel del régimen, se permitieron realizar algunas críticas, como la del obispo auxiliar de Vidma, quien ordenó la práctica de las desapariciones forzadas.

Aproximadamente en las mismas fechas se produce la ruptura entre la conducción económica del régimen y el conjunto de pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales, al constituirse la Convocatoria Nacional Empresaria, agrupación que cuestionó uno de los pilares sobre los que se asentaba el régimen: la política económica.

Para completar el panorama de tensiones, la unidad intercastrense que hasta unos meses antes parecía incuestionable, comienza a fisurarse en razón de las divergencias promovidas por la Armada, fuerza que comenzó a manifestar evidentes desacuerdos con el resto de sus congéneres.

No es de extrañar, entonces, que, a iniciativa del ministro del Interior, general Albano Harguindenguy, se lanzase, en la última fase de Videla, la idea de un "diálogo

político" restringido a los "notables" de algunos sectores sociales y partidos políticos seleccionados previamente por el gobierno, con la idea de darle un contenido más consensuado a las acciones de éste.

Mientras tanto, en el terreno económico, desde 1976 los hilos decisivos fundamentales se encontraban en manos del doctor José Alfredo Martínez de Hoz, elemento conocido por sus buenas relaciones con los círculos financieros internacionales, así como por su relevancia dentro del elenco grancapitalista argentino. Avalado por el voto de confianza de las cúpulas castrenses, Martínez de Hoz implementó, con base en el Programa Económico del 2 de abril de 1976, una política de "gradualismo", destinada a reacomodar la economía nacional conforme a las transformaciones en la división internacional de trabajo, gracias a las cuales Argentina podía aprovechar plenamente sus ventajas comparativas, reduciendo los costos de la mano de obra, liquidando empresas "ineficientes" y reasignando oportunidades y recursos conforme a la productividad. Esta política económica, que en realidad sólo condujo a un proceso muy acelerado de concentración y centralización de capitales y que se analiza detalladamente en el siguiente capítulo de este trabajo, no arrojó, contra lo que algunos piensan, beneficios únicos y permanentes para el capital productivo transnacional.

En un primer momento, la política instrumentada desde el Ministerio de Economía se avino con los intereses de los grupos agroexportadores los cuales no pudieron, empero, capitalizar este auge inicial durante todo el periodo, a pesar de su empatía ideológica con medidas como las devaluaciones de la unidad monetaria frente al dólar, el supuesto repliegue de la acción intervencionista del Estado en la economía y la firma de un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional.

El problema de fondo no era, en modo alguno, de empatía. Por ello, durante una segunda fase de la política económica, el sector agropecuario disputa la primacía de las utilidades con los grupos rentistas que, a partir de la reforma financiera de junio de 1977, pasan a a ser los usufructuarios privilegiados del sistema, gracias a la liberación de las tasas de interés que crecen por encima del nivel inflacionario, ofreciendo el mejor negocio para la especulación financiera nacional e internacional. De esta manera, y *pari passu* con el colapso de las industrias que más habían crecido durante la etapa de sustitución de importaciones (alimentos, bebidas, textiles, confecciones), en la Argentina de 1978, la economía productiva había cedido su lugar a una de raigambre netamente especulativa. En ese año la inversión representó sólo el 8 por ciento del PIB, frente a un ahorro del 27 por ciento, cifras que confirman nuestra afirmación anterior.¹

Un tercer momento de la gestión de Martínez de Hoz se concretó a finales de 1978, cuando se da a conocer un programa basado en el "enfoque monetario de la balanza de pagos", paradigma teórico que, sustentado en acciones frente a los precios

absolutos, asocia la programación del tipo de cambio y la reforma arancelaria profunda con el combate a la inflación en el interior de las fronteras.² El programa del 20 de diciembre de 1978 conduciría inevitablemente a la sobrevaluación del peso frente al dólar, con lo que los intereses agropecuarios perdieron todavía más gravitación; asimismo, las importaciones, como era de esperar, aumentan 93.7 por ciento, y las exportaciones caen 7.5 por ciento en el año de 1979. Con esta evolución en el panorama económico, la actividad productiva siguió en decadencia, y la especulación, ahora sumada a un festín de productos suntuarios de importación propiciado por los grupos de altos ingresos, terminó por desembocar en una crisis evidente a fines de 1980 y principios de 1981.

En efecto, en ese lapso se producen numerosas quiebras entre las que destacan la del Banco de Intercambio Regional (BIR), uno de los conglomerados financieros más importantes de la Argentina, al igual que las de Sasetru, Oddone, Greco, Celulosa, Fabril Financiera y otras 27 empresas industriales y bancarias de gran relevancia para la economía argentina. El cuarto momento del proconsulado económico del superministro gurú de la libre empresa redundó, sin rodeos, en la quiebra, expresada ésta en el signo negativo de la balanza de pagos corriente, la caída de las exportaciones industriales, la reducción de los ingresos y la producción en el agro, la destrucción de la estructura productiva y las economías regionales y el endeudamiento externo rampante que, sobre todo entre 1980 y 1981 sirvió como pivote de la especulación y la reducción vertical del poder adquisitivo de los salarios.

Al comenzar la década de los ochenta Argentina se encontraba a un nivel semejante al de diez años antes, pero con un parque industrial significativamente mermado y una debilidad económica estructural. De este modo, el régimen fue perdiendo cada vez más las simpatías de amplios segmentos sociales y productivos. Dice al respecto Liliانا de Riz: "En los cinco años de gestión del general Videla, una tras otra se fueron levantando las voces de protesta de las clases poseedoras: desde la Sociedad Rural que representa a la gran burguesía pampeana, hasta la Federación Agraria Argentina (pequeños y medianos propietarios); desde los sectores de la pequeña burguesía industrial, marginal, hasta los sectores de la mediana y gran burguesía industrial".³

Las relaciones exteriores del régimen no marchaban mucho mejor, ya que en los últimos días de 1978 había estado a punto de estallar una guerra con Chile debido al litigio por islas del canal de Beagle. Con Estados Unidos también se registraron serias tensiones por las condenas que, en diversos foros y bajo la retórica de los derechos humanos impulsada por la administración de James Carter, ese país formuló a la Argentina así como por la enmienda Humphrey-Kennedy que prohibía vender armas a regímenes violadores de garantías individuales, entre los que destacaba el de Buenos Aires. Otros hechos conflictivos para la diplomacia argentina en el periodo de

referencia fueron su apoyo al golpe militar del general Luis García Meza en la vecina Bolivia, las dificultades con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en torno a la materia de competencia de dicha instancia, y el otorgamiento del premio Nóbel de la Paz de 1980 al abogado Adolfo Pérez Esquivel, noticia que disgustó visiblemente tanto a los militares como a los estrategas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En síntesis, la evolución políticoeconómica registrada en Argentina hasta fines de 1980, hacía no sólo desahable sino posible un recambio cosmético y formal en la administración militar, practicado a fin de cuentas, no sin vociferantes reticencias de algunos de sus integrantes. Reticencias y enfrentamientos dentro del estamento militar serían también moneda corriente en la gestión del sucesor de Videla.

2. APERTURA TIMIDA Y PUGNAS EN LAS FUERZAS ARMADAS: EL INTERREGNO DE ROBERTO VIOLA.

La asunción del poder por parte del nuevo presidente, en marzo de 1981, había estado precedida por un lapso de seis meses (la "administración del silencio") durante los cuales se vivió una situación muy semejante a la del vacío político. Aun cuando Viola había sido designado titular del Poder Ejecutivo en octubre de 1980, la incertidumbre campeó entre esa fecha y su toma de posesión, pues si bien la labor de Viola como comandante militar de la "guerra sucia" y sus propuestas para transnacionalizar el "combate a la subversión" eran harto conocidas, se ignoraba cómo podría actuar una vez investido con la presidencia de la República. Uno de los rumores más extendidos durante la "administración del silencio" era el que aseguraba que el mandatario designado mantenía buenas relaciones con los partidos políticos, sobre todo con la UCR, y con la Comisión Nacional del Trabajo, agrupación parasindical; se decía, asimismo, que en estos y otros sectores existían dirigentes deseosos de colaborar con el general entrante.⁴

Fuese ello cierto o no, Viola se empeñó, una vez asumido el cargo, en cambiar la imagen dictatorial del "Proceso de Reorganización Nacional". Para ello, ordenó y favoreció la eliminación de ciertas restricciones a la prensa,⁵ permitió un tímido relanzamiento de las actividades de los partidos políticos y se preocupó por aflojar moderadamente los mecanismos coercitivos empleados para obtener la disciplina social.

Es durante el interregno de Viola cuando emerge la Multipartidaria, formada por la Democracia Cristiana, el Partido Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Con la muy precavida consigna de "reconciliación nacional y democracia" y convocada por el viejo líder de la UCR, Ricardo Balbín, la Multipartidaria elude pronunciarse de

manera abierta frente la cuestión de "desaparecidos" que ya para entonces se había convertido en punto álgido del debate político.

Quienes no quitaron el dedo del renglón fueron los familiares de las víctimas de la represión y los organismos de derechos humanos, quienes prosiguieron sus labores con empuje semejante al mostrado durante el periodo anterior.

En la esfera sindical, por otra parte, la incipiente reactivación observada en los últimos días de Videla se reafirma con el paro de SMATA en junio de 1981, la huelga general del 22 de julio, la recomposición de la CGT y la marcha del 7 de noviembre que congregó a más de 50 mil obreros en las calles de Buenos Aires.

En tanto, la Iglesia Católica también expresa su posición crítica frente al régimen que hasta entonces había apoyado en manera casi incondicional. En mayo, la Conferencia Episcopal Argentina da a conocer el documento "Iglesia y Comunidad Nacional" en el cual previene contra los peligros de la usura (en evidente alusión a la política económica) y critica los excesos represivos de las fuerzas armadas. A esta insólita —en el contexto— declaración de la cúpula eclesiástica, siguió una renovada actividad de obispos que habían mantenido posiciones en pro de la democracia y los derechos humanos y el resurgimiento de los llamados "curas obreros" en las diócesis que conforman el cinturón industrial de Buenos Aires.⁶

Las contradicciones intercastrenses prosiguieron, particularmente en lo referente a la democratización y la instrumentación de la política económica. Las divergencias se reflejaron no sólo entre Viola y otros militares, sino también entre el personal civil del régimen. Son conocidas las fricciones entre el ministro de Economía Sigaut y el ex ministro Martínez de Hoz, a quien aquél responsabilizó de haber dejado la economía nacional muy deteriorada.⁷

La política exterior fue, en este periodo, otro campo que generó fricciones entre los militares. Ya se ha dicho que uno de los imperativos de Viola era romper la asociación psicológica entre el régimen y la violencia. La proyección internacional de esa estrategia se encomendó al canciller Oscar Camilión, quien, entre otras medidas, promovió la donación de 15 mil toneladas de trigo a la Nicaragua sandinista, y buscó y obtuvo la venta a la URSS, en 1981, de 7 millones de toneladas de cereal en lugar de los 4.5 millones previstos con el acuerdo de 1980. También se propuso ampliar el diálogo con Estados Unidos si éstos derogaban o neutralizaban la enmienda Humphrey-Kennedy.⁸

Paradójicamente la instrumentación de esta diplomacia, antes que mejorar de manera substancial la imagen del régimen, atemorizó a muchos de sus integrantes y precipitó el golpe contra Viola. Aprovechando una supuesta afección cardíaca de éste, el comandante en jefe del Ejército, Leopoldo Galtieri conspiró, junto con un sector de las fuerzas armadas al que se apodaba "los centuriones", para desalojarlo del poder.

El ministro del Interior Horacio Liendo primero y el general Carlos Alberto Lacoste después, sustituyen a la Junta integrada por el propio Viola, el almirante Lambruschini y el brigadier Omar Graffigna, quienes habían cometido, a ojos de sus colegas, excesos aperturistas imperdonables tanto en el frente interno como en el externo.

Consideraciones análogas se aplicaron a la política económica, a la que el ministro del ramo, Lorenzo Sigaut, quiso, tal vez más consciente que su antecesor frente a las consecuencias negativas del modelo elegido, hacer más moderada, mediante la descentralización del manejo de la economía en cinco ministerios, el establecimiento de políticas monetarias y fiscales de corte restrictivo y, sobre todo, la implementación de sucesivas devaluaciones que favorecerían los intereses de la oligarquía agroexportadora.

De cualquier manera la situación económica argentina, a esas alturas era de manejo muy delicado, y la inercia abismal hacía sumamente difícil intentar cualquier acción más o menos alternativa. El panorama de la crisis era el siguiente: de enero a agosto de 1981, las quiebras comerciales alcanzaron un monto de 1 544 millones de dólares, la deuda externa y la fuga de capitales se habían incrementado vertiginosamente y la tasa de desocupación se duplicó. En el último trimestre de 1981, el PIB cayó 11.4 por ciento con respecto al mismo lapso del año anterior; el producto industrial casi 23 por ciento y los salarios reales, 19.2 por ciento.⁹

Atenazados pues, entre la crisis económica, la beligerancia cada vez más grande de extensos sectores sociales y el estado de deliberación existente en el seno de las fuerzas armadas, Roberto Viola y su tímida apertura fueron desplazados por la línea dura del ejército.

3. DEL EXPANSIONISMO DIVERSIONISTA A LA DEBACLE DEL PROYECTO MILITAR: LOS MALOS CALCULOS DEL GENERAL GALTIERI Y EL FRACASO MONETARISTA.

A partir del 24 de diciembre de 1981, el general Leopoldo Fortunato Galtieri asume, con el doble carácter de presidente y comandante en jefe del ejército, el liderazgo del Proceso de Reorganización Nacional. Anticomunista y anteperonista recalcitrante, el nuevo mandatario intentó proyectar una imagen de firmeza y efectividad para retomar y llevar hasta sus últimas consecuencias el proyecto original de 1976, tanto en los aspectos políticos como en los asuntos económicos y sociales.

Al igual que sus compañeros de Junta —el almirante Anaya y el brigadier Lami Dozo— Galtieri seguramente sabía que no iba a ser fácil detener la ola de movilizaciones desatada en los meses recientes, máxime cuando el espectro del

combate a la subversión interna había agotado su efectividad como fuente de legitimación social desde hacía algún tiempo.

Que la movilización continuaba en ascenso lo demuestran, entre otros hechos, la manifestación de febrero de 1982, cuando un contingente de obreros se unió a las madres de la Plaza de Mayo en sus reclamos; las protestas de estudiantes e intelectuales y, de manera primordial, la enorme marcha del 30 de marzo de ese año que con la consigna de "paz, pan y trabajo" tuvo lugar simultáneamente en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, donde fue reprimida dejando un saldo de 2 mil detenidos y un número similar de personas heridas, en su mayoría miembros de la convocante CGT.

Ante la magnitud de la oposición en el primer cuarto de 1982, para el gobierno se hacía urgente la necesidad de una victoria en el plano internacional. Se ha demostrado incluso que en esa presunta victoria, lograda mediante el desembarco en las Malvinas, ya estaba planificada por lo menos desde enero de 1982, sino es que desde antes del ascenso de Galtieri al poder (la Armada, desde varios años atrás, la incluía en sus planes de guerra).¹⁰

De modo que ambos nombres —Malvinas y Galtieri— están indisolublemente asociados con esta tercera etapa de la dictadura militar argentina; los cálculos de la acción diversionista fueron, sin embargo, pésimos.

Partiendo del aserto del contralmirante Fraga con el sentido de que "con un destructor y una compañía de infantes" era posible tomar las islas,¹¹ Galtieri y sus asesores pensaron que, gracias a su participación como proveedores de armas y asesores a la contrarrevolución centroamericana y a su alineamiento ideológico con la administración Reagan, ésta optaría, en caso de verse obligada a decidir, por apoyar a Argentina, dejando de lado los compromisos con su más importante aliado de Occidente, es decir, la Gran Bretaña.

También se pensaron tres supuestos estratégicos erróneos más. En primer lugar, el Ministerio de Defensa británico se encontraba en 1982 tratando de implementar su proyecto *Chevaline*, destinado a mejorar las ojivas de los misiles nucleares *Polaris*. El esfuerzo para adquirir el sistema *Trident II*, sucesor del *Polaris*, se calculó, en términos presupuestales, en 7 mil millones de libras esterlinas.¹² Ante erogaciones tan altas por parte del gobierno inglés, los estrategias de las fuerzas armadas argentinas supusieron que aquél no querría sufragar el costo, estimado en 2 mil millones de dólares, que le significaría una guerra en el Atlántico Sur.

En segundo lugar, se pensó que los británicos poco o nada harían por arriesgar sus intereses vitales y su prestigio en unas islas semidesérticas localizadas, además, a varios miles de kilómetros de distancia de sus costas.

Una tercera cuestión que debió haber estado en la mente de los planificadores argentinos de Malvinas es la llamada "proyección Antártida". Como se sabe, algunos

países pertenecientes tanto al Hemisferio Norte como al Sur firmaron en 1959 un tratado que regula las actividades internacionales en esa inhóspita región, y que entró en vigor en 1961. Sin embargo, el instrumento jurídico habrá de expirar en 1991, fecha a partir de la cual se esperan intensos reclamos territoriales sobre la Antártida por parte de la mayoría de las naciones interesadas en su reparto (no se olvide que en esa masa polar y sus adyacencias se encuentran grandes depósitos de cobre, uranio, cromo, carbon, níquel, oro, gas y petróleo, así como de krill, recurso marino renovable de alto contenido proteínico).¹³ De haber prosperado la intentona malvinense —que pretendía extenderse a las islas Georgias y Sandwich del Sur— Argentina hubiese llegado a 1991 con la posibilidad de reclamar en propiedad miles de kilómetros cuadrados adicionales, argumentando la contigüidad de los archipiélagos ocupados con la Antártida.

Sean cuales fueren las causas finales del ataque argentino, lo cierto es que los planes erróneos, junto con la ineficiencia para ejecutarlos, la mala organización, la corrupción y el escaso conocimiento de las tácticas y estrategias de la guerra *convencional* (y no de la guerra sucia, que en eso sí eran maestros) por parte de los militares argentinos y sus asesores civiles, determinarían finalmente su derrota. Un ejemplo diáfano de los pésimos cálculos fue el referido a la actitud de Estados Unidos frente al conflicto; estallado éste, el presidente Reagan, después de enviar a su secretario de Estado, Alexander Haig a varias e infructuosas misiones negociadoras entre Buenos Aires y Londres, decidió apoyar a este último, mientras la premier Thatcher resolvía recuperar por la fuerza su posesión.

La capital del archipiélago ocupado en manos de un ejército inglés técnica y logísticamente superior cayó el 15 de junio de 1982, escasos dos meses después de la llegada de las fuerzas argentinas. Dos días más tarde, lo que quedaba en pie del proyecto de Galtieri era desechado por los propios militares quienes, hegemonizados por el general Cristino Nicolaides,¹⁴ se encargaron de colocar en la presidencia al también general Reynaldo Bignone, partidario de una transferencia lenta del gobierno a los civiles.

¿Qué había pasado, mientras tanto, con la maltrecha economía de la nación? El ministro del ramo, Roberto Alemann, perteneciente a una de las familias acaudaladas del país, había decidido, desde diciembre de 1981, regresar a las líneas fundamentales del proyecto de Martínez de Hoz.

Para ello lanzó un plan masivo de privatización de 17 importantes empresas estatales, entre las que se incluían en principio algunas tan estratégicas como las agrupadas en la órbita de la Dirección de Fabricaciones Militares, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Agua y Energía Eléctrica, Servicios

Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Gas del Estado, tres relevantes emporios petroquímicos y otras compañías más.¹³

Azuzado por los sectores nacionalistas del Ejército, Galtieri suspendería, el 13 de mayo de 1982, ya en plena guerra, el proyecto de Alemann. Este había tenido, sin embargo, oportunidad de demostrar en la práctica su credo neoliberal, al demorar las medidas que toda nación envuelta en un conflicto bélico debe tomar de inmediato para hacer frente a las contingencias, tales como el establecimiento de un control de cambios y la limitación al derecho de los inversionistas extranjeros de repatriar utilidades y capitales. A pesar de la brevedad de su gestión, Alemann también se dió tiempo para renegociar la deuda externa argentina en condiciones no del todo favorables para el erario nacional y para contratar más crédito, que se utilizó en la compra de insumos bélicos para la aventura malvinense.

En pocas palabras, la gestión de Galtieri se puede resumir así: operación diversionista malvinense fracasada, diplomacia en ridículo, liberalismo abortado antes de renacer, precipitación de la crisis del régimen militar y aceleración para traspasar el poder a los civiles.

4. EL GOBIERNO DE BIGNONE Y LA TRANSICION HACIA UN REGIMEN CIVIL.

Tras la destitución de Galtieri, el ministro del Interior, Alfredo Saint-Jean, presidente provisional por unas horas, propuso un plan para volver a la democracia e informó a los partidos políticos acerca de un calendario que se estaba elaborando para transferir el gobierno —no necesariamente el poder— a los civiles.

El hombre de la transición era el general Reynaldo Bignone, ex comandante de los Institutos Militares durante el apogeo de la represión en la segunda mitad de los setenta, y personaje plenamente identificado con el proyecto castrense.

A mediados de junio de 1982, cuando se oficializa su nombramiento, las fisuras en el interior de las fuerzas armadas eran tantas y de tal magnitud que el nuevo mandatario tuvo que ser designado unilateralmente por el Ejército, sin contar con la aquiescencia de la Armada y la Fuerza Aérea.

Con todo, los partidos políticos fueron de nuevo legalizados el 26 de agosto de 1982. A finales de febrero del año siguiente se dió a conocer un cronograma político que preveía elecciones generales para el 16 de octubre y la entrega del gobierno al partido triunfador en la última mitad de diciembre. Con esas medidas pudieron volver a la actividad la mayoría de las agrupaciones políticas tradicionales, con la explícita proscripción del Partido Comunista.

Mientras tanto las protestas contra el régimen, anestesiadas y suspendidas por el apoyo casi unánime del sindicalismo y los partidos políticos a la guerra, se reiniciaron

con más vigor que nunca, pues a las reivindicaciones clasistas o sectoriales se sumaron los atisbos de frustración provocados por la derrota en el Atlántico Sur. De esta forma el 6 de diciembre de 1982 se cumplía abrumadoramente una huelga general y diez días más tarde 150 mil personas, convocadas por la Multipartidaria, desfilaban frente a la Casa Rosada en demanda de reivindicaciones no sólo laborales sino también políticas.¹⁶

Con el objeto de conservar su poder lo más incólume posible, los militares decidieron regular el tiempo y ritmo de la transición, amén de que, frente a la amenaza de un "Nüremberg porteño", intentaron cubrirse las espaldas política y jurídicamente.

En lo político, se buscó una transición pausada, una retirada en orden, con un apoyo poco disimulado a los peronistas de derecha (como los líderes de los sindicatos metalúrgicos) en la creencia de que, en caso de triunfar en las elecciones, esa fracción del justicialismo sería la menos proclive a enjuiciar a los elementos de las fuerzas armadas implicados en violaciones de los derechos humanos.¹⁷

Dentro del campo jurídico, las instituciones castrenses recurrieron a una ley de autoamnistía con la que, supusieron, se pondría fin a la cuestión de los desaparecidos. El texto anotaba que las fuerzas armadas "asumen la responsabilidad histórica que les compete frente a la nación en el planteamiento y ejecución de las acciones"; recordaba que fueron los mandatarios constitucionales María Estela Martínez de Perón e Italo Luder quienes en 1975 desataron la "lucha antisubversiva" en gran escala; insistía en que durante esa lucha se cometieron errores operando orgánicamente, por lo que "todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de órdenes propias del servicio"; añadía que "quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos se consideran muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad de tal suceso ni la ubicación de las sepulturas", y cínicamente expresaba el deseo de que los enemigos victimados "reciban el perdón de Dios".¹⁸

En este contexto, la campaña electoral se polarizó entre los dos grandes partidos tradicionales: el candidato presidencial de la UCR, Raúl Alfonsín, denunció la conformación de un pacto militar-sindical; el justicialismo contraatacó exponiendo a Alfonsín como candidato preferido de Ronald Reagan. El ambiente a la vez tenso y expectante de las semanas previas a las elecciones se exacerbó cuando aumentaron los rumores golpistas y una nueva ola de paros y movilizaciones culminó en una huelga general que mantuvo paralizado al país durante 24 horas.¹⁹

Es así como en las elecciones de octubre de 1983, y no sin sobresaltos, los radicales obtienen una indiscutible victoria, al reunir el 52 por ciento de los sufragios frente al 40 por ciento del peronismo. Los militares deciden adelantar el cambio de autoridades del 25 al 10 de diciembre, fecha en la que toma juramento el nuevo

mandatario. Se abre así una nueva, aunque no por eso fácil época en la historia argentina.

El frente económico, por su lado, seguía acusando un franco deterioro. Menos ortodoxo que Almann, su sucesor, Lorenzo Dagnino Pastore decretó nuevas devaluaciones del peso para estimular las exportaciones; implantó controles de precios y de cambios; aumentó los salarios, y reglamentó los mercados cambiarios.

Los resultados de este intento de recuperación fueron magros, y Danigno Pastore tuvo que ceder su lugar a Jorge Wehbe, partidario de una política de deflación que a la postre no sería suficiente para contener el alud de las cuentas alarmantes en la economía argentina.

En las últimas semanas la conducción económica admitió haber llegado a la suspensión de pagos, se interrumpieron las importaciones, se congelaron los depósitos en dólares, y los intereses bancarios se elevaron a 2% diario. El balance de toda esta mezcolanza de medidas económicas –más que de políticas coherentes– durante el último año del gobierno militar fue el siguiente, por sólo citar algunos indicadores representativos: aunque el PIB aumentó luego de dos años de crecimiento negativo y otro de estancamiento, la inflación llegó a 433.7% y la deuda externa alcanzó los 45 mil 500 millones de dólares.

Un diario francés comentaba en abril de 1983:

A partir del primero de julio, el peso tendrá un nuevo aspecto. Con una simple tachadura, se verá privado de cuatro ceros y probablemente de su paridad sea de entre 7 y 10 pesos por dólar. Es decir, el billete de un millón de pesos sólo valdrá unos 100 pesos nuevos. Aunque la cartera del argentino medio no se hará más gruesa por ello, las computadoras del Banco Central podrán funcionar con normalidad.²⁰

El milagro de la multiplicación de los pesos (pero no de los panes), fue obra de una política económica excluyente que, en poco tiempo, hizo caer el producto per cápita a niveles inferiores a los de 1970, promedió tasas de inflación mayores al 200 % anual –en un periodo en el que el aumento de precios promedio en América Latina fue de 65%– y erosionó los ingresos del sector asalariado hasta la mitad de su valor en 1976, entre otros “logros” que se analizan con más detenimiento en el siguiente capítulo de este trabajo.

Para concluir, debe decirse que, a partir de la aventura de las Malvinas, el régimen militar presencié una crisis de gobernabilidad que ya comenzaba a insinuarse desde 1981. Esta crisis la heredaría, en más de un sentido, la nueva administración radical que tomó las riendas del gobierno pero no del poder –se insiste–, el 10 de diciembre de 1983.

Puesto el país por el autoritarismo castrense y la ineficiencia tecnoburocrática ante una de las crisis más graves de su historia, ahora sí era "el turno de los civiles".

NOTAS CAPITULO III

- ¹ Cfr. Jaques Brasseur, "El resurgimiento del liberalismo en la América Latina, 1973-1981" en Sofía Méndez Villarreal, *La crisis internacional y la América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 199.
- ² Véase Juan Carlos de Pablo, "El enfoque monetario de la balanza de pagos en la Argentina; análisis del programa del 20 de diciembre de 1978", en *El Trimestre Económico*, núm. 98, abril-junio de 1983, pp. 641-669.
- ³ Liliana de Riz, "Argentina: ni democracia estable ni régimen militar sólido", en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. XLIV, núm. 4, oct.-dic. de 1982, p. 1210.
- ⁴ Véase la revista *Proceso*, núm. 230, 30 de marzo de 1981, pp. 40-41.
- ⁵ Entre otras medidas de apertura con respecto a la prensa en el gobierno de Viola, Gregorio Selser menciona en *El Día*, del 24 de abril de 1981, p. 17, las siguientes: el nuevo talante de la Secretaría de Información Pública y el hecho de que su titular se refiriese al propio régimen como "dictadura militar"; la designación de un periodista profesional civil como director nacional de prensa, y la posibilidad de que se revisaran tanto las funciones de un polémico monopolio papelerero, como las del régimen de distribución de propaganda oficial, que en no pocas ocasiones facilitó la arbitrariedad contra algunos medios.
- ⁶ Véase Alejandro Dabat y Luis Lorenzano, *Conflicto malvinense y crisis nacional*, México, Libros de Teoría y Política, 1982, pp. 118-119.
- ⁷ Véase G. Selser, "El ministro Sigaut desmiente a cifrazos al exministro Martínez", en *El Día*, 16 de diciembre de 1981, p. 16.
- ⁸ G. Selser, "Arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué...", en *El Día*, 24 de abril de 1981, p. 17.
- ⁹ L. de Riz, *op. cit.* p. 1213.
- ¹⁰ Cfr. G. Selser, "Islas Malvinas: su ocupación militar se estaba anunciando desde el relevo del general Viola", en *El Día*, 3 de mayo de 1982, p. 23, y también Guillermo Makin, "Argentine approaches to the Falkland/Malvinas: was the resort to violence foreseeable?" en *International Affairs*, Londres, vol. 59, núm. 3, verano de 1983, pp. 391-403.
- ¹¹ Contralmirante (R) Jorge A. Fraga, cit. por G. Selser, "La ecuación expansionista tras la recuperación de las Malvinas", en *Cuadernos de Marcha*, segunda época, año III, núm. 16, nov.-dic. 1981, p. 33.
- ¹² Véase el documento del SIPRI "Gastos y producción militares en el mundo", en *Comercio Exterior*, vol. 35, núm. 3, marzo de 1985, pp. 272-273.
- ¹³ Cfr. Carlos Juan Moneta, "Antártida, América Latina y el sistema internacional en la década de los ochenta ¿Hacia un nuevo orden antártico?", en *Relaciones Internacionales* vol. VII, núms. 24-25, enero-junio de 1979, pp. 54-55.

- 14 Este mflite se hizo célebre tras declarar, en 1981, que: "En este momento en que el monstruo marxista se lanza sobre el mundo, lo encuentra débil, inerm. Por eso todos debemos producir una reacción. Debemos pensar que hay una acción comunista-marxista internacional que desde 500 años antes de Cristo tiene vigencia en el mundo y gravita sobre el mundo".
- 15 Cfr. G. Selser, "Malvinas: el sector militar nacionalista logra la suspensión del plan de desnacionalización", en *El Día*, 16 de mayo de 1982, p. 12.
- 16 El estado de ánimo prevaleciente entre los grupos que protestaban puede sintetizarse en la frase de un dirigente de la CGT cuando, al convocar al paro, declaró: "Estamos hartos de soportar las patrañas de los militares, que no sirven ni para hacer la guerra". Cit. por Gregorio Selser, "Rendición, derrota y ruina; pero siguen en el poder", en *Cuadernos de Marcha*, segunda época, año III, núms. 17-18, enero-abril de 1982, p. 52.
- 17 Cfr. Everett G. Martin, "Argentina's Military Rulers May Help Ex-Rivals, the Peronists, Rise to Power", en *The Wall Street Journal*, 20 de mayo de 1983, p. 38.
- 18 Una glosa del documento se encuentra en: Horacio Verbitsky, "Rumbo a la democracia ... por un camino minado", en *Cuadernos del Tercer Mundo*, año VI, núm. 63, agosto de 1983, pp. 18-20.
- 19 Luis Bilbao, "Tras de las elecciones, se irán los militares y se instalará la incertidumbre", en *Proceso*, núm. 230, 24 de octubre de 1983, p. 46.
- 20 Jean-Claude Bahrer, "Hyper-inflation en Argentine. Tous millionnaires", en *Le Monde*, 24 de abril de 1984, p. 1.

IV. ARGENTINA: CRISIS ECONOMICA Y NEOLIBERALISMO.

Los postulados de la teoría neoclásica sólo son aplicables a un caso especial, y no general porque las condiciones que supone son un caso extremo... Más aún, las características del caso especial supuestas por la teoría clásica no son las de la sociedad económica que hoy vivimos, razón por la cual sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales.

John Maynard Keynes

No creo que las leyes del mercado vayan a resolver los problemas de desarrollo del país: el mercado no es el supremo regulador de la economía, puesto que tras él hay poderosas fuerzas sociales, hay una pugna de relaciones que surgen de la misma estructura social y que impiden que el mercado cumpla las funciones que los liberales de la economía esperan...

Raúl Prebisch

Mucho se ha hablado del colapso económico inducido por la gestión del doctor José Alfredo Martínez de Hoz al frente del Ministerio argentino de Economía entre 1976 y 1981. Sin embargo, gran parte de los análisis sobre el periodo se detiene en el último año mencionado y no toca —tal vez porque el primer lustro de la conducción económica sea más significativo— los años subsecuentes del régimen militar, que se prolongó hasta finales de 1983.

Es objetivo de este capítulo presentar un balance general del lapso que va de 1976 a 1983, analizando las siguientes variables: 1) Origen último y objetivos del modelo; 2) Instrumentos fundamentales del programa económico; y 3) Análisis de los resultados, en donde se concluye que el neoliberalismo económico en la Argentina militar resultó un sonado fracaso tanto desde la perspectiva de la instrumentación de políticas económicas alternativas, como desde el punto de vista de sus propios objetivos.

1.- ORIGEN ULTIMO, FASES Y OBJETIVOS DEL MODELO.

Recién desalojado el gobierno peronista del poder, el 2 de abril de 1976, se presentó a la opinión pública nacional e internacional el nuevo programa económico, concebido ante todo como una estrategia a largo plazo destinada a reinsertar, en última instancia, en situación ventajosa, a la formación económica argentina dentro de una nueva división internacional del trabajo.¹

Debe hacerse notar la clara inspiración neoliberal del proyecto y su contraposición fundamental con el proceso de sustitución de importaciones que la Argentina siguió desde mediados de los años treinta hasta bien entrados los setenta del presente siglo.

El análisis que el liberalismo hace de la economía argentina en 1976 presupone que la pérdida del dinamismo productivo observada en los años inmediatamente anteriores proviene, estructuralmente hablando, de la expansión irracional del sector público, de la hipertrofia del aparato burocrático, de una agricultura sacrificada en manos de una industria ineficaz y sobreprotegida, y de un sistema de seguridad social demagógico e inoperante. En esta perspectiva, la inflación sería consecuencia tanto del crecimiento monetario generado por el pertinaz gasto público deficitario, como de los constantes aumentos del salario de los trabajadores, aumentos que no encontraban correlato en la productividad nacional.²

Frente al "caos" descrito, que habría sido propiciado por el populismo y la obsesiva recurrencia al dirigismo estatal, la flamante conducción económica argentina se cobijó, a partir de abril de 1976, en las seguridades que le brindaba la teoría neoclásica en por lo menos tres de sus vertientes: el monetarismo, relativo a los precios; la ley de Phillips, atinente a la distribución del ingreso y la ocupación, y el planteamiento de las ventajas comparativas en cuanto a la asignación de recursos.³ En el caso que nos ocupa, ésta quedaría definida a partir de las actividades agropecuarias y bajo el enfoque del mercado internacional, tal como lo señalan los viejos cánones ricardianos.⁴

De allí se seguiría que las condiciones indispensables para un crecimiento económico sostenido eran el funcionamiento de los mercados sin interferencias y el papel subsidiario del Estado en la esfera productiva, con el objeto de permitir la acción del capital privado. Una y otra medida, como se verá más adelante, estaban estrechamente vinculadas entre sí, como lo estaban con la eliminación de dos subsidios "distorsionantes", a saber: la elevada protección frente a la competencia externa y las tasas de reales interés negativas.⁵

La conjunción de este paquete de medidas, instrumentadas bajo la óptica del "gradualismo", y fuertemente coincidentes con los dictados del Fondo Monetario Internacional, debería facilitar condiciones para asegurar la estabilidad en los precios, promover la inversión productiva de recursos internos y externos y expandir los niveles de empleo y producción.

Cabe añadir que el mundo exterior representaba un punto de referencia vital para el buen éxito del proyecto reseñado. Ello se ilustra principal aunque no exclusivamente en la confección del llamado "enfoque monetario de la balanza de pagos", que, puesto en vigor con particular intensidad desde finales de 1978, consagra al tipo de cambio como precio básico de la economía.

Origen último del modelo económico

En términos generales, la implementación de las medidas neoliberales en la Argentina de la segunda mitad de los setenta y principios de los ochenta, se encuentra íntimamente relacionada con un proyecto militar que proponía reorganizar autoritariamente las relaciones sociales imperantes y redistribuir las cuotas de poder en detrimento de los grupos industriales vinculados al mercado interno, los sectores obreros organizados en aparatos sindicales masivos, y las clases medias. En contraste, se tenía previsto llevar adelante un intenso proceso de centralización de capitales, en la creencia de que a mayor concentración del ingreso en los sectores superiores de la pirámide, existiría también mayor inversión y dinamismo en la economía.⁶

Así pues, el neoliberalismo argentino asume, en este caso, el papel de racionalizador de un proyecto eminentemente político, y presenta la imagen de una propuesta aséptica, medible y científica, eficiente en lo administrativo e ideológicamente neutral.

¿Cuál sería el grupo encargado de llevar a buen término este diseño? Era, de manera primordial, el elenco tecnoburocrático civil de la coalición gobernante, comandado por el doctor José Alfredo Martínez de Hoz, quien duraría cinco años al frente del Ministerio de Economía, además de ser, como ya es costumbre en la tradición golpista argentina, el miembro civil más connotado del gabinete original.

El resto de los cuadros identificados con el planteamiento neoliberal estaba constituido por personajes vinculados con las finanzas y las élites oligárquicas nacionales, quienes a su vez mantenían nexos con los círculos financieros internacionales. Pocas veces se inscribían de manera explícita en los postulados de la Escuela de Chicago, pero en todos los casos provenían de las dos vertientes del liberalismo argentino: la ortodoxa, que aboga por reubicar al sector agrario como centro del proceso de acumulación, y la neoliberal, que trata de asociar a la economía nacional a las empresas multinacionales; corrientes ambas que suelen ser convergentes, al menos tácticamente, en épocas de crisis.⁷

La racionalidad profunda del modelo, entonces, está fincada en un diseño extraeconómico que intenta cobijarse en un manto de eficiencia y técnica para encubrir su pretensión de variar la correlación social de poder. En este sentido, bien puede afirmarse que la ideología liberal-tecnocrática complementa a la Doctrina de la

Seguridad Nacional, coincidentes ambas en un solo objetivo: reestructurar. En Argentina se llegó así a lo que Jorge Schvarzer denominó "economía sucia"⁸ en el ámbito de la producción y la distribución, no menos cruenta que aquella otra "guerra sucia" que se verificó en el terreno político y que arrojó un saldo represivo impresionante.

Parte fundamental de esta "economía sucia" se libró contra la industria, sobre todo contra los establecimientos medianos y pequeños. Aun cuando el modelo no era propiamente antiindustrial, las medidas de apertura acelerada de la economía, la reasignación de recursos conforme a la ventaja comparativa agrícola y la especulación financiera, redundaron en una desindustrialización masiva a la que se hará referencia párrafos abajo.

Las fases de la política económica

Desde luego, una política económica que se instrumentó durante más de siete años de régimen militar no podía, aun queriéndolo, ser del todo uniforme. A pesar de que las líneas generales del proyecto son las mismas en todo el periodo, es posible distinguir diversas fases a los largo de su aplicación.⁹

La *primera fase* fue una de transformaciones aceleradas, pues la conducción económica se dio a la tarea de dismantelar los rescoldos de estructuras populistas heredadas de la anterior administración; en esta fase primaron los intereses de los grupos agroexportadores, se replegó la acción dirigista del Estado y se adoptó una política de devaluaciones continuas del peso frente al dólar.

En una *segunda fase*, iniciada con la reforma financiera de 1977, las fracciones capitalistas financieras pasan a adquirir la supremacía como beneficiarias del modelo; la liberación de las tasas de interés favorece la especulación y coadyuva a acelerar las dificultades financieras de las industrias.

La *tercera fase*, todavía con Martínez de Hoz como responsable de las políticas seguidas, inicia en diciembre de 1978, cuando se da a conocer un programa de apertura externa basado en el "enfoque monetario de la balanza de pagos" que ya se comentaba en estas páginas. *Grosso modo*, la racionalidad teórica de dicho enfoque considera que la utilización simultánea de una devaluación del peso a ritmos progresivamente menores, junto con la aceleración de las rebajas arancelarias, lograrían una disminución en los índices inflacionarios. Ello porque el ingreso de bienes importados actuaría como un acicate para que los productores argentinos mantuvieran sus precios bajos y porque la devaluación gradual de la unidad monetaria regularía el ritmo de aumento de los precios en pesos de los bienes importados y, con ello, nuevamente de la inflación interna. Cuando la tasa de devaluación llegara a un ~~extremo~~, la espiral inflacionaria se habría logrado detener.¹⁰ Sin embargo, los resultados no

fueron tan exitosos como originalmente se esperaba, pues las importaciones escalaron verticalmente, la actividad productiva no se pudo restablecer y la especulación financiera continuó siendo la nota definitoria de la economía argentina.

Fracasado el programa aperturista de 1978, para 1980, en lo que es una *cuarta fase*, el gobierno debió enfrentar una severa crisis caracterizada por la quiebra de numerosos conglomerados industriales y financieros, un endeudamiento externo rampante y una sensible caída en el dinamismo comercial, ya que la balanza global de pagos adquirió signos negativos a partir de 1980. Esta fase vio culminar la gestión de Martínez de Hoz en marzo de 1981.

El nuevo ministro, Lorenzo Sigaut, asume como necesaria una macrodevaluación de la moneda para estimular nuevamente la actividad agropecuaria de exportación que la sobrevaluación del peso había desalentado, dando lugar a un periodo de depreciación intensiva de la moneda argentina, la cual perdió 400% de su valor nominal frente al dólar sólo entre marzo y diciembre de 1981, lapso que comprendió la gestión de Sigaut y lo que aquí llamaremos *quinta fase*. En adelante, sumergida en una crisis cada vez más profunda, la conducción económica argentina no lograría establecer una política coherente para resolver los ingentes problemas que se le presentaban.

Así, la *sexta fase*, iniciada con el ingreso de Roberto T. Alemann al Ministerio de Economía, constituye un intento de retomar las raíces del esquema originalmente concebido, y llevar éste a sus últimas consecuencias, lo que explica tanto el intento de privatizar casi una veintena de empresas estratégicas en manos del Estado como la reasunción de un discurso ultraliberal en materia económica.

Un *séptima fase* se instauraría en junio de 1982, cuando el nuevo encargado de la economía nacional, Lorenzo Dagnino Pastore, intentó una reactivación mediante el retorno a una política estatal intervencionista, con base en la cual se produjeron nuevas devaluaciones del peso, se implantaron controles de cambios y precios, se dictaron leyes para reglamentar el mercado de capitales y se propició un incremento del salario real. Tardó, insuficiente y ya no propiamente neoliberal el esfuerzo reactivador reseñado no pudo prolongarse por mucho tiempo y sus resultados fueron francamente magros.

La *octava fase* en la ejecución de la política económica, iniciada con la destitución de Dagnino Pastore y su consiguiente relevo por Jorge Wehbe el 24 de julio de 1983, constituyó una tímida vuelta a las políticas contraccionistas y privatizantes de Alemann y Martínez de Hoz. Su éxito fue también nulo, pues a esas alturas —después de la derrota argentina en las Malvinas y en un momento en el que la credibilidad del gobierno militar había llegado a su punto más bajo desde 1976— la economía del país era ya inmanejable.

2. EL PROGRAMA ECONOMICO DEL GOBIERNO Y SUS INSTRUMENTOS

El 2 de abril de 1976, como ya se anotó, el gobierno *de facto* presentó su programa económico,¹¹ al que después se le fueron incorporando modificaciones y ajustes para optimizar —en la óptica de sus responsables— los resultados. El análisis de ese programa es pieza fundamental para comprender la naturaleza de los instrumentos económicos del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. A continuación se revisan simultáneamente uno y otros.

Política financiera, monetaria y cambiaria

Ya se decía que a mediados de 1977 la reforma financiera impulsada por el régimen provocó la liberación de las tasas de interés, al tiempo que produjo las condiciones necesarias para el reestablecimiento de los mecanismos de mercado y la reinserción estelar de la banca privada en el control del mercado financiero. Así puede explicarse que, si a finales de 1975 los bancos oficiales controlaban el 50% de los depósitos y el 35% de los créditos de todo el sistema financiero, los porcentajes de su participación disminuyeran a 34 y 32% respectivamente, al terminar 1979.¹²

Esta disminución del peso de los bancos estatales en la intermediación financiera tuvo como contrapartida el crecimiento de las entidades privadas, las cuales propiciaron el aumento de los volúmenes de recursos destinados a depósitos de interés de plazo fijo y la disminución de los clientes de las cuentas de ahorro.

Por otra parte, la política monetaria se fijó como meta hacer engrazar el mercado argentino con el de los países desarrollados, con el objeto de monetizar la economía y establecer condiciones de funcionamiento exentas de influencias distorsionantes; sin embargo, y adelantándonos a los resultados del programa descritos en el tercer apartado del presente capítulo, la oferta monetaria, a la cual se quería disminuir para contener la inflación, aumentó 50% entre 1976 y 1981.

En lo que respecta a la política cambiaria, el programa del 2 de abril señalaba la necesidad de mantener tanto la libertad de cambios como la paridad del peso frente al dólar recurriendo a ajustes periódicos que se realizarían de acuerdo con la inflación interna. Más tarde, la serie de devaluaciones programadas que a partir de 1979 redundaron en una revaluación del peso, propició la recurrencia de las grandes empresas al endeudamiento con el exterior al que se llegó a considerar como un negocio rentable. No obstante, esta política perjudicó, a la larga, no sólo al conjunto del sector agropecuario, sino también a la pequeña y mediana industria.

Debe añadirse que, a partir de las reformas introducidas el último mes de 1978, la conjunción de las medidas financieras, cambiarias y monetarias adquirió una notable

preeminencia en el control inflacionario, en términos del “enfoque monetario de la balanza de pagos” ya discutido en estas páginas.

Reducción del peso del Estado en la economía

La política prescrita en este rubro se sustentó en el concepto de la “subsidiariedad”, en virtud del cual se estableció que el Estado sólo debería participar, en cuanto que agente económico, en los sectores en los que la iniciativa privada no pudiera o no quisiera incursionar. El programa original prevenía, además, vender y “reprivatizar” la mayor cantidad posible de empresas estatales y reorganizar, de cara a concepciones eficientistas, aquellas que finalmente permanecieran en manos del Estado. Este, aunque mantendría su presencia en actividades industriales en casos especiales de defensa o seguridad nacional, adquiriría también el compromiso de restringir al máximo su acción como agente regulador de la distribución progresiva del ingreso.

Distribución regresiva del ingreso

Para estimular el ahorro e inversión de la clase propietaria, era necesario propiciar una transferencia masiva de recursos hacia ella, proveniente de los grupos asalariados. Con ese objetivo en mente, la conducción económica se dio a la tarea de liberar los precios (con excepción de una tregua que en marzo de 1977 impuso controles de 700 empresas líderes durante tres meses); por supuesto, esa liberalización no incluía a las cotizaciones de la fuerza de trabajo, las cuales fueron reguladas mediante disposiciones administrativas por lo menos hasta 1979. La suma de estos elementos permitió que los objetivos del régimen en este renglón fueran alcanzados, no tanto en lo que hace a la presunta reinversión de las utilidades obtenidas por los propietarios, sino en la concentración de la riqueza. Sólo entre 1975 y 1976, la participación del trabajo en el ingreso nacional pasó del 47 al 30%, lo que ilustra el éxito del intenso proceso de redistribución regresiva del ingreso planteado por la dictadura militar.

Apertura externa

Esta tenía como objetivo impulsar la eficiencia de la industria nacional y colocarla en la posibilidad de hacerla competitiva internacionalmente. Para ello se procedió, en una primera instancia, a reducir las protecciones arancelarias excedentes que hasta abril de 1976 habían sido muy altas en términos generales, ya que la mitad de los productos incluidos en las listas de importaciones estaban gravados con tarifas de 100% o más. El programa económico de diciembre de 1978 insistiría en forzar la apertura externa, pasando ésta a ocupar un sitio importante entre las prioridades de

la política económica, a partir de su vinculación teórica con el tipo de cambio y el control de la inflación.

La desmesurada apertura comercial condujo, a fin de cuentas, a una constante subvención para las importaciones y a una desprotección industrial sin precedentes en la historia reciente del país.

Política fiscal y tributaria

Según los descos de los impulsores del programa del 2 de abril de 1976, una meta importante sería eliminar el déficit público aumentando la presión impositiva, disminuyendo el gasto gubernamental y ajustando al alza los precios y tarifas de los bienes y servicios suministrados por empresas de la órbita estatal.

En términos reales, el gasto público disminuyó 11 por ciento entre 1975 y 1977, pero en los dos años siguientes recuperó el nivel de 1975; en 1980 registraba la más alta proporción sobre el PIB en los anales de la historia argentina.

En cuanto a la política tributaria, la relación entre ingresos obtenidos por el fisco y el PIB aumentó al pasar de 17 por ciento en 1976 a 25 por ciento en 1979; los propios impuestos, que representaban el 20 por ciento de los gastos en 1976, se incrementaron hasta constituir el 66 por ciento de ellos dos años más tarde.¹³

Por otra parte, las tarifas reales en electricidad, comunicaciones y transportes aumentaron 60 por ciento entre 1975 y el primer trimestre de 1978, para después declinar entre esa fecha y 1979.

La suma de todos estos elementos, creemos, culminó en la obtención de logros diametralmente opuestos a los planteados en el programa original, lo que llevó a que el déficit fiscal, que había alcanzado el 12.3 por ciento del PIB en 1975 y disminuido a 3.3 por ciento en 1977, en 1980 año recuperara su gravitación, ascendiendo a 6 por ciento en ese año y a porcentajes mayores en el transcurso de los siguientes.

Política agrícola

Debido al aumento que los precios internacionales de productos agropecuarios habían experimentado en esos tiempos, los estrategias económicas se dieron a la tarea de facilitar el desarrollo de las actividades agroexportadoras, en la creencia de que representaban las ventajas comparativas con las que Argentina podría insertarse favorablemente en la división internacional del trabajo, tal como había sucedido con un siglo de antelación.¹⁴

A tal efecto, el 5 de abril de 1976 se derogó la ley 20 573, con lo que se privatizaba la intermediación en el comercio de granos, en beneficio de cinco grandes empresas del ramo; asimismo se decidió, en acciones posteriores, incentivar la producción

agrícola, aumentar la tecnificación en los cultivos, superar la extensión de superficies sembradas, promover el establecimiento de agroindustrias, eliminar impuestos a las exportaciones y, ya se anotó, liberar el mercado cambiario, manteniendo durante la primera y la segunda fases descritas la subvaluación del peso frente a la divisa norteamericana.

Política industrial

En el esquema de reasignación de recursos adoptado por la conducción económica únicamente tendría cabida una industria eficiente y competitiva frente al exterior, sobre todo en el rubro de las manufacturas.

La inversión extranjera directa, por su parte, estaba llamada a ser un puntal en la nueva estrategia. Por ello en 1977 se promulgó una legislación que explicitaba un régimen más abierto de radicación de capitales extranjeros, el cual permitía a éstos colocarse en todos los sectores, acceder sin cortapisas al mercado local de capitales y, a partir del tercer año de sus actividades en Argentina, repatriar de recursos sin requisito formal previo. Igualmente se eliminaron algunas limitaciones existentes con respecto al régimen de regulación de compra y transferencia de tecnología.

3. RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PROGRAMA

Las consecuencias del modelo elegido por la conducción económica durante el régimen militar de 1976-1983, pueden evaluarse en por lo menos cuatro aspectos: el de la esfera productiva; en el del combate a la inflación (incluyendo aquí, naturalmente, la política fiscal, monetaria y cambiaria); el de la política social y el del sector externo.

A) Estancamiento productivo.

La evolución del producto interno bruto (PIB)

En este primer indicio para evaluar cabalmente los resultados de la estrategia seguida, es posible anotar lo siguiente: mientras el PIB había crecido acumuladamente 24 por ciento entre 1961 y 1965, 22 por ciento en 1966-1970 y 21 por ciento en el periodo 1971-1975, en el lapso que se analiza sólo mostró una variación acumulada de 0.1 por ciento lo que, promediado entre los ocho años de la dictadura, arroja un promedio ligeramente superior al 0.01 por ciento anual, tal y como se observa en el cuadro 1. Allí también puede constatar que en cinco años se registraron ^{las}

CUADRO 1

Evolución del producto interno bruto (PIB) en Argentina, 1970-1983 (Tasas porcentuales de crecimiento)

Promedio	
1970 -	
1974	5.2
1975	-0.9
1976	-1.7
1977	4.9
1978	-3.4
1979	8.5
1980	0.0
1981	-6.2
1982	-5.1
1983	3.1
Variación acumulada	
1976-	
1983	0.1

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

CUADRO 2

Crecimiento acumulado del PIB en el periodo 1976-1983 en países seleccionados de América Latina

	%
Argentina	0.1
Chile	25.1
Brasil	29.7
México	30.3
Colombia	31.2
Guatemala	23.2
Haití	10.0
América Latina	22.9

FUENTE: elaboración del autor, con base en cifras de la CEPAL.

negativas de crecimiento, en otro más la tasa fue de cero, y sólo durante los tres restantes fueron obtenidas tasas aceptables de crecimiento.

Para contextualizar esos datos, cabe compararlos con los de algunos otros países de la región. En esta perspectiva se encuentra que, mientras el promedio de la tasa de crecimiento acumulado para el conjunto de la zona, fue de 22.9 por ciento, países como México y Brasil —comparables en estructura y desarrollo industrial a la Argentina de 1976— superaron holgadamente ese porcentaje; lo propio hicieron otros de menor desarrollo relativo —Colombia y Guatemala— e inclusive algunos que instrumentaron políticas económicas similares a la del gobierno argentino (caso de Chile). Aún más, Haití, el país más pobre de América, logró crecer 10 por ciento en los años de referencia, lo que evidencia en toda su intensidad lo grave de la crisis argentina y las políticas que con respecto a ella tomaron los estrategas neoliberales (confróntese el cuadro 2).

Semejantes conclusiones se pueden desprender del cuadro 3, donde se incluye una evolución comparativa del PIB por habitante en Argentina y otros países latinoamericanos seleccionados. De ser la nación que detentaba el PIB per cápita más alto en 1970, Argentina fue descendiendo progresiva y aceleradamente, pues en 1980 pasó al tercer lugar, detrás de Uruguay y México, y para 1983 éstos dos países más Panamá ya la habían relegado al cuarto sitio. En la propia Argentina, el producto por habitante fue inferior en 1983 frente al de 1970: un retroceso de por lo menos trece años.

Tampoco es alentador el resultado del cálculo de la diferencia entre el PIB real y el potencial, brecha que Aldo Ferrer estimó en más de 80 000 millones de dólares únicamente entre 1976 y 1979.

En síntesis, ninguno de los indicadores señalados muestra un incremento en el producto, por lo cual resulta apropiado, se cree, hablar de un marcado estancamiento —incluso recesión— para el caso y el periodo en estudio.

Expansión del sector público

Ya se decía anteriormente que para el proyecto neoliberal argentino la desestatización de la economía constituía un asunto no sólo crematístico, sino también político e ideológico de la mayor importancia. Por ello, el discurso de las autoridades insistía en constatar la eficiencia y productividad de la empresa privada con el dispendio y la corrupción de las entidades públicas, premisa en la que basaban el principio de subsidiariedad del Estado.

Sin embargo, un vistazo *a posteriori* del desarrollo general del sector público en esos años permite argumentar que el propósito general en este renglón se vio

CUADRO 3

América Latina: evolución del PIB por habitante en países seleccionados, 1970-1983

Países	Dólares a precios de 1970		
	1970	1980	1983
Argentina	1,241	1,334	1166
Brasil	494	887	798
Chile	958	1,045	895
México	978	1,366	1,284
Panamá	904	1,174	1,214
Uruguay	1,097	1,426	1,226
Venezuela	1,239	1,310	1,147

FUENTE:

CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

frustrado, pues la participación estatal en el grueso de la economía mantuvo esencialmente igual o mayor gravitación que en gobiernos anteriores.

En el ámbito de las empresas, si bien se desagregaron algunas de ellas, a final de cuentas el tan anunciado proceso de "desestatización" se vio reducido a la "privatización periférica", que consistió en traspasar al dominio particular algunas actividades secundarias.

Por ejemplo, aun cuando se procedió a la privatización de ciertas entidades que habían pasado a la órbita estatal a principios de los setenta, también se terminó de estatizar al sector eléctrico. La consecuencia, dice Jorge Schvarzer, fue que "el Estado vendió activos productivos por el equivalente a 80 ó 100 millones de dólares y compró otros por no menos de 250 millones de la misma moneda".¹⁴ Dichos activos crecieron 3 000 millones de dólares más cuando el régimen intervino importantes grupos industriales y financieros que hacia 1980 habían entrado en una situación de quiebra.

Las inversiones estatales en infraestructura no fueron menos voluminosas, como tampoco lo fueron en el sector energético. Así, se construyeron importantes vías carreteras, obras hidroeléctricas —vale citar el comienzo de la represa de Yaciretá—, centrales nucleares (Río Tercero, Atucha II y Embalse) y plantas de extracción petrolera al sur del país.

Con respecto a las tarifas de bienes y servicios proporcionados por el sector público, aquellas, medidas en términos reales, únicamente se elevaron durante las primeras etapas de la administración, para caer a partir de 1978, llegándose de este modo a una situación en la que volvieron a primar los llamados "precios políticos" que habían sido duramente rechazados por la conducción económica en 1976.

Ahora bien, en lo tocante al empleo en el sector público considerado en su totalidad, las plazas disminuyeron al pasar de 1 760 000 a principios de 1976 a 1 530 000 dos años más tarde; asimismo, en el terreno de las empresas públicas se pasó de 425 000 a 300 000 agentes lo que, tomando como base un índice de 100 en 1975, representó 70 para 1981. También decayó el sector público central en cuanto que empleador, pero llama la atención constatar el hecho de que se registró un aumento correlativo de personal en municipios y entidades federativas. De allí que el censo de 1980 mostrase un Estado cuyo peso como generador de fuentes de trabajo resultó ser el más grande de la historia, a pesar de su intención de no querer serlo, pues empleaba a 21 por ciento de la población económicamente activa (PEA), es decir, al 29 por ciento del total de asalariados.¹⁵

Al finalizar el régimen militar puede constatar que la conducción económica, en buena medida por motivos políticos, no logró hacer eficiente la operación de las empresas estratégicas que permanecieron bajo su control. No extraña, en consecuencia, que entre 1971 y 1980 las empresas y sociedades del Estado hayan

contraído deudas por 12 000 millones de dólares, mientras que el servicio de esos débitos ascendía a casi 5 000 millones de dólares anuales.

Verbigracia, la empresa Agua y Energía Eléctrica pagó, en el periodo correspondiente a 1976-1980, 4 millones de dólares diarios por concepto de intereses, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) erogó cotidianamente 2 millones de dólares en el mismo rubro.

En resumen, el sector público registró, entre 1976 y 1983, enormes avances sobre el resto de la estructura económica, de forma que la inversión pública representó el 53.5 por ciento de la inversión global en el trienio 1976-1978, una cifra cercana al 12 por ciento del PIB.¹⁶ El gasto público mantuvo a lo largo del periodo una incidencia del 40 por ciento sobre el PIB, y su déficit en relación con éste ascendió a 15 por ciento en 1983, cifra similar a la que los militares habían encontrado al asumir al poder ocho años antes.

La persistencia de la participación económica estatal debe buscarse en factores estructurales muy arraigados en la Argentina. Amén de lo que puede considerarse una añeja tradición dirigista del propio Estado, los militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 (y en términos generales la mayoría de los que han gobernado desde la década de los treinta) no fueron ajenos a esa vocación. Esto se explica porque desde los años cuarenta la casta militar promovió la industrialización con base en empresas administradas por cuadros castrenses. Desde el YPF del general Mosconi hasta los proyectos nucleares del general Quilhalt, pasando por la erección de una industria siderúrgica de proporciones respetables debida al general Savio, la economía estatal argentina posee vasos comunicantes muy estrechos con la carrera administrativa que los dirigentes de las fuerzas armadas realizan en su seno.

Desinversión y especulación

A pesar de los objetivos explícitos del Programa de abril de 1976 en sentido contrario, el resultado a consignar fue la creación de una economía más basada en la especulación que en la producción, con niveles decrecientes de consumo e inversión.

El consumo registró una caída acumulada de -3.8 por ciento (-0.47 por ciento anual como promedio), aun cuando en cuatro de los ocho años alcanzó tasas positivas. Ello, sin embargo, contrasta con los cinco años anteriores a 1976, lapso en el cual el consumo aumentó 24.4 por ciento, esto es, 4.9 por ciento al año.

Por su parte, la inversión bruta fija acumulada durante el periodo de referencia fue de -15.8 por ciento, lo que equivale a casi -2 por ciento anual como promedio, frente al 1.2 por ciento por año durante el quinquenio 1971-1975, como se puede ver en el cuadro 4.

CUADRO 4

Argentina: Consumo e inversión bruta fija, 1971-1983

Años	Consumo	Inversión bruta fija
1971	4.1	7.7
1972	1.1	0.6
1973	8.9	7.0
1974	9.9	4.6
1975	0.4	0.1
1976	-7.4	8.2
1977	2.1	19.7
1978	-2.7	-10.1
1979	12.5	6.4
1980	5.5	3.6
1981	-3.0	-17.2
1982	-10.8	-24.6
1983	3.7	-1.8

FUENTE: Luis Beccaria y Alvaro Orsatti, "Argentina 1970-1980: la dinámica del empleo en un periodo de inestabilidad económica y social", en Economía de América Latina, CIDE, México, núm. 13, 1er. semestre de 1985, p. 22.

Es interesante señalar que la inversión productiva privada concebida como "pivote del crecimiento" en el proyecto económico original, no aumentó significativamente, *contrario sensu* a la especulación financiera. Según el prestigiado diario *Clarín* que se especializa en temas económicos, los servicios financieros, que representaban el 12.6 por ciento de las exportaciones en 1976 y el 10.2 por ciento en 1977, pasaron a ser el 19.2 por ciento en 1980. Para el primer trimestre del año siguiente, en tanto las importaciones habían crecido 18 por ciento y las ventas habían sufrido una disminución de 8 por ciento, los servicios financieros aumentaron 556 por ciento.¹⁷

No obstante el *boom*, amplias franjas del sector financiero tampoco pudieron escapar a la crisis que se presentó a partir de 1980. Así, en marzo de ese año se declaró la quiebra del Banco de Intercambio Regional, primero en importancia de los del sector privado y poseedor de una cartera de depósitos del 4 por ciento del total, es decir, más de 1 000 millones de dólares.

A la del BIR siguieron las quiebras de más de 30 entidades financieras nacionales y regionales, que habían prestado grandes cantidades de recursos a conglomerados que posteriormente quebrarían, según se revisará con detenimiento más adelante.

Desmantelamiento de la planta industrial, quiebras masivas y destrucción de la riqueza

Es un hecho que la contracción del mercado interno llevó a la peor crisis del parque industrial argentino por lo menos desde los tiempos de la segunda guerra mundial, y la capacidad fabril ociosa del país alcanzó el 50 por ciento.

Esta desindustrialización *de facto* impactó sobre todo en ramas que de alguna manera habían vivido su auge durante la etapa de sustitución de importaciones entre 1930 y 1975: alimentos, bebidas, textiles, aparatos electrodomésticos e industria automotriz fueron algunos de los rubros más afectados; los establecimientos medianos y pequeños resintieron aún más las consecuencias del proceso.

El cuadro 5 muestra que entre 1975 (un año antes de que los militares tomaran el poder) y 1984 (un año después de que lo dejaran), el sector secundario de la economía, compuesto por minería, electricidad, gas, agua, construcción e industria propiamente tal, redujo su participación en el PIB, pasando del 39 al 35.5 por ciento del mismo. Más significativo aún fue el comportamiento del sector industrial, que sufrió notables mermas al pasar de 28.6 a 24.7 por ciento del PIB, mientras las actividades primarias y terciarias obtenían avances correlativos.

De esta manera las quiebras industriales, e inclusive comerciales y financieras fueron creciendo aceleradamente, sobre todo al iniciar la década de los ochenta, cuando ya no sólo eran compañías medianas y pequeñas las afectadas, sino también transnacionales no financieras (General Motors, Fiat, Olivetti) y grandes

CUADRO 5

Estructura del PIB argentino en años seleccionados, 1975-1984 (Distribución porcentual total = 100)

Conceptos	1975	1980	1984
Agropecuario	12.9	12.9	15.4
Minería y electricidad, gas y agua	5.0	6.0	7.2
Industria	28.6	25.4	24.7
Construcción	5.8	7.6	3.6
Sector terciario (incluye comercio, transporte y servicios en general)	47.7	48.1	49.1

FUENTE: Luis Baccaria y Alvaro Orsatti, *ibidem*, p. 26.

conglomerados de capital nacional como Sasetru (holding que agrupaba 70 empresas), Celulosa, Sudamtex, Adabor, Oddone y Greco, entre otros grandes consorcios que se declararon en bancarrota entre 1980 y 1981.

Ello trajo naturalmente como consecuencia la disminución del empleo en el sector industrial, que pasó de 1 030 000 plazas en 1976 a alrededor de 700 000 fuentes de trabajo en 1983.

A todos estos factores negativos debe sumarse la destrucción de la riqueza, que se calcula en 50 000 millones de dólares en el periodo 1976-1981,¹⁸ lo que provocó la conjunción de una crisis estructural profunda con el neoliberalismo "gradual" de la conducción económica argentina.

Crisis agrícola

El diseño original de la política económica descrita consideraba a las actividades agropecuarias como la ventaja comparativa por excelencia del país, por lo cual se debía evitar las transferencias de las agro-actividades a las industriales que gobiernos anteriores habían favorecido.

Con miras a reducir y posteriormente revertir esas transferencias, el régimen adoptó una serie de medidas favorables para la producción agropecuaria (sobre todo de aquella destinada a la exportación). Entre ellas destacaron el establecimiento de precios de garantía para el trigo y otros granos, la creación de líneas de crédito rural por parte del Banco de la Nación Argentina, la devaluación brusca de la moneda y la privatización de las actividades referentes al comercio exterior de cereales y productos cárnicos. Aunadas a las excelentes condiciones climáticas del ciclo 1976-1977, esas medidas propiciaron un incremento de 25 por ciento del área sembrada con trigo, cuya cosecha alcanzó en ese último año la cifra récord de 11 millones de toneladas, muy alta fue también la superficie cultivada.

Sin embargo, el optimismo inicial generado en torno al impulso de las actividades agroexportadoras se vería superado muy pronto, cuando el ministro Martínez de Hoz hizo poner en práctica disposiciones que anulaban algunas de las medidas anteriormente dictadas en provecho del agro. De esta manera, a fines de 1977 se modificó el sistema del precio para el sostén del trigo y se dieron por finalizadas las líneas de crédito ya descritas. Más tarde, la sobrevaluación del peso inducida por el programa de diciembre de 1978 redundó en una menor rentabilidad de las exportaciones, por lo que a partir de ese último año las superficies sembradas volvieron a decrecer, llegando otra vez a niveles récord, pero esta vez entre los más bajos de la historia.¹⁹

A partir de entonces la superficie sembrada se estancó en cerca de 20 millones de hectáreas y los rendimientos argentinos continuaron siendo mucho menores que los

de otras naciones de agricultura extensiva, pese a lo cual el ciclo 1980-1981 registró una nueva cosecha récord, en esta ocasión de 34 millones de toneladas,²⁰ hecho que alimentó las expectativas oficiales sobre el auge agrícola.

De haber existido éste, sin embargo, únicamente se verificó en las actividades agroexportadoras, mas no en las economías agrícolas regionales y los productos destinados al consumo del mercado interno, tales como algodón, tabaco, papas, cítricos, yerba mate, té, uva y frijoles. Asimismo fue muy notoria la caída en las existencias de ganado ovino y vacuno las cuales, tras haber alcanzado un nivel máximo de 61 millones de cabezas en 1977, descendieron a cifras mucho menores para el resto del periodo en análisis.

La primacía que a partir de 1978 la conducción económica dio a los sectores financieros provocó, en resumen, que los capitales agrarios invirtieran al mínimo, precipitándose así la crisis agrícola en el país, gracias a la cual las ventas de tractores, que habían sido de 21 000 unidades anuales entre 1973 y 1977, pasaron a 6 600 unidades por año en 1978-1979, y a sólo 3 500 en 1980; la situación se agravaría también con respecto a otros equipos mecánicos e insumos agrícolas, por lo menos hasta 1983.²¹

B) HIPERINFLACION

Hacia 1976 la alta inflación en Argentina obedecía a factores como la inelasticidad en la oferta agropecuaria, la sobreprotección efectiva de la industria que operaba con altos costos, el déficit fiscal creciente y la puja en la distribución del ingreso, verificable por lo demás en la mayoría de los fenómenos inflacionarios en América Latina.²²

En comparación con el aumento en los precios para el total de la región, el argentino siempre había resultado alto, sobre todo en la segunda posguerra. Por ello la conducción económica implantada a partir del golpe militar de mediados de los setenta hizo del combate a la inflación uno de sus objetivos más caros y explícitos.

No obstante, la espiral inflacionaria al final del periodo alcanzó niveles visiblemente superiores tanto en lo que se refiere a su propia evolución histórica como en lo que respecta a la gran mayoría de los países de Latinoamérica y el resto del mundo.

Así, la inflación anual que experimentó la Argentina como promedio entre 1976 y 1983 fue ocho veces mayor que aquella registrada durante el lapso 1945-1974, cuando registró un promedio de 25 por ciento anual.

Ahora bien, en los ocho años que abarcó el Proceso de Reorganización Nacional, el aumento anual de precios al consumidor fue de 208.7 por ciento (con registros extremos de 87.6 por ciento a la baja en 1980 y de 433.7 por ciento a la alta en 1983), mientras otros países de inflación tradicionalmente alta como Brasil, Colombia y

México promediaron en idéntico espacio de tiempo tasas promedio de 83,2, 24,7 y 40,3 por ciento respectivamente. Esto por no hablar de países cuya inflación los ubica, según la CEPAL, en la categoría de moderados, como serían los casos de Guatemala y Venezuela, la primera con un porcentaje anual promedio de 10 por ciento y la segunda con un índice de 11 por ciento, tal como se muestra en el cuadro 6.

Conviene interrogarse, en este punto, cuáles fueron las causas que permitieron la persistencia y aumento de la hiperinflación en la República Argentina, máxime cuando, como ya se vio, muchas de las políticas instrumentadas pretendían ser, al menos a nivel discursivo, antiinflacionarias.

Si algo demuestra la experiencia en análisis es que la inflación no se aceleró por los aumentos salariales, pues éstos estuvieron regulados por disposiciones unilaterales de la patronal y las autoridades laborales, pero sí debido a que, al erigirse el tipo de cambio como eje de la economía nacional y aumentar sensiblemente las tasas de interés en los bancos, se incrementó el aumento de precios inerciales en razón de las expectativas de los agentes económicos con capacidad de fijar precios.²³

Aunado a ello, el déficit público medido con relación al PIB, que había sido muy alto en el último año de la gestión peronista, comenzó a descender en los dos años posteriores -1976 y 1977- para después volver a incrementarse sostenidamente, de modo tal que para 1980 el indicador representaba ya el 15 por ciento del PIB, cifra similar a la que el régimen encontró al tomar en sus manos las finanzas del Estado. Asimismo contribuyeron a la alta inflación por lo menos otros dos factores a saber: por un lado, la emisión monetaria que se duplicó tan sólo entre 1976 y 1980 y, por otro, el enorme gasto en armas (que, como se sabe, constituye una erogación eminentemente inflacionaria, en la medida en que pertenece al rubro del gasto sin compensaciones productivas) que superó los 15 000 millones de dólares entre 1976 y 1983.

C) LA POLÍTICA SOCIAL Y SUS CONSECUENCIAS

Aquí se analizarán tres aspectos principales: el comportamiento del desempleo y el subempleo; la caída salarial sumada a la distribución regresiva del ingreso, y la reducción de los gastos sociales frente a otros rubros del presupuesto nacional.

Comportamiento del desempleo y subempleo

Es un hecho de sobra conocido que una de las principales limitaciones que la conducción económica enfrentó por parte del estamento militar fue la de que la política gradualista debería evitar angostamientos excesivos dentro del mercado de

CUADRO 6

América Latina: evolución de los precios al consumidor en países seleccionados, 1976-1983

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	Promedio anual
América Latina	62.2	40.0	39.0	54.1	56.5	56.8	84.5	130.8	65.5
Países de inflación tradicionalmente alta									
Argentina	347.5	150.4	169.8	139.7	87.6	131.2	209.7	433.7	208.7
Brasil	44.8	43.1	38.1	76.0	95.3	91.2	97.9	179.2	83.2
Colombia	25.9	29.3	17.8	29.8	26.5	27.5	24.1	16.5	24.7
Chile	174.3	63.5	30.3	38.9	31.2	9.5	20.7	23.6	49.0
México	27.2	20.7	16.2	20.0	29.8	28.7	98.8	80.8	40.3
Países de inflación tradicionalmente moderada									
Guatemala	18.9	7.4	9.1	13.7	9.1	8.7	-2.0	15.4	10.0
Venezuela	6.9	8.1	7.1	20.5	19.6	10.8	7.9	7.0	11.0

FUENTE: CEPAL, sobre la base de datos oficiales.

trabajo, a diferencia de países como Chile, en donde los estrategias económicos operaron sin restricción alguna en este campo.

Al analizar la evolución del empleo debe aclararse que la metodología empleada para calcularla es, por lo menos, discutible, pues en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se consideraba como empleado a quien había trabajado una hora a la semana como mínimo lo que, obviamente, despertaba y despierta suspicacias entre los diversos analistas. Por ejemplo, en tanto los indicadores del gobierno en 1981 hacían llegar la suma de desempleados y subempleados al 9.7 por ciento del total de la población económicamente activa, estudios de la Unión Industrial Argentina ubicaban esa tasa en 13 por ciento.

El presente estudio, con todo, trabajará con las cifras del INDEC, a falta de fuentes documentales alternativas. De acuerdo con los datos disponibles, la tasa de desempleo abierto en la Argentina nunca pasó de 5 por ciento entre 1976 y 1983, años en los cuales llegó a ubicarse en un nivel muy semejante al de la gestión peronista; el subempleo visible en el Gran Buenos Aires, luego de descender a un mínimo de 3.2 por ciento en 1977 y 1979, ascendió al 6 por ciento durante 1982 (año en el que la crisis alcanzó un punto cercano al cenit, para disminuir más de un punto al año siguiente, último de la gestión militar (Véase cuadro 7).

Estas cifras, sobre todo en el contexto latinoamericano, se asemejan, *prima facie*, al pleno empleo, lo que sería por cierto uno de los escasos logros a apuntar en el haber de la economía argentina en el lapso estudiado.

Es necesario, sin embargo, relativizar tales indicadores, atendiendo al hecho de que las modificaciones en el mercado de trabajo se advierten más en su estructura (lo cualitativo) que en el número de sus integrantes (lo cuantitativo). Varios elementos contribuyen a describir y explicar esas mutaciones.

En primer lugar, y de acuerdo con el cuadro 8, la población asalariada disminuyó de 74 a 72 por ciento, entre 1970 y 1980 y el segmento no asalariado aumentó de 26 a 28 por ciento en el transcurso del mismo decenio. Dicho incremento correspondió únicamente a los cuentapropistas, que pasaron del 17 al 19 por ciento del total. En otros términos, la reducción de 300 000 agentes en el sector industrial fue absorbida por un *boom* de los trabajadores de cuenta propia, los cuales —y este es un dato axial— de ser una categoría con ingresos iguales o superiores a los del asalariado promedio, pasaron a ser un estrato de bajos ingresos, en muchas ocasiones prácticamente subempleados.

En segundo lugar debe consignarse que la emigración forzada o voluntaria de centenares de miles de argentinos, así como el retorno de cerca de un millón de trabajadores paraguayos y bolivianos a sus respectivos países de origen habida cuenta de la crisis platense, introdujeron elementos adicionales para descomprimir la demanda laboral.

CUADRO 7

Indicadores sobre la evolución del empleo en el Gran Buenos Aires, 1975-1984

	Tasa de desempleo abierto	Tasa de subempleo visible
1975	2.6	4.8
1976	4.5	4.9
1977	2.8	3.2
1978	2.8	4.2
1979	2.0	3.2
1980	2.3	4.5
1981	4.5	5.2
1982	4.8	6.0
1983	4.2	4.8
1984	3.8	4.6

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Secretaría de Hacienda.

CUADRO 8

Argentina: estructura ocupacional, 1970-1980 (%)

	Estructura	
	1970	1980
<u>Asalariados</u>	74	72
<u>No asalariados</u>	26	28
Cuenta propia	17	19
Familiares	3	3
Empleadores	6	6
<u>Total</u>	100	100

FUENTE: Censos de Población 1970 y 1980, cit. por H. Palomino, "Efectos políticos y sociales de los cambios del mercado de trabajo en Argentina (1950-1983)", en Economía de América Latina, CIDE, México, núm. 13, primer semestre de 1985, p. 56.

En tercer lugar contribuyeron al mismo evento el retiro de numerosas personas (sobre todo de sexo femenino) que debido a los bajos salarios ya no encontraban atractivo permanecer en sus trabajos, así como la disminución del número de horas laboradas por cápita en promedio.

Calda salarial y distribución regresiva del ingreso

Al finalizar la gestión del PRN, los salarios reales se habían abatido 50 por ciento por debajo de su nivel de 1975. Entre 1976 y 1978 habían sufrido una baja sustancial, quizá entre las mayores registradas en la historia nacional, pero durante el bienio 1979-1980 aumentaron. Las macrodevaluaciones de 1981, sin embargo, indujeron nuevas bajas del salario real, mismas que continuaron constantes hasta el fin del periodo, excepción hecha del *interregno* de Dagnino Pastore a finales de 1982.²⁴

En lo que se refiere a la participación del segmento asalariado en el ingreso nacional, se estima que ésta pasó del 45 por ciento en 1975 al 30 por ciento el año siguiente,²⁵ porcentaje situado entre los más bajos que se registran en la Argentina durante el presente siglo.²⁶ Los porcentajes referidos, que significan en la práctica una enorme transferencia de recursos de los sectores asalariados hacia los propietarios y el sector público, seguramente rebasaran, en términos cuantitativos, los 100 000 millones de dólares (casi el doble del monto total de la deuda externa hasta 1983) en el periodo; de esta cifra, es muy posible que menos de la quinta parte se haya utilizado en el incremento de la producción y las restantes cuatro quintas partes hayan sido canalizadas en el consumo y la especulación de los no asalariados y el sector público.²⁷

Reducción de los gastos sociales

Como parte de la política social del régimen, se advierten marcados descensos en la inversión en los gastos de beneficio general, sobre todo si éstos se comparan con las erogaciones en armamentos, defensa, seguridad pública y cuerpos policíacos.

Tomando como referencia los presupuestos de la Administración Nacional entre 1980 y 1982 mostrados en el cuadro 9 (que no incluye los gastos efectuados con motivo de la Guerra de las Malvinas), y dando por descontado que la composición presupuestal no varió significativamente en el resto de los años en estudio, es posible observar que, verbigracia en 1980, el presupuesto del Ministerio de Defensa (29 por ciento sobre el total de los gastos) absorbió más del doble que los recursos asignados al Ministerio de Cultura y Educación (12.4 por ciento); fue 20 veces mayor al del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente (2.2 por ciento), y resultó casi 60 veces

CUADRO 9**Argentina: Presupuesto de la Administración Nacional, 1980-1982**
(rubros seleccionados, en miles de millones de pesos)

JURISDICCIONES	Ejercicio 1980	Ejercicio 1981	Ejercicio 1982 (preliminar)
Ministerio de Defensa	24,978.9	26,967.1	26,967.1
Ministerio de Industria y Minería	418.9	338.9	447.6
Ministerio de Cultura y Educación	10,752.8	9,385.9	10,655.0
Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente	1,880.4	1,527.3	2,187.3
TOTAL NETO	83,155.4	86,509.0	108,369.4

FUENTE: La Nación, Buenos Aires, 18 de diciembre de 1981, p. 16.

mayor al del Ministerio de la Industria y Minería, que únicamente representó el 0.5 por ciento del total.

Por ello, estimaciones dignas de todo crédito apuntan que en 1978 Argentina gastó 55, 54 y 11 dólares per cápita respectivamente en los rubros militares, educativos y de salud, proporciones que contrastan visiblemente con los 18, 55 y 27 dólares de Brasil; los 44, 149 y 83 de Venezuela; los 365, 927 y 883 de Suecia, y los 499, 565 y 341 dólares de Estados Unidos en los mismos renglones y fechas.²⁸

Volviendo a los presupuestos anuales de la República Argentina, cifras emitidas por el Ministerio de Economía estimaban que entre 1976 y 1980 las partidas de Defensa –sin contar seguridad– se elevaron 200% en términos reales, mientras que en Educación hubo un retroceso de 50% y en Salud Pública una caída de 30 por ciento.²⁹

Como consecuencia lógica de estas contracciones masivas, la ciencia y la tecnología nacionales se vieron limitadas por severos recortes: si en 1981 existían 3 000 investigadores por cada millón de personas en Japón y 2 500 en Estados Unidos, en Argentina sólo había 300; si para el mismo año los Estados Unidos erogaban 180 dólares por habitante en gastos de investigación y desarrollo, Francia destinaba 120 y Japón 100, Argentina canalizaba únicamente 3 dólares por persona a ese estratégico sector, lo que habría de reflejarse también en una considerable sangría de recursos humanos calificados que, al constatar los serios obstáculos financieros y aun ideológicos para sus labores, optaron por inmigrar a ciertos países centrales.

D) LAS CUENTAS DEL SECTOR EXTERNO

Ya se insinuaba la importancia del sector externo de la economía argentina cuando en este mismo trabajo se hacía referencia al papel central que, en los planes del gabinete correspondiente y en el comportamiento pragmático de los agentes, mostraba el tipo de cambio.

En este sentido, uno de los resultados más visibles de la política de apertura externa indiscriminada seguida a partir del programa del 20 de diciembre de 1978 fue el debilitamiento de la industria nacional, que a la vez propició un exceso de exportaciones y una disminución de importaciones, situación que, a fin de cuentas, desembocó en un signo negativo de la balanza de pagos, tal como a continuación se analiza. También se revisa el crecimiento explosivo de la deuda externa argentina y su estructura, al igual que los precarios montos de la inversión extranjera directa.

Evolución de la balanza de pagos

Lo primero que llama la atención al revisar la balanza de pagos total del país reproducida en el cuadro 10, es que el renglón de bienes resultó positivo en siete de los ocho años en revisión; aun incluyendo los pagos netos de servicios —siempre desfavorables para la Argentina— la balanza comercial siguió mostrando saldos favorables entre 1976 y 1979, para interrumpirse los dos años siguientes y restablecerse en el bienio final de 1982-1983.

Ahora bien, si se prosigue la desagregación de la balanza total, se encuentra que los pagos netos de utilidades e intereses fueron creciendo sostenidamente, de modo tal que, de representar 450 millones de dólares en 1976, pasaron a 1 499 millones en 1980 y a 5 409 millones de dólares en 1983. En otros términos, el deterioro progresivo de la balanza en cuenta corriente (positiva en 1976-1978) se explica tanto por la disminución de los saldos positivos —o su transformación en déficits— de la balanza comercial, como por el veloz aumento en los pagos de servicios provenientes de intereses y amortización del débito externo y de remisión de utilidades al exterior.

Los elementos descritos propiciaron la siguiente situación en la balanza global de pagos de la Argentina entre 1976 y 1983: en un primer momento, que abarca al cuatrienio 1976-1979, las cantidades positivas fueron considerables en su monto y ritmo de aumento anual; así, en 1976 el país con suroño ganó 121 millones de dólares, mismos que crecieron hasta llegar a 1 345, 2 830 y 424 millones de dólares en 1977, 1978 y 1979 respectivamente.

A pesar de ello, el segundo momento, iniciado en 1980 y que se prolongaría hasta el último año del gobierno militar, trastocó el signo de la balanza total, tornándola permanentemente deficitaria, aunque con altibajos: en 1980 las pérdidas fueron de 2 668 millones de dólares, al año siguiente alcanzaron 3 193 millones de la misma divisa, se redujeron a 670 millones de dólares en 1982 y cerraron con un nuevo repunte, que en 1983 las llevó a los 2 449 millones de dólares.

Por su importancia en la explicación de todos estos datos y su enorme gravitación para la economía argentina, mencionaremos aparte a la deuda externa.

La deuda externa argentina

Conocer la cantidad, composición y desarrollo de la deuda externa del país durante la administración militar es también, en buena medida, dar cuenta de los enormes daños que la praxis neoliberal produjo en la estructura económica argentina, así como en las cuentas de su sector externo.

Es indudable, y muchos autores ya lo han documentado así, que el endeudamiento acelerado de América Latina en general y de Argentina en particular durante la segunda mitad de los setenta se debió, por un lado, a la expansión del crédito ofrecido en grandes cantidades y atractivas condiciones por la banca privada de los países

CUADRO 10

Argentina: Balanza de pagos total, 1976-1983
(millones de dólares)

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Balanza de bienes ^a	1,112	1,823	2,940	1,804	-1,360	710	2,725	3,718
Servicios netos no procedentes de factores	-69	-62	-93	-1,391	-1,858	-1,702	-478	-761
Balanza comercial	1,043	1,761	2,847	413	-3,218	-992	2,247	2,957
Pagos netos de utilidades e intereses	-450	-507	-680	-898	-1,499	-3,701	-4,755	-5,409
Balaza en cuenta corriente	616	1,285	2,200	-449	-4,688	-4,712	-2,477	-2,436
Movimiento neto de capitales ^b	-495	560	630	4,873	2,020	1,519	1,807	-13
Balanza global	121	1,845	2,830	4,424	-2,668	-3,193	-670	-2,449

^a Exportaciones e importaciones en valores FOB.

^b Incluye transferencias unilaterales y errores y omisiones netos.

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales consignadas en los informes anuales del Secretario Ejecutivo correspondientes a los años 1978, 1979, 1981, 1982, 1984 y 1985, publicados en la revista Comercio Exterior.

centrales y, por otro, a los enormes préstamos que los países en desarrollo solicitaron, casi siempre para aplazar reformas estructurales cuyos costos, se creía, resultarían riesgosos en términos políticos.

En el caso específico que nos ocupa, encontramos que en el espacio de tiempo comprendido entre los inicios y los finales del "Proceso de Reorganización Nacional", la deuda por capital creció —según los datos que se manejan en el cuadro 11— 5.5 veces, pasando de un poco más de 8 000 millones de dólares a 45 500 millones de dólares. La franca recesión de 1980-1981 coincidió con las alzas más significativas en el monto del endeudamiento externo público y privado, superiores en ambos años a los 8 000 millones de dólares.

Al comenzar la presente década la deuda externa argentina se había hecho mayor en volumen, más cara en cuanto a los intereses que devengaba y más apremiante en lo que respecta a su concentración en el muy corto plazo. En lo que atañe al segundo aspecto debe recordarse que la deuda total argentina —75% atribuible al sector público y el resto al sector privado— vio crecer, en el período que se describe, su gravitación en cuanto que obstáculo para las finanzas nacionales. Así, aquélla absorbió en 1983 el 58.4% de las exportaciones de bienes y servicios, mientras que en 1980 el coeficiente había sido de 22%, más alto en todo caso que el 7.6% de 1977, como se aprecia en el cuadro 12.

La CEPAL, como se sabe, recomienda que el porcentaje de exportaciones sobre deuda no rebase el 25%. Pero si bien es cierto que entre 1977 y 1983 el conjunto de la región latinoamericana rebasó en promedio esa tasa (incluyendo desde luego a Brasil y México), no lo es menos que Argentina, además de registrar el coeficiente más elevado en el último año, también sufrió el deterioro más espectacular entre los cuatro países sujetos a la comparación.

¿Cómo se endeudó Argentina? Existen sobre el particular dos etapas diferenciadas y claramente perceptibles. En la primera el sector privado se endeudó para obtener beneficios financieros en el mercado local, mientras que en la segunda el sector público se endeudó para permitir la salida de esas divisas al exterior, considera Schwarzer.³⁰ En esa espiral de endeudamiento y sangría de recursos el Estado fungió como aval del débito, financiando de ese modo una fuga de capitales cuya suma hasta 1983 se calculaba en por lo menos 20 000 millones de dólares.³¹

Otros destinos igualmente dispendiosos de los recursos contratados por el gobierno argentino fueron: la compra de armas (que, situada entre los 15 000 y 20 000 millones de dólares para el total del período, superó en 1983 el 40% del presupuesto nacional, acercándose a los ocho puntos porcentuales del PIB); la remisión de ganancias y regalías de empresas transnacionales a sus lugares de origen; las compras masivas de productos suntuarios de importación, y los servicios que generaba la propia deuda.

CUADRO 11

Argentina: deuda externa total desembolsada y variación anual del débito (Saldo a fines de año en millones de dólares)

	Deuda por capital	Variación anual bruta ^a	Intereses anuales ^c
1976	8,280	-	450
1977	11,761	3,481	507
1978 ^b	12,496	735	680
1979	19,034	6,538	898
1980	27,162	8,128	1,499
1981	35,671	8,509	3,701
1982	43,634	7,963	4,755
1983	45,500	1,866	5,409

^a No contempla la acumulación en reservas.

^b En 1978 se modificó la metodología del cálculo de la deuda, por lo que los valores anteriores y posteriores no son directamente comparables.

^c Incluye también utilidades.

FUENTE: Para los montos de la deuda por capital en 1976-1977, Jorge Schwarzer, "La perspectiva del deudor", en *David y Goliath*, año XV, núm. 47, agosto de 1985, p. 46. Resto del cuadro: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

CUADRO 12

**Los grandes deudores de América Latina: relación entre los intereses
totales pagados de la deuda externa y las exportaciones de bienes y
servicios (1977-1983)**

Países	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
América Latina	12.4	15.5	17.4	19.9	26.4	39.0	35.8
Argentina	7.6	9.6	12.8	22.0	31.7	54.6	58.4
Brasil	18.9	24.5	31.5	34.1	40.4	57.1	43.4
México	25.4	24.0	24.8	23.1	28.7	34.9	36.7
Venezuela	4.0	7.2	6.9	8.1	12.7	21.0	20.3

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook 1985.

En síntesis, la Argentina, a diferencia de naciones como México y Brasil, que recurrieron al crédito internacional para financiar ciertos esquemas de crecimiento —que en última instancia no fueron suficientes para alejarlos del círculo vicioso de la dependencia— se endeudó en aras de un estancamiento económico constante, de una apertura comercial exagerada y de un sistema altamente especulativo y, más aún, destructor de la riqueza.

Breve apostilla sobre la inversión extranjera directa (IED)

En el proyecto del 2 de abril de 1976, la conducción económica consideraba que la inyección de capitales productivos foráneos sería provechosa para la economía del país, debido a lo cual posteriormente se dictaron leyes para facilitar su operación.

Sin embargo, los resultados de esa política fueron más bien magros si se atiende el siguiente ejemplo, mucho más consuetudinario que excepcional: entre el 10. de marzo de 1977 y el 31 de agosto del año siguiente, el gobierno autorizó 114.7 millones de dólares cuyo monto neto habría sido de aproximadamente 100 millones de dólares, luego de descontar la reinversión de capitales obtenidos por las empresas transnacionales. Reinversión que *stricto sensu* no puede considerarse como nueva. El total de recursos autorizados, en fin, resultó similar a los fondos repatriados por la General Motors cuando levantó sus plantas automotrices en 1978.

Por ello puede argumentarse que, en la práctica y a fin de cuentas, la legislación sobre capitales extranjeros promovida por el PRN, más que atraer inversiones directas, brindó, en gran medida a causa de las condiciones políticas, amplias facilidades para su salida del país y equivalentes dificultades para arraigar dichos capitales.

Esto sirve para disprobar de paso aquellas hipótesis que considerarían a los regímenes militares neofascistas como simples custodios y/o marionetas del capital productivo transnacional.

4. EPILOGO: EL FRACASO DEL MONETARISMO EN ARGENTINA

Sin grandilocuencias, creemos que resulta impresionante observar los resultados de la guerra sucia económica que el neoliberalismo argentino desató desde la cúpula del Estado.

Amén de conducir a la concentración de capitales, a la ruina del aparato productivo, a la hiperinflación, al deterioro de los niveles populares de vida y al estrangulamiento del sector externo, entre otros resultados adversos, la política económica diseñada y puesta en práctica por el ministro Martínez de Hoz y

sucedáneos condujo a la bancarrota nacional y a la pérdida del control gubernamental sobre la actividad crematística.

Como dijera el experto en materia petrolera, Adolfo Silenzi de Stagni, todavía en el transcurso de la dictadura en 1982:

Durante estos seis últimos años (de régimen militar) no hubo un solo día de huelga, el país no soportó ningún cataclismo y, sin embargo, la economía nacional y las regionales han quedado totalmente destruidas porque ser productor es un mal ejemplo. Los únicos que tuvieron derecho no sólo a supervivir sino a enriquecerse fueron los intermediarios, los prestamistas, los corredores, los cambistas, los financieros, los petroleros y todo tipo de traficante parasitario y especulador.³²

La experiencia del monetarismo en el caso que nos ha ocupado arroja por lo menos dos enseñanzas. La primera es que esa doctrina, como se insinúa en el epígrafe que encabeza este capítulo, resulta más nefasta y destructiva cuanto mayor es la economía en la cual se aplica. La segunda alerta sobre la verdadera naturaleza de planteamientos teóricos que, aunque se digan científicos, no alcanzan a ocultar íntegramente su inscripción en proyectos casi siempre represivos en lo político e ideológico y excluyentes en cuanto a la repartición equitativa del ingreso.

NOTAS CAPITULO IV

¹ Véase el texto del programa en *Clarín*, Buenos Aires, 3 de abril de 1976 pp. 1 y ss.

² *Ibidem*.

³ Cfr. Marc Rímez, "Las experiencias de apertura externa y desprotección industrial en el Cono Sur", en *Economía de América Latina*, México, semestre núm. 2, marzo de 1979, p.106.

⁴ Cfr. René Villarreal, "La contrarrevolución monetarista en el centro y la periferia", en *El Trimestre Económico*, México, vol. L (1), núm. 197, ene-mar 1983, p. 444.

⁵ Aldo Ferrer, "El monetarismo en Argentina y Chile (primera parte)", en *Comercio Exterior*, México, vol. 31, núm. 1, enero de 1981 p. 5.

⁶ Según CIDAMO, "Argentina: economía y política en los años setenta", en *Cuadernos Políticos*, México, núm.27, ene-mar de 1981, p. 41.

⁷ Véase Carlos Abalo, "Aldo Ferrer y el dilema económico de Argentina", en *Comercio Exterior*, México, vol. 28, núm. 8, agosto de 1978, p. 992.

⁸ Véase Jorge Schvarzer, *Martínez de Hoz: La lógica de la política económica*, Buenos Aires, CISEA, 1983, p. 126.

⁹ Esta periodificación se elaboró con base en las siguientes lecturas: Mario Brodersohn, *La apertura externa y la estrategia antiinflacionaria*, Buenos Aires, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, 1979; A. Ferrer, "La economía argentina 1976-1979", en *Economía de América Latina*, México, núm. 5, 2o. semestre de 1980; "Argentina: ¡Matemáticos del mundo, precavíos!", en *Comercio*

Exterior, México, vol. 28, núm. 11, noviembre de 1978, y C. Abalo, "Argentina, 1976-1981. Objetivos y resultados de la política económica (segunda parte)", en *Comercio Exterior*, vol. 31, núm. 9, septiembre de 1981.

¹⁰ Explicaciones detalladas del "enfoque monetario de la balanza de pagos" pueden encontrarse en A. Ferrer, "El monetarismo...", *op. cit.*; Juan Carlos de Pablo, "El enfoque monetario de la balanza de pagos en la Argentina: análisis del programa del 20 de diciembre de 1978", en *El Trimestre Económico*, México, vol. L (2), núm. 198, abr-jun de 1983, y Jacques Brasseul, "El resurgimiento del liberalismo económico en América Latina", en S. Méndez Villarreal (comp.), *La crisis internacional y la América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

¹¹ Véanse notas 1 y 2.

¹² A. Ferrer, "El monetarismo... (segunda parte)" *op. cit.*, p.13.

¹³ *Ibidem* (primera parte), p. 8 y J. Brasseul, *op. cit.*, p. 197.

¹⁴ J. Schvarzer, "Empresas públicas y desarrollo industrial en la Argentina", en *Economía de América Latina*, México, semestre núm. 3, septiembre de 1979, p. 59.

¹⁵ Las cifras se encuentran en Héctor Palomino, "Efectos políticos y sociales de los cambios en el mercado de trabajo, en Argentina (1950-1983)", en *Economía de América Latina*, México, núm. 13, 1er. trimestre de 1985, p. 57 y también en A. Ferrer, "La economía argentina..." *op. cit.*, p. 183.

¹⁶ Lucio Geller, "Argentina: la ofensiva del '76", en *Economía de América Latina*, México, semestre núm. 3, septiembre de 1979, p. 168.

¹⁷ "El costo de endeudarse", editorial de *Clarín*, Buenos Aires, 18 de julio de 1981, p. 12.

¹⁸ Según A. Ferrer, "La deuda externa: el caso argentino", en *Comercio Exterior*, México, vol. 32, núm. 12, diciembre de 1982, p. 1340.

¹⁹ Mirta Botzman *et al.*, "Argentina: autoritarismo, 'libre cambio' y crisis en el proceso actual", en *Economía de América Latina*, México, núm. 2, marzo de 1979, pp. 138-139.

²⁰ Véase C. Abalo, "Argentina, 1976-1981..." *op. cit.*, p. 640.

²¹ Cfr. J. Schvarzer, "Argentina 1976-1981: el endeudamiento externo como pivote de la especulación financiera", en *Economía de América Latina*, México, núm. 10, 1er. semestre de 1983, p. 71.

²² C. Abalo, "Argentina, 1976-1981..." *op. cit.*, pp. 1027-1028.

²³ Véase Guillermo Vitelli, "La hiperinflación como instrumento de política económica, Argentina 1975-1985", en *Economía de América Latina*, México, núm. 14, 1986, pp. 45-47.

²⁴ Véase Luis Beccaria y Alvaro Orsatti, "Argentina, 1970-1984: la dinámica del empleo en un periodo de inestabilidad económica y social", en *Economía de América Latina*, México, núm. 13, 1er. semestre de 1985, p. 45.

²⁵ H. Palomino, *op. cit.*, p. 54.

²⁶ Cfr. Carlos F. Díaz-Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*, New Haven, Yale University Press, 1970, p. 527 y Alain Rouquié, *Poder*

militar y sociedad política en Argentina, Buenos Aires, Emecé Editores, 1981, p. 403.

- 27 Cfr. A. Ferrer, "La economía argentina bajo una estrategia 'preindustrial'", en A. Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, México, Siglo XXI, 1982, p. 125.
- 28 Cfr. Charles Maechlig, "The Argentine pariah", en *Foreign Policy*, Washington, núm. 45, invierno 1981-1982, p. 78.
- 29 *Clarín*, cit. por Gregorio Selser, "Gasto de 20 mil millones de dólares para defensa. ¿Cuál?", en *El Día México*, 23 de noviembre de 1982, p. 16.
- 30 J. Schvarzer, "Argentina 1976-1981: el endeudamiento...", *op. cit.*, p. 65.
- 31 Cfr. Jacobo Schatan, "Deuda externa y desarrollo: un enfoque heterodoxo", en *Investigación Económica*, México, ene-mar de 1985, núm. 171, p. 323.
- 32 Cit. por G. Selser, "¿A que no saben quién será el que se coma el pastel?", en *El Día*, México, 12 de abril de 1982, p. 16.

V. LA DICTADURA EN ARGENTINA: SUPUESTOS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS

El presente capítulo pretende mostrar una visión general sobre las hipótesis que los militares esgrimieron para llevar adelante el "Proceso de Reorganización Nacional" en Argentina entre 1976 y 1983, destacando las percepciones de las fuerzas armadas sobre sí mismas y la vertiente ideológica en que sustentaron su violento gobierno, es decir, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que por lo demás ya existía desde los sesenta.

Un segundo momento de análisis se refiere al desarrollo concreto del proyecto militar y el saldo que la estela de muerte propiciada y llevada hasta sus últimas consecuencias por el terrorismo de Estado dejó, victimando a los más diversos sectores de la sociedad civil, desde los sindicatos hasta la prensa, pasando por los partidos políticos, algunas asociaciones empresariales y ciertos clérigos; asimismo, se describen las respuestas que, sobre todo a partir de 1979, los grupos afectados fueron desarrollando frente al poder militar hasta llegar a una crisis de grandes proporciones al principiar 1982.

Dicha crisis, como se revisará en la tercera parte del capítulo, intentaría ser superada mediante un golpe diversionista y hasta cierto-punto sorpresivo: la toma de las Malvinas. Finalizada ésta con resultados ampliamente negativos para el gobierno militar, las pugnas intercastrenses en torno a la cesión del poder a los civiles se recrudecen, dando así lugar a una creciente polarización entre los sectores duros y blandos de las fuerzas armadas, por un lado, y entre el conjunto de los militares y los civiles, por otro. La asunción del gobierno por los radicales en diciembre de 1983 cierra este apartado.

1. LOS SUPUESTOS OPERATIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Al hacerse del poder en marzo de 1976, las fuerzas armadas llegaban previstas de un bagaje similar al que animó otras experiencias autoritarias en el Cono Sur durante los sesenta y los setenta. A grandes rasgos, los supuestos sobre los que el poder militar se asentó para la legitimación de su ejercicio gubernamental, fueron los siguientes: la

superioridad del estamento castrense; su capacidad para controlar los resortes del Estado y aun de la sociedad civil mediante la imposición generalizada del "orden", valor supremo para el uniformado; la tipificación del "civilacho" como un ente débil, demagogo y carente de la fuerza necesaria para guiar a la nación con rumbo a sus "destinos superiores" plasmados, en el caso que nos ocupa, en una Arcadía que se identifica con el sueño de la "Argentina Potencia".

En su propia óptica, pues, las fuerzas armadas resultan ser sujeto único de la moral sin mácula, el espíritu de sacrificio, la honradez, las virtudes cardinales, la religiosidad cristiana a toda prueba y el heroísmo vertido en defensa de la patria.

Para comprender de manera más didáctica el concepto que las instituciones armadas tienen de sí mismas como salvaguarda de la integridad y la moral nacionales (conceptos que se deben en buena medida a la indoctrinación que los militares reciben durante sus años de entreno), creemos que es útil recurrir a las siguientes consideraciones:

Si hay una imagen de la sociedad incorporada por las fuerzas armadas, es una imagen organicista: la sociedad vista como un cuerpo en el que cada parte tiene funciones bien delimitadas y jerárquicamente ordenadas. La cabeza, dotada de la racionalidad que falta a las demás partes, debe orientar el conjunto para el bien común. Cuando el cuerpo se enferma, puede ser necesario aplicar un duro remedio a la parte afectada. Esta, por su inferior racionalidad y por el propio hecho de estar enferma, no sabe, pero la cabeza no sólo tiene el derecho de actuar así: tiene el deber de hacerlo porque le corresponde cuidar la salud de todo el cuerpo.

En este contexto debe ubicarse la ideología oficial del Estado militar argentino entre 1976 y 1983, esto es, la Doctrina de la Seguridad Nacional ya analizada *grosso modo* en el capítulo I del presente trabajo y entendida como el *corpus* teórico de las fuerzas armadas para presentarse como "salvadoras de la patria" ante el cáncer subversivo.

La DSN en Argentina

Así, esta doctrina ubica a las fuerzas armadas en el vértice del aparato estatal, bajo dos supuestos centrales:

Primero, la conceptualización negativa del propio actuar. Es decir, la necesidad de hacerse presente en la vida política -y económica- del país estaría dictada no por los propios designios militares, sino por la existencia de un hecho externo a la institución (i.e. la subversión en todas sus formas y presentaciones), que pasó a ser el enemigo

mortal no únicamente de las fuerzas armadas, sino del Estado todo y, aún más, de la "civilización occidental y cristiana".²

Segundo, la idea de que la subversión, aunque de origen externo, toma cuerpo en el ámbito interno de manera no necesariamente convencional, por lo que el combate al enemigo se efectúa dentro de las fronteras del territorio nacional:

La subversión comunista con un pie en América (escribía ya en 1966 uno de los principales exponentes de la DSN en Argentina) apoyada de cuantiosos recursos económicos, puede aprovechar bajos estándares de vida para aumentar su esfera de acción en nuevos países. La propaganda, la infiltración en las más diversas instituciones (políticas, culturales, gremiales, universitarias, vecinales) y las guerrillas... son algunas de las etapas que caracterizan dicha subversión. En tal sentido, por afectar el estilo de vida y por lo tanto ser parte del interés nacional, la seguridad nacional, lleva implícito impedir que el comunismo pueda actuar impunemente en nuestro territorio.

Ante este desafío, el estamento militar estaría obligado, de acuerdo con sus cuadros intelectuales, a organizar una reacción masiva en cada uno de esos terrenos, lo que conducirá irremisiblemente a la militarización de la vida cotidiana.

En el caso argentino, tal militarización se tomó, durante el régimen iniciado en 1976, como el inicio de una cirugía mayor para extirpar la "amenaza subversiva". Más tarde el proyecto se intentaría extender al resto de América Latina.

Mesianismo militar y expansión de la DSN: la Doctrina Viola

La proyección internacional que la DSN mostró en la experiencia autoritaria argentina, encuentra sus antecedentes inmediatos en el concepto de "fronteras ideológicas" que el régimen del general Juan Carlos Onganía se empeñó en defender durante su mandato (1966-1970).

Muy relacionado con él estaría el pensamiento del comandante en Jefe del Ejército argentino, Roberto Eduardo Viola quien, considerando que hacia fines de los setenta la "guerra sucia" había logrado el objetivo de aniquilar casi todos los gérmenes subversivos en su país, demandaba el reconocimiento y la solidaridad de Occidente para evitar el retorno de las fuerzas de caos. En caso contrario —advertía Viola— "la amenaza perdurará, potencial, a la espera de condiciones favorables para intentar una nueva experiencia revolucionaria".⁴

Los mismos conceptos sirvieron de base para la alocución del militar argentino ante el pleno de la Conferencia de los Comandantes de Ejércitos Americanos, celebrada en Bogotá, Colombia, entre el 5 y el 10 de noviembre de 1979 donde, con base en las propuestas de Viola, se elaboró un plan anticomunista continental y se creó una

"Internacional de los servicios secretos", según denunciara el ex canciller colombiano, Alfredo Vázquez Carrizosa.⁵

Aun cuando poco pudo trascender de las restantes deliberaciones de la Conferencia, es muy posible que ellas hayan incidido en la actitud argentina ante dos sucesos posteriores en América Latina.

El primero de ellos fue el apoyo que el presidente Videla brindó al golpe de Estado que perpetró el general Luis García Meza en Bolivia el 17 de julio de 1980, respaldo que se manifestó tanto en el terreno diplomático y militar como en el financiero y el alimenticio ya que, según decía Videla, "no queremos en América del Sur lo que Cuba significa en Centroamérica".⁶

Precisamente en esta última región tuvo la oportunidad de ponerse a prueba por segunda vez la praxis de la Doctrina Viola. Si bien desde antes del 19 de julio de 1979 el gobierno argentino había estado enviando suministro militar para apuntalar al tambaleante régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua, la participación de los uniformados platenses —y con ello la internacionalización de la DSN en su versión argentina— comenzó a manifestarse de manera oficial a partir de marzo de 1981, cuando se anunció que la República Argentina estaba dispuesta a enviar asesores a El Salvador. Luego de esa fecha, la asesoría comenzó a tomar cuerpo no sólo en El Salvador, sino en otros puntos neurálgicos de América Central, donde también Argentina proporcionó armamentos.

Pero con ser importante la expansión del pensamiento geopolítico argentino hacia otros lugares de América Latina, lo que definió ante todo al régimen militar fue la forma de instrumentar su política dentro del propio país.

2. EL DESARROLLO DE LA DICTADURA

Justificada la toma del poder con la superestructura ideológica de la DSN, los militares se abocaron, luego de 1976, a una doble tarea: remozar el orden, e introducir cambios de fondo en las relaciones económicas nacionales. Inmediatamente la represión se colocó al servicio de un modelo excluyente del sector popular en lo político y lo económico, y construyó un sistema de terror nada metafórico que golpeó a grandes franjas de la población mediante muy diversos métodos. Esa maquinaria represiva, sin embargo, no resultaría suficiente, pasado cierto tiempo, para contener las demandas y contradicciones acumuladas durante las épocas de miedo, oscuridad y silencio.

Tampoco serían suficientes los intentos de dar a la dominación cierto barniz democrático o aventuras internacionales que, como la de las Malvinas, sólo pudieran acelerar la descomposición de un régimen militar al que no le disgustaba la idea de la eternidad en el poder.

Veamos, pues, la política del "Proceso de Reorganización Nacional", que se basó en la desaparición del marco jurídico constitucional, los métodos coercitivos generalizados y, en fin, el terrorismo de Estado; revisemos también las respuestas de la sociedad civil, tímidas al principio, pero más concertadas y vigorosas después.

Desaparición del marco jurídico constitucional

Para darle una especie de justificación metafísica a su gobierno, los militares argentinos se apresuraron a erigir un nuevo orden normativo que pretendía exceder incluso la duración del "Proceso".

De este modo, la voluntad de los militares se impone como poder constituyente, para lo cual se promulgan, el 24 de marzo de 1976, el Acta, el Estatuto y los Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional (PRN, en lo sucesivo), mismos que tendrían, para efectos legales, una jerarquía superior a la Constitución de 1853.

Más tarde, ya en el transcurso de la dictadura, se legisló mediante "Actas institucionales" y "Decretos leyes", que tendrán resonancia en todos los ámbitos de la vida argentina; sobre ordenamientos concretos de esta naturaleza se insistirá más adelante. Baste retener, por ahora, la importancia que para el poder marcial significó la construcción de estructuras jurídicas para sustentar su acción represiva posterior.

Desaparición de las mediaciones entre Estado y sociedad civil: la ola represiva.

En la visión de quienes tomaron el poder en marzo de 1976, era necesario, para llevar adelante el proyecto originalmente diseñado, desaparecer o por lo menos neutralizar a núcleos real o potencialmente contestatarios dotados de poder de convocatoria e influencia general. Es decir, la fracción dominante estaría tan sola en la cúpula estatal, que únicamente podría hacer valer su hegemonía por el expediente del uso indiscriminado de la coerción. Está se ejercería en por lo menos siete ámbitos, a saber: el sindical y gremial; el de los simpatizantes en la lucha por los derechos humanos; el de los partidos políticos; el de la prensa y los medios de difusión; el de las universidades, la educación y la cultura, y finalmente en el de las minorías en general.

a) Represión sindical y gremial.

Entre las primeras medidas del PRN en este renglón, puede mencionarse la promulgación de la ley 21270/76, mediante la cual se interviene el Consejo Directivo de la Central General de Trabajadores (CGT); el decreto 9/76, que suspende "transitoriamente" las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y

profesionales, y el decreto 10/76 que prohibió explícitamente la actividad de las 62 Organizaciones peronistas o cualquier otra instancia que las sustituyera.⁷

Como corolario de las anteriores reglamentaciones, dispuestas en 1976, tres años más tarde la administración militar sanciona la ley 22.105 de asociaciones gremiales que, a lo largo de sus 83 artículos, facilita la dispersión regional y la atomización de los gremios, prohíbe la participación de los sindicatos en política, proscribire la intervención de estos en las obras sociales y establece la discrecionalidad salarial, dejándola en manos de los patrones.

También habría que mencionar la promulgación de medidas secretas, como la directiva presidencial 504/77, una ley clandestina dictada por Videla que, según el Centro de Estudios Legales y Sociales de Buenos Aires, autorizaba procedimientos ilícitos para detener activistas sindicales, así como para infiltrar a cuerpos de delegados y comisiones internas obreras en establecimientos fabriles e industriales.⁸

Aparte de la represión que significaron estos cambios en la estructura jurídica propiamente dicha, se encuentra la violencia *de facto* ejercida contra los cuadros sindicales. En efecto, la dictadura militar hizo desaparecer, encarcelar y asesinar a un elevado número de delegados obreros y líderes sindicales. Según el ya célebre Informe Sábado de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), casi una tercera parte de los desaparecidos en el periodo 1976-1983 tenía como actividad la de obrero.⁹

La represión perpetrada en la Argentina durante el periodo estudiado la explicaba, quizá de manera involuntaria pero con sorprendente claridad el ministro de Hacienda (más tarde ministro de Economía durante el gobierno de Galtieri) Juan Alemann, en 1979, cuando declaraba a un periódico de la ciudad de Salta:

La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos. Ahora... el trabajador no acude más al dirigente sindical por su problema, porque si no le gusta el empleo se va a otro y listo. Además hay salarios diferenciados por capacidad, por idoneidad, por apego al trabajo. Estamos saliendo de la masificación y hemos debilitado al poder sindical y esta es la base para cualquier salida política de la Argentina.¹⁰

b) Violencia contra activistas de derechos humanos.

Las agresiones a los organismos defensores de las mínimas garantías y derechos individuales y sociales del país (a las cuales se hará alusión más adelante) fueron numerosas y constantes. Algunas de las más comunes consistieron en el allanamiento de sedes de dichas organizaciones (como el que se realizó en agosto de 1979, tres semanas antes del arribo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la

OEA); el hostigamiento constante; el impedimento para realizar marchas de protesta y la desaparición de numerosas personas comprometidas en tareas humanitarias.

Un sector especialmente afectado por esa coerción fue el de los abogados, cuyas filas se vieron mermadas por 300 asesinatos y encarcelamientos hasta 1982. Menos numerosos, pero también importantes por su peso social, eran los religiosos, principalmente católicos, que condenaron el terrorismo de Estado encontrando la muerte como consecuencia. Tal es el caso del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, asesinado el 4 de agosto de 1976 por las fuerzas de seguridad. Igual suerte encontraría un grupo de padres palotinos, así como dos monjas francesas que fueron secuestradas mientras acompañaban a las Madres de la Plaza 3 de Mayo en diciembre de 1977.

c) Proscripción de los partidos políticos.

Presentada como medida temporal, la suspensión de las actividades políticas de los partidos se ordenó con base en el decreto no.6 del 24 de marzo de 1976 y las leyes 21.322, 21.323 y 21.325 que, para "serenar los espíritus", como decía el presidente Videla, disolvieron agrupaciones políticas, clausuraron sus locales, ordenaron la apropiación de sus bienes y establecieron una pena de hasta ocho años de prisión para aquellos que realizaran actividades relacionadas con las entidades disueltas. Entre estas actividades se mencionaba el uso o la exhibición de símbolos y emblemas con fines de adoctrinamiento, propaganda, difusión y proselitismo.¹¹

No obstante esas limitaciones, la actividad de los partidos políticos se fue reestableciendo paulatinamente. Divididos en facciones, los principales de ellos salieron nuevamente a la vida pública tras los primeros años del PRN, pero entre sus filas también se registraron numerosas víctimas de la violencia.

d) Ataques a la prensa y otros medios masivos de comunicación.

Se fundamentaron en la aplicación de la ley 20.840 de seguridad nacional, dictada en octubre de 1974 durante la presidencia de Isabel Martínez. En su artículo tercero, esa ley establecía que incurrían en responsabilidad penal los redactores o editores de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio o televisión o responsables de cualquier medio de comunicación que informaran o propagaran hechos, imágenes o comunicaciones referentes a actividades subversivas.

Con base en esta legislación, pero también en la fuerza que era el único argumento real de las fuerzas armadas para detentar el poder, más de 100 periodistas fueron asesinados, encarcelados y obligados al exilio. Entre ellos destacan Rodolfo Walsh, Rafael Perrotta, Edgardo Sajón, Héctor Demarchi, Enrique Raab y Jacobo Timerman, director de *La Opinión* de Buenos Aires y quien, pese a estar vinculado

personalmente al entonces presidente Videla, fue arrestado en abril de 1977, juzgado por una corte militar, declarado inocente por la misma, mantenido en prisión después de la sentencia absolutoria y liberado gracias a las demandas de la opinión pública internacional¹². También se encuentran Robert Cox, director del periódico *Buenos Aires Herald* y Andrew Graham Yool, colaborador del mismo, quienes abandonaron Argentina en 1979.

Igualmente se dieron varios casos de diarios e imprentas allanados, y de medios informativos clausurados. No llama a sorpresa, en consecuencia, que la prensa argentina en general —con las excepciones del caso— se sometiera a la censura más o menos explícita de las autoridades y, aún más, a la autocensura, en previsión de que el contenido de los diversos medios informativos pudiese no ser del agrado del régimen, el cual mantenía el monopolio en la distribución del papel y erogaba grandes sumas por concepto de publicidad.

Por lo que se refiere a la situación de la radiofonía y la televisión, en octubre de 1980 se aprobó una nueva ley de radiodifusión que privatizaba emisoras hasta entonces en manos del Estado, y creaba el Comité Federal de Radiodifusión. Este, compuesto por siete miembros (tres del ejército, uno de la Secretaría de Información, uno de la Secretaría de Comunicaciones y dos de la empresa privada) se encargaría de elaborar las directrices generales para los llamados *mass media*, bajo la premisa estipulada en la nueva ley en el sentido de que toda emisión “debe evitar hacer aparecer todo aquello que pueda degradar la condición humana, conflictuar la solidaridad social, subestimar los sentimientos nacionales y patrióticos y descuidar la estética”.¹³

e) Ataques a las universidades, la educación y la cultura.

Este tipo de represión se ejerció por muy distintas vías, pero en todo caso se encuentra, en las políticas instrumentadas en este renglón, la huella del fascismo español, para el cual era un grito de guerra el pedir la muerte de la inteligencia.

Así, se prohíbe la afiliación política de las autoridades de las casas de estudio y los centros de educación superior. En el ámbito universitario los ataques más virulentos fueron no sólo contra ciertas disciplinas humanísticas (sociología, filosofía y psicología) sino también contra algunas pertenecientes a las ciencias exactas, como la matemática moderna. Los criterios utilizados para la agresión a las esferas de estudio mencionadas se pueden encontrar en los conceptos vertidos por un ideólogo del gobierno castrense, quien aseguraba:

Argentina tiene tres enemigos principales. Carlos Marx, porque trató de destruir el concepto cristiano de sociedad; Sigmund Freud, porque trató de destruir el concepto cristiano de la

familia; y Albert Einstein, porque trató de destruir el concepto cristiano del tiempo y el espacio.¹⁴

Imbuidos de esa mentalidad, los responsables del PRN arremetieron contra las universidades, haciendo uso de una amplia gama de instrumentos, entre los cuales destacan: 1) Clausura de facultades dedicadas a la docencia e investigación en humanidades y asuntos sociales, llegando al extremo de ordenar el cierre de universidades completas, como aconteció con la de Luján; 2) represión presupuestal, que condujo a una reducción sustancial en la matrícula universitaria pública, la cual pasó de 68 mil 642 educandos en 1977 a 50 mil 130 en 1980; y 3) fortalecimiento de la importancia de las instituciones privadas de educación superior.

En el terreno de la educación en general, se introdujo nuevamente en los programas y las prácticas docentes una mentalidad de sacristía muy cara para los sucesivos gobiernos militares que han desfilado por Argentina. Desde el Ministerio de Cultura y Educación se ensayaron vastas reformas y se crearon aparatos de censura tales como la Comisión Orientadora de Medios Educativos (CODME) en 1980, cuya función básica sería la de supervisar, calificar y "recomendar" textos para los diversos niveles educativos.

Simultáneamente se dictaron medidas como las contenidas en la circular número 137 de la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior del Ministerio de Educación y Cultura que disponía las siguientes instrucciones para la juventud de ambos sexos:

Ponerse de pie cada vez que una autoridad entre al salón de clases, lo mismo que un profesor u otra persona adulta; guardar silencio en ocasión de cualquier ceremonia oficial; no fumar. El uso de blue-jeans o de ropas de color sobre el delantal está prohibido. Igualmente se prohíben las gestiones colectivas. Finalmente, se prohíbe todo comentario que critique el principio de autoridad y de jerarquía.¹⁵

A estos curiosos reglamentos se agregaron otras recomendaciones de carácter cuasi-policíaco e inquisitorial, como las destinadas a detectar la existencia de irregularidades y reconocer la "infiltración marxista" en las escuelas. ¿Cómo se reconocería ésta? Muy sencillo: aquellos profesores o alumnos que emplearan vocablos tales como diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, capitalismo, preconciliar, ecumenismo, liberación y compromiso, serían automáticamente sospechosos de simpatizar con el comunismo, al igual que los docentes que recurrieran al trabajo de grupo como parte de su práctica pedagógica.¹⁶

En lo que respecta a la cultura en general, las asignaciones presupuestales para ella, según denunció el justicialismo en 1980, fueron del 0.4 por ciento del gasto

público. De este modo lo que María Elena Walsh llamó "genocidio cultural" sentó sus reales en la Argentina militar de los setenta y los ochenta.

Fue así como la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), antaño reconocida como una de las mejores del continente, sólo editó alrededor de 100 títulos entre 1966 y 1980, mientras que con anterioridad a la primera fecha y desde 1962, había publicado 800 libros que en conjunto sumaron varios millones de ejemplares.¹⁷

Otro hecho que sirve para documentar la actitud culturicida de los militares argentinos del PRN es la censura de libros, entre los cuales figuraron *El principito*, de Saint Exupéry; *Un elefante ocupa mucho espacio*, de Agnes Rosentieh; *La Torre de cubos*, de Laura Devetach; *La tía Julia y el escribidor*, de Mario Vargas Llosa; *La muerte de la familia*, de David Cooper, y la totalidad de las obras del pedagogo brasileño Paulo Freire. Asimismo, el decreto 433/80 del Poder Ejecutivo prohibió los siguientes libros, por atentar "contra la armonía de las relaciones sociales": *Lógica Formal y dialéctica*, de Henry Lefevre; *El Evangelio en el alba*, de René Trossero y *Dios es fiel*, de Beatriz Casiello. Por si ello fuera poco, los Torquemadas del PRN retiraron de la circulación la *Biblia latinoamericana* y obras enciclopédicas como *Universitas*, la *Gran Enciclopedia del Saber*, editada por Salvat, el *Diccionario Oriente* de la editorial bonaerense del mismo nombre, y los cuatro volúmenes de *La historia presente*, que versan sobre temas latinoamericanos. Huelga decir que se censuraron las obras clásicas del marxismo y todo lo que pudiera parecersele. Tan sólo la editorial mexicana Siglo XXI vio vetados entre 150 y 200 de sus títulos editados por parte de los mlites argentinos.¹⁸

No mejor les fue a por lo menos 242 temas musicales proscritos por la antecitada Comisión Federal de Radiodifusión. Por no poder enumerarlos todos, se menciona a algunos de los autores: Eduardo Falú, Enrique Santos Discépolo, Astor Piazzola, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Rick Springfield, Leonardo Favio, Nacha Guevara, etcétera.¹⁹

La represión en este campo, sin embargo, no fue únicamente en contra de los medios e instrumentos culturales, sino también contra las personas. Intelectuales y escritores de talla internacional como Haroldo Conti y Rodolfo Walsh fueron asesinados, mientras otros como David Viñas, Antonio di Benedetto, Pedro Orgambide, Humberto Costantini, Daniel Moyano y Héctor Tizon fueron sacrificados a los dioses de exilio, al igual que varios miles de científicos y técnicos; 200 de ellos fueron víctimas del homicidio o la desaparición.

Una obsesión tan negativa con respecto a la cultura y todo lo que derivara de ella, no podía sino arrojar cifras como las siguientes: el analfabetismo, que en 1970 padecía 5% de la población adulta, aumentó al 30% (total o funcional) en 1983, lo que redundó en una cantidad de un millón 250 mil analfabetos abiertos y un índice de

deserción escolar de 40% entre 1976 y 1978; en ciudades del interior las cifras fueron mayores, como en Corrientes y Rosario, localidades donde alcanzaron promedios de 30% en primaria y 50% en secundaria.²⁰ En síntesis, la cultura no salió mejor librada que la economía y la política del acoso destructivo a que los militares platenses la sometieron.

f) Hostigamiento a las minorías.

Esta esfera de la acción militar se manifestó, por un lado, frente a las minorías sexuales y, por otro, frente a las minorías religiosas y étnicas, entre las que se encuentran judíos, sectas protestantes y latinoamericanos que se habían acogido al exilio argentino. Víctimas destacadas de la violencia contra los ciudadanos de origen latinoamericano fueron los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Rufiz; el ex presidente boliviano Juan José Torres y el ex comandante en jefe del ejército de Chile, Carlos Prats y su esposa. Los participantes activos en el PRN también desafiaron todas las convenciones internacionales sobre derecho de asilo, al no otorgar salvoconductos al ex presidente de la nación, Héctor J. Cámpora ni al dirigente peronista Juan Manuel Abal Medina, quienes fueron obligados a permanecer en la embajada mexicana en Buenos Aires hasta finales de 1979.

El terrorismo de Estado en Argentina: hacia un balance.

Habida cuenta de todos los elementos y las formas represivas anteriormente señalados, se cree que es pertinente describir la situación argentina entre 1976 y 1983 como un terrorismo de Estado que se impulsó a todos los niveles del aparato gubernamental y las fuerzas armadas. Vienen al caso las palabras del general Santiago Omar Riveros quien, en el transcurso de una reunión de la Junta Interamericana de Defensa que tuvo lugar en 1980, formuló las declaraciones que enseguida se reproducen:

Hicimos (los militares argentinos) la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores. Nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares. Nos sobra nuestra capacidad y nuestra organización legal para el combate frente a fuerzas irregulares en una guerra no convencional. Ganamos y no nos perdonan; se nos dice que hemos vulnerado los derechos humanos. (La acción antisubversiva) la condujeron los generales, almirantes y brigadieres en cada fuerza ... La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país a través de los estados mayores.²¹

Sin duda alguna las afirmaciones del alto jerarca del PRN están lejos de ser mentira. Efectivamente, el Estado militar argentino montó un colosal dispositivo para

la represión fincada en los llamados "grupos de tareas" (GT's), dependientes de los respectivos comandos militares de las fuerzas armadas; el GT-1 pertenecía al Ejército; el GT-2 a la Fuerza Aérea; el GT-3 a la Armada y el GT-4 a la Policía Federal. Apoyados por personal represivo auxiliar (bomberos, médicos, abogados, jueces, capellanes), estos aparatos represivos establecieron 340 centros clandestinos de detención y tortura en donde laboraron, se calcula, más de mil 300 oficiales de las tres armas y las fuerzas de seguridad.²²

En la visión de las fuerzas implicadas en esta magna labor destructiva, las víctimas realmente no lo eran, porque más bien pertenecían a la categoría de los "subversivos". Sólo que el concepto era (es) extremadamente amplio, pues como dijera el general Videla en 1978: "El terrorista no sólo es considerado tal por matar con una arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana".²³

La ferocidad y amplitud de la represión impuesta desde la cúpula estatal, así como las modalidades que asumió se reflejan en otras frases, éstas del general Manuel Ibérico Saint-Jean, jefe del servicio de Informaciones de Estado (SIDE), tristemente célebre después de decir: "Primero deberemos matar a los guerrilleros, después a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, a continuación a los indiferentes y por último a los vacilantes". Exceso verbal o proyecto político delirante, las palabras de este militar tuvieron un correlato dramático en los hechos.

Los desaparecidos o "ausentes para siempre", como los bautizó el general Viola, fueron las víctimas más conspicuas de la "guerra sucia", llamada así por su disonancia con los valores de hidalguía y enfrentamiento rudo pero caballeresco que tanto influyen en la formación militar.²⁴ ¿Quiénes fueron los sacrificados de la "guerra sucia" y en qué circunstancias fueron llevados al holocausto? Según el resumen de 50 mil folios sobre violaciones a los derechos humanos contenidos en el documento final de la CONADEP, de los casi 9 mil desaparecidos existentes hasta 1984 (la cifra no cuenta a los ya aceptados como muertos ni a aquellos cuyas familias no osaron reclamar; el guarismo es también inferior a los 30 mil desaparecidos calculados por las Madres de la Plaza de Mayo y otros organismos no gubernamentales, y se ubica por debajo de las estimaciones de la CIDH y el Departamento de Estado norteamericano), el 30.2% eran obreros, el 21% estudiantes, el 17.9% empleados, el 10.7% profesionales, el 5.7% docentes. El resto se encontraba repartido entre amas de casa, conscriptos y personal subalterno de las fuerzas de seguridad (2.5%), periodistas (1.6%), actores y artistas (1.3%) y religiosos (0.3 por ciento).

En cuanto al modo de detención, el 62% de los desaparecidos fue en su domicilio ante testigos; el 14% en la vía pública; el 7% en lugares de trabajo, el 6% en lugares de estudio, el 9.9% en circunstancias desconocidas y el 0.40% en dependencias militares durante el cumplimiento del servicio militar.²⁵

La guerra sucia, que supone un vasto historial de horror, cobardía, demencia, tortura, violaciones y asesinatos, tuvo otra manifestación que, aunque más silenciosa, fue también desgarradora: la emigración. Al finalizar la década del setenta, habían abandonado el país entre un millón y medio y dos millones de personas, orilladas a hacerlo tanto por la violencia política como por la "guerra sucia económica" que se analizó en el capítulo anterior.

¿Y los guerrilleros en combate supuesto de los cuales se estructuró la respuesta estatal? Se sabe que los núcleos armados en Argentina, que vivieron su época de auge entre 1970 y 1976, fueron definitivamente diezmos, de modo tal que para 1977 el 60% del principal movimiento (los "Montoneros", se origen integrista católico con radicalizaciones izquierdistas en el discurso) había sido eliminado por diversas vías. La dirección del grupo, inclusive, se vio en la necesidad de trasladarse a Roma en ese último año.²⁶

De ahí que, si se tiene en cuenta que la "guerra sucia" continuó con gran intensidad por lo menos hasta 1979, puede observarse que la acción antiguerrillera excedió holgadamente los límites y desafíos que le planteó la amenaza invocada. De ahí también que resulta menester asumir con toda amplitud las conclusiones de dos importantes instancias que se han manifestado durante el gobierno civil posterior a diciembre de 1983 sobre el problema de los desaparecidos.

La primera de ellas, la CONADEP, aseguró que durante el PRN:

...los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las fuerzas armadas. Y no violados de manera esporádica, sino sistemática, de manera siempre igual, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlos a una metodología del terror planificada por los altos mandos?... ¿Cómo puede hablarse de "excesos individuales"?²⁷

La segunda está representada por el doctor Julio César Strassera, quien fungió como fiscal en el juicio que se estableció en 1985 contra nueve miembros de antiguas juntas militares. En su alegato, del que vale la pena citar el siguiente párrafo, Strassera dijo:

La violencia guerrillera exhibió su ceguera en un apego a la violencia por la violencia misma, pero para combatirla se creó un instrumento mucho más cruel: el terrorismo de Estado. Ciertamente los guerrilleros secuestraron y mataron, pero, ¿qué hizo el Estado? Hizo peor; secuestró, torturó y mató a la gente en escala todavía mayor y más feroz... hay tres palabras para calificar la represión ejercida por el último régimen militar: feroz, clandestina y cobarde.²⁸

En entrevista posterior, el fiscal anotó sobre la "guerra sucia":

...aquí no hubo ninguna guerra. Lo que hubo fue una cacería de conejos, que es muy distinto... porque, a ver, ¿que clase de guerra es esa donde no se dan a conocer nombres y números de los prisioneros de los muertos? ¿Qué clase de guerra es esa cuyas acciones no se conocen, ni hay partes porque nada se informa, nada se difunde?... Y si me contestan que fue una guerra atpica... yo quiero que me digan como se hace una guerra no convencional... Pero supongamos que hubiera habido aquí una guerra; la misma guerra tiene sus leyes. Argentina suscribió las convenciones de Ginebra, según las cuales están prohibidas las ejecuciones sin juicio previo... los tratos humillantes, degradantes, inhumanos... los saqueos, en fin, prohíben expresamente el uso de este tipo de represalias; es decir que la violación de los derechos humanos por una de las partes -si hubiera sido así- no autoriza a la otra para violarlas.²⁹

En conclusión, un balance del terrorismo de Estado en el tiempo y lugar que nos ocupa no debe perder de vista los siguientes elementos: 1) que el objetivo central de la represión es crear temor para poder establecer la hegemonía por medio de la fuerza; 2) que el autoritarismo no sólo se refleja en la dicotomía Estado-movimientos políticos de oposición, sino se infiltra de manera bastante perceptible en todos los niveles y funciones de la sociedad;³⁰ 3) que, finalmente, la dictadura militar argentina del PRN no inventó la descomposición violenta de la política en ese país, sino retomó -y llevó al límite del paroxismo- tendencias autoritarias ya detectadas con anterioridad en la historia nacional. Ello, desde luego, con vastas consecuencias para la salud psíquica de los argentinos.³¹

Tensiones y disrupciones en la dominación

Luego del paréntesis destinado a explicar y evaluar retrospectivamente al terrorismo de Estado, debemos apresurarnos a aclarar que, contra el proyecto original de éste, el consenso forzado -"la paz de los sepulcros"- no se pudo mantener durante más de tres años. En efecto, la movilización social y las tensiones existentes al interior de la alianza que originalmente asumió el poder en 1976, comenzaron a manifestarse con particular intensidad en el segundo semestre de 1979, cuando muchos de los grupos afectados por la represión -y otros que no lo habían sido tanto en términos físicos, pero sí económicos- comienzan a expresar más o menos simultáneamente sus divergencias ante el régimen. Por orden de aparición se mencionan: organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, estratos medios y, muy importante, voces discordantes dentro de la propia coalición del gobierno.

- a) Las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Ya el 30 de abril de 1977, a sólo un año de establecida la dictadura, un grupo de madres de desaparecidos comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo (centro histórico del país), partir de las 11:00 a.m. Eran las que el gobierno militar adjetivó como las "locas de la Plaza de Mayo", a las que el mundo conocería como "las Madres de la Plaza de Mayo". Ellas, mujeres de distintas edades, se convirtieron, sin exagerar, en conciencia de la sociedad argentina.

Más tarde, alentados por el ejemplo de las Madres, surgen otros organismos como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, el Movimiento Ecueménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, el Servicio "Paz y Justicia" del galardonado Adolfo Pérez Esquivel, la Comisión Nacional por los Derechos del Hombre y la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

Varias de estas organizaciones colaborarían con la CIDH, que arribó a Argentina el 6 de septiembre de 1979, en la confección de una nómina de 5 mil 841 personas desaparecidas desde 1975 hasta julio de 1979. También, con sus numerosas manifestaciones y desplegados periodísticos, presionaron a la administración militar para promulgar la ley 22.068 de septiembre de 1979, en donde el gobierno asentó que podrían ser declarados como presuntos muertos, para efectos legales, todos aquellos individuos cuyo paradero se desconociese; asimismo, se estipuló que los deudos de esos desaparecidos podrían realizar numerosos trámites a consecuencia de esa definitividad como, por ejemplo, volver a contraer matrimonio.³²

Con posterioridad a la publicación de esa ley, así como la estancia de la CIDH en Argentina, la opinión pública vio aparecer un auténtico torrente de peticiones en demanda de respuestas serias sobre la cuestión. En el diario *Clarín* apareció una "solicitada" (inserción pagada), en la que a fines de 1979 más de 12 mil ciudadanos argentinos pedían saber datos acerca de las personas secuestradas. En el diario conservador *La Prensa* se publicó otro desplegado con similares exigencias, pero esta vez bajo la firma de destacadas personalidades del mundo entero, el 19 de abril de 1980.

Durante y después de la aventura de las Malvinas, a las entidades de derechos humanos se sumaron quienes querían esclarecer la suerte de los desaparecidos de guerra. Más tarde, en la agónica administración del general Bignone, una delegación de cinco mujeres, encabezada por la líderesa de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, entregó a aquél un documento donde se reclamaba "una exhaustiva investigación: los muertos *deben* ser identificados; las responsabilidades *deben* ser determinadas; los culpables de los crímenes *deben* ser castigados".

Voces nítidas, sin duda, las de las Madres y grupos similares serían premonitorias de otras que también se habrían de manifestar en su sucesivo.

b) La oposición de los sindicatos.

Tras una serie de mermas y derrotas, en 1979 comienza a recomponerse el movimiento obrero. Así, en septiembre de ese año surgió la Coordinadora Unica de Trabajadores Argentinos (CUTA) que reivindicó el restablecimiento de la ley 14.250 de convenciones colectivas de trabajo, la restitución del derecho de huelga conculcado por las autoridades laborales del gobierno militar, la normalización de los sindicatos y centrales intervenidas, el mantenimiento de la estructura sindical y las obras sociales en manos de los gremios, y la posibilidad de diálogo entre empresarios y trabajadores, por un lado, y entre éstos y el régimen, por el otro.

En buena medida el ascenso contestatario del sector obrero estuvo promovido por el denominado "Grupo de los 25"; de tendencia peronista. Dicho grupo organizó desde 1976 ciertas acciones de resistencia frente a la política económica y laboral del PRN —destaca la huelga de trabajadores de Luz y Fuerza a fines de ese año— que paulatinamente fueron aumentando. La heterogeneidad lo define, pues reunía por igual sindicatos separados de "Las 62" (agrupación que, conducida por el metalúrgico Lorenzo Miguel, expresa las tendencias más ortodoxas de la burocracia sindical peronista) y a otros gremios más liberales como los mineros, los trabajadores de la industria del vestido, los papeleros, los telepostales y otros más.

No sin contradicciones, "Los 25" fueron avanzando hacia formas cuantitativa y cualitativamente más avanzadas de lucha, que culminarían con el paro nacional de actividades de abril de 1979, hecho considerado como un importante punto de inflexión para la oposición argentina frente a las fuerzas armadas.³³

En fechas posteriores, y ya reactivada la movilización general, se suscitaron otras acciones de protesta obrera: la nueva huelga nacional convocada por la CGT el 22 de agosto de 1981, junto con la masiva manifestación que la misma central sindical auspició el 7 de noviembre de 1981 y la marcha en demanda de "paz, pan y trabajo" celebrada simultáneamente en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Córdoba el 30 de marzo de 1982 fueron algunas de ellas.

Con posterioridad a la derrota de Argentina en el Atlántico Sur, como se discutirá más adelante, la oposición sindical al régimen se incrementará hasta configurar un sector primordial en el restablecimiento del civilismo en el país.

c) La oposición de los partidos políticos.

Mientras los sindicatos y los grupos comprometidos en la defensa de los derechos del hombre despertaban, los partidos políticos, si bien con más lentitud, comenzaban a hacer lo propio. De este modo, en septiembre de ese año clave que, ya se ha dicho,

fue 1979, el Partido Justicialista emitió –la CIDH visitaba Buenos Aires– el pronunciamiento más explícito de crítica y denuncia al régimen por parte de esa tendencia política, que en diciembre se pronuncia en contra del establecimiento de la antecitada ley 22.105, eminentemente negativa para los intereses de los sindicatos y gremios. En el reclamo siguen al peronismo los más disímboles partidos, desde la UCR hasta el Partido Comunista pasando por el Intransigente, el Federal, el Socialista Unificado y el Movimiento de Integración y Desarrollo (comandado por el ex presidente Frondizi y su mano derecha Rogelio Frigeiro), amén de agrupaciones como la Confederación Socialista Argentina.

Ciertamente, hasta mediados de 1980, los partidos políticos parecían encaminarse a la formación de un frente opositor común frente al régimen militar, en ese entonces presidido por Videla.

Aunque un tanto tibio en la forma y el fondo de sus reivindicaciones, el frente opositor logró cuajar en los primeros meses de 1981, de modo tal que cuando el general Viola asumió la jefatura del PRN ya se había procedido a crear la Multipartidaria, integrada por el peronismo, la intransigencia, los radicales, la democracia cristiana y el MID.

Discreta en términos generales, la posición de la Multipartidaria observó la tendencia a devenir más combativa conforme el final de la dictadura se aproximaba, aunque en ocasión de la Guerra de las Malvinas sus integrantes se volcaron en apoyo del gobierno, excepción hecha del MID de Frondizi y de algunos sectores radicales que mantuvieron prudencia en cuanto al apoyo de la acción armada emprendida por Leopoldo Galtieri y sus asesores.

Al concluir esta acción, los partidos políticos redoblaron sus críticas al PRN y fueron coincidiendo cada vez más en ello con otros segmentos sociales disruptivos o centrifugos con relación a la dominación impuesta por el estrato militar.

d) Oposición de sectores medios y altos.

En 1979, cuando la constelación de actores sociales que se ha enumerado comenzó a mostrar mayor beligerancia de cara a las directrices impuestas por el PRN, los sectores grancapitalistas, como la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina todavía apoyaban a aquél. Sin embargo, a partir del estallamiento de la recesión en 1980-1982, estos grupos tendieron a romper lanzas con los militares en general y con la conducción económica en particular.

Más evidente y frontal había sido la oposición de los pequeños y medianos propietarios industriales y agrícolas, afectados por la política económica instrumentada por el ministro del ramo, Alfredo Martínez de Hoz. Especialmente contestataria resultó la Federación Agraria Argentina (FAA) –que nuclea a un gran

número de empresarios rurales de regular envergadura provenientes sobre todo de la pampa húmeda- la cual criticó en repetidas ocasiones la estrategia agrícola instrumentada por el régimen de las fuerzas armadas. En respuesta, en 1980 el líder de la FAA, Humberto Volando, fue acusado de comunista e intimidado por el Ministerio del Interior.³⁴

Otro estrato medio *par excellence*, el de los intelectuales y los trabajadores del arte, también se sumó a los reclamos de la sociedad civil frente a los excesos del terrorismo de Estado y la "guerra sucia" económica. De este modo, en vísperas de la Navidad de 1981, los narradores pertenecientes a la llamada "Generación del setenta", emitieron un documento que, bajo el título de *Situación del escritor en esta etapa de la actualidad en la Argentina*, afirmaba que "la censura es la parte visible de un proceso más vasto: la represión social, la coerción ejercida sobre la cultura en su concepción más amplia", y añadía que gracias a ella en la Argentina estaba postergada la discusión de los grandes problemas nacionales, entre los cuales destacaba el "de los desaparecidos".³⁵

Por su parte, en ese mismo fin de año, la Sociedad Argentina de Escritores, la Asociación Argentina de Actores, la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, los Directores Argentinos Cinematográficos y la sección argentina del PEN Club, emitieron un documento firmado por sus presidentes, el cual insistía en condenar la censura, considerando a ésta como una instancia desnaturalizadora de la creación literaria y artística y atentatoria de derechos asenciales del creador.

e) Tensiones y contradicciones entre la coalición gobernante.

Muy importante es, para efectos de nuestro estudio, el análisis del comportamiento de los sectores que, no obstante estar de acuerdo con el PRN implícita o explícitamente, en distintas ocasiones expresaron abiertas discrepancias con las juntas militares. Sobresalen en este renglón ciertos sectores de la Iglesia católica y las propias fuerzas armadas.

La Iglesia, a pesar de constituir una aliada estratégica del gobierno, y aún cuando algunos de sus miembros llegaron a recibir sueldos del Estado, no pudo sustraerse del avance contestatario iniciado en 1979. Dos años más tarde, el 30 de junio de 1981, dio a conocer el documento "Iglesia y comunidad nacional", en el cual realizaba consideraciones que, en el contexto, resultaban sumamente desagradables para los militares. Tal es el caso de las siguientes líneas:

... se debe discernir entre la justificación de la lucha contra la guerrilla, y la de los medios empleados en esa lucha... La represión ilegítima también entuló a la patria. Si bien en caso de emergencia pueden verse restringidos los derechos humanos, éstos jamás caducan y es

misión de la autoridad, reconociendo en fundamento de todo derecho, no escatimar esfuerzo para devolverles la plena vigencia.³⁶

Tratándose de conceptos provenientes de una de las jerarquías eclesiásticas más conservadoras de América Latina, los arriba reproducidos bien pueden considerarse como síntoma del grado de descontento al que el PRN había conducido, aun entre sus aliados.

No menos críticos fueron los pensamientos de la Conferencia Episcopal Argentina plasmados en un pronunciamiento posterior ("Reconstrucción nacional y orden moral", de noviembre de 1981) que condenaba, por anticristiana, a la usura, en evidente referencia a la política económica entonces vigente.

Sin embargo, manifestaciones posteriores retomaron el camino de la complicidad con los militares que el arzobispado argentino —con notables excepciones como las del ya mencionado Angelleli, muerto en 1976; Jaime de Nevares, de Neuquén; Miguel Hesayne, de Viedma y Jorge Novak, de Quilmes— había mantenido desde el golpe que dio paso al PRN. La cuestión de los desaparecidos hizo dar nuevos tumbos a la Iglesia que, en el documento "Camino de reconciliación" propuso sobre el espinoso tema "un diálogo convocante, en el que las partes involucradas conversen mutuamente según el concepto cristiano de reconciliación", y no dudó en avalar el documento final de la junta militar del 28 de abril de 1983, documento que suscitó reacciones de condena desde diversos ángulos e instituciones, incluido el Vaticano.³⁷

En lo que respecta a las pugnas intercastrenses, se conoce que en 1979 los generales Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Maradona, dirigentes del III Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba, intentaron desplazar al general Videla de la conducción del PRN, por considerarlo un elemento "tibio" e inclusive liberal.

Fracasado el *putsch*, las contradicciones dentro de las fuerzas armadas, si bien menos evidentes, no dejaron de producirse, sobre todo a mediados de 1981, cuando resultaron inocultables al menos dos fisuras: por un lado, la existente entre el entonces mandatario, general Eduardo Viola y el comandante en jefe del ejército, teniente general Leopoldo Galtieri y, por otro, la que enfrentaba al Ejército con la Armada, que ya para entonces criticaba la política económica y pedía acelerar la vuelta a un régimen civil, estableciendo para el efecto plazos y términos pertinentes.

Esta sordida lucha se condensó en la persona del almirante Emilio Massera, comandante en jefe de la Armada durante un tramo de la primera junta del PRN, quien en 1980 explicaba:

Quando la defensa de nuestros derechos soberanos es una declamación sin contenido; cuando tratamos de justificar acuerdos internacionales carentes de sentido; cuando no defendemos con vigor nuestras Malvinas y alguno las negocia ... Cuando en nombre de un

criterio pragmático se confunde el Estado con el mercado, la convivencia con la competencia, el bien común con el producto bruto, la nación con la empresa, y al hombre con un número ... cuando castramos nuestra Universidad y propiciamos el analfabetismo político ... cuando la soberbia nos hace olvidar a Dios, el problema es, definitiva y esencialmente, moral.³⁸

Al año siguiente, el gobierno clausuró el semanario *Cambio* propiedad de Massera; en tanto, la disputa Viola-Galtieri se resolvió en favor del segundo, quien lanzaría en abril de 1982 la intentona diversionista de las Malvinas, con los resultados ya conocidos y explicados en el capítulo III de este mismo trabajo.

Los desacuerdos en el seno de las fuerzas armadas se vieron acentuados después de la guerra con la Gran Bretaña: al general Galtieri se le juzgó y condenó a prisión por sus declaraciones sobre la que consideró negativa gestión del general Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las islas Malvinas; y numerosos militares como Luis Leoni Houssay, Francisco Manrique, Issac Francisco Rojas y Alberto Brunet, luego de concluida la aventura malvinense, si bien cuestionaron la actitud de Estados Unidos en el conflicto, en buena medida lo hicieron también con respecto a la estrategia de la misma junta militar.

Finalmente, el último presidente del PRN, Reynaldo Bignone, tuvo que ser consagrado contra viento y marea por el Ejército, pues tanto la Marina como la Fuerza Aérea se negaron a darle su aquiescencia, lo que demuestra hasta qué punto habfan crecido, hacia junio de 1982, las divergencias entre los distintos cuerpos de las fuerzas armadas.

3. CONSECUENCIAS

La suma de todos los elementos descritos condujo, a fines de 1981 y principios del año siguiente, a una inocultable situación de crisis en el manejo del país por parte del gobierno autoritario argentino. Las fuerzas armadas se vieron orilladas a buscar varios caminos para tratar de mantenerse en el poder y disimular el agotamiento que les producía gobernar casi exclusivamente con base en la coerción.

Intentaron, en primera instancia, erigir una fachada "democrática". Al no cumplir ésta sus objetivos, el régimen se lanzaría a la aventura de las Malvinas como un esfuerzo postrero para afianzar la dominación. Después vendría la cesión de gobierno a los civiles, con la que se daría fin a una de las etapas más innecesariamente violentas en la historia argentina.

El debilitamiento de la dictadura

Cuando los dirigentes del PRN constataron, en el segundo semestre de 1979, que el solo uso de la coerción no resultaba suficiente para mantener la hegemonía, lanzaron, el 27 de octubre de ese año, las "Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización de Nacional" cuyo contenido, además de ser retórico, anunciaba que la fase de "normalización" para regresar a un gobierno civil comenzaría en la segunda mitad de 1980.

Antes de esa fecha, sin embargo —el 6 de marzo de 1980— el régimen explicitaba la propuesta y proponía un diálogo entre él y un selecto grupo de "notables", con los cuales conversaría en tanto que ciudadanos relevantes, más no como representantes de diversas fuerzas políticas, sociales y económicas.

La presunta conciliación excluía del diálogo a los partidos políticos como tales, al igual que a "los corruptos y subversivos, así como también a quienes sustenten ideologías incompatibles con nuestro estilo de vida nacional".³⁹ Ya sabemos lo que en la práctica significaría todo esto.

Así las cosas, el dialoguista gubernamental sería el general Albano Harguindenguy, ministro del Interior, quien recibiría en sus oficinas a 60 personajes, a razón de dos cada semana. De ellos, sólo la cuarta parte tenía alguna relación con los partidos políticos tradicionales; el resto eran miembros de la casta militar, representantes de la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio y otras agrupaciones de empresarios, e intelectuales orgánicos del propio gobierno.

Visto en retrospectiva, un "diálogo" tan unilateralmente planeado y de ejecución tan vertical, no podía provocar serias repercusiones sociales; si a esto agregamos que para 1981 la ola de movilización de los sectores disruptivos frente al PRN continuaba tomando fuerza, entonces nos encontramos con que, como ya se ha anotado en este mismo texto, la cúpula estatal debía enfrentar los retos que se le planteaban mediante acciones contundentes.

En este sentido, la represión había dejado de ser eficaz, en la medida en que se enfatizaba que la subversión ya se había erradicado o, por lo menos, neutralizado; la crisis económica impedía cualquier tipo de salida "populista" que, por lo demás, era ajena a la entraña de régimen; en el terreno político quedaba la salida de ceder el gobierno a los civiles y restablecer un sistema representativo, pero los militares juzgaban que el expediente era arriesgado, amén de que consideraban no haber terminado de cumplir su misión "salvadora".

¿Qué hacer entonces? Quedaba, para restaurar una legitimidad y un consenso sumamente deteriorados, el recurso de la amenaza externa y la unidad nacional frente a otro país. La demanda histórica de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, según juzgaron los militares argentinos, era el hecho que proporcionaba las condiciones para emprender una intencionalidad que, de cristalizar, les aseguraría el usufructo del poder por muchos años más.

La guerra de las Malvinas

Todas las investigaciones sobre el tema parecen coincidir en que el "Operativo Azul" o "Rosario" (nombres con los que se conoció al desembarco de las fuerzas armadas de Argentina en el archipiélago austral del 2 de abril de 1982 y que asimismo estaban provistos de fuertes connotaciones religiosas) ya estaba planeado, por lo menos a grandes líneas, cuando Galtieri dio el golpe de timón al general Eduardo Viola a finales de 1981.

En efecto, luego de concluida la aventura, el director de la revista *Estrategia* —foro destacado del pensamiento geopolítico y estratégico de los militares argentinos—, general Gugliamelli, reconoció que la decisión fue tomada en enero de 1982, mismo mes en el que el embajador argentino en Londres, Carlos Ortiz de Rosas, fue llamado para consultas a Buenos Aires.

Asimismo, el 24 de ese mes, el influyente periodista del diario conservador *La Prensa*, Jesús Iglesias Rouco, vislumbró que la posibilidad de que las islas fueran recuperadas mediante una acción militar era virtualmente cierta; por su parte, el número del semanario *Latin American Weekly Report* correspondiente al 29 de enero, señalaba que Argentina habría presentado un ultimátum a la Gran Bretaña en donde se pedía un calendario para fijar el retorno de la soberanía insular a ese país y, en caso de que los ingleses rechazaran las negociaciones, se procedería a utilizar el expediente bélico.⁴⁰

Más tarde el general Galtieri, artífice de la concepción del operativo, reconoció que éste se ordenó en enero de 1982, "dentro del mayor secreto, sin conocerse con precisión la fecha a ponerse en ejecución..."⁴¹

Efectuado el desembarco, el diversionismo de los uniformados argentinos logró con creces, aunque sólo de manera temporal, sus objetivos. El pueblo en general puso un paréntesis de olvido a la represión y la política económica del PRN, y el 10 de abril cerca de 300 mil personas se manifestaban por las calles de Buenos Aires; el reclamo por la soberanía insular tendía a confundirse con el apoyo al régimen.

No menos impulsiva fue la reacción de la gran mayoría de los partidos políticos y sindicatos: los integrantes de la Multipartidaria, el Partido Comunista Argentino y la CGT apoyaron la iniciativa castrense, a las vez que suspendieron sus actividades políticas; incluso líderes de estas agrupaciones como Bittel (PJ), Contín (UCR), Ubaldini (CGT) y otros, asistieron a la toma de posesión de Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las Islas.

Otros grupos, entre los que destacaron las Madres de la Plaza de Mayo y los organismos defensores de derechos humanos —notablemente el premio-Nobel Pérez Esquivel— externaron su repudio al régimen y a la guerra.

Sin embargo el efecto anestésico de ésta resultaría a fin de cuentas, insistimos, limitado. Tras la capitulación argentina el 15 de junio de 1982, las críticas frente a los militares se redoblaron, reprochándoseles con toda razón que no es lo mismo librar una "guerra sucia" contra civiles desarmados e inermes que combatir con un ejército bien pertrechado y mejor organizado; que sus diseños de política exterior habían partido de presupuestos demasiado irreales y optimistas; que la unidad de clases y sectores de la sociedad argentina no podía lograrse a largo plazo por decreto y que, a la ineptitud militar para dirigir política y económicamente al país, se agregaba su estulicia en la materia que se les había encomendado desde la función del Estado, esto es, hacer la guerra (no pensaban que Inglaterra libraría la batalla y creían firmemente que los Estados Unidos, en pago de su magnífica relación con Galtieri y sus servicios de adiestramiento a los *contras* en Centroamérica, invocarían al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947 para ayudar a los militares argentinos).⁴²

La convicción social de que tal vez un gobierno civil resultara mejor que el experimento fracasado del PRN creció con suma rapidez. Las fuerzas armadas, aunque con reticencias, así lo percibieron.

La transición a un gobierno civil

Para ceder el turno a los civiles, los altos dirigentes del régimen militar —no ajenos a disputas intergrupales de alta intensidad— diseñaron una retirada en orden con el menor costo posible para ellos.

En previsión de un posible juicio por sus sistemáticas violaciones a las garantías individuales, se aprestaron a promulgar el 29 de abril de 1983, durante la transición encabezada por el general Bignone, la ley autoabsolutoria ya comentada en el capítulo III de este trabajo y que, *grasso modo*, racionaliza las acciones del terrorismo de Estado al considerarlas como "actos de servicio".

No está por demás subrayar que el gobierno militar heredaría al civil una situación difícil, por no decir explosiva, reflejada en una crisis de gobernabilidad, una dura carga representada por el problema de los desaparecidos y una economía en bancarrota que debía hacer frente a una deuda externa mayor a los 50 mil millones de dólares.

El ganador en los comicios, Raúl Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (7 millones 659 mil 530 votos en su favor, en tanto que el derrotado candidato del peronismo, Italo Argentino Lúder, obtenía 5 millones 936 mil 556 sufragios) era la figura política que habría de heredar, a partir del 10 de diciembre de 1983, esta abrumadora carga.

NOTAS CAPITULO V

¹ Guillermo O'Donnell, "El estado autoritario en el Cono Sur de América", en *Revista de la Universidad de México*, vol. XXXVIII, nueva época, núm. 12, abril de 1982, p. 1.

² Desde luego, el concepto que de "subversión" poseen los mandos militares resulta sumamente difuso y en ocasiones involuntariamente humorístico. "La subversión —dice el coronel Carlos A. Landabur—, es el ataque organizado al orden natural que Dios ha creado: el sol, las estrellas, las plantas, el hombre. Todo aquello que va en contra de ese orden creado por Dios es subversión. La subversión también puede estar en la música y en el arte. La subversión es, en resumen, sustituir la verdad por la mentira, el bien por el mal, a Dios por el demonio". Cit. por Gregorio Selser, "Desorientados, han perdido Occidente/I", en *Página uno, unomásuno*, 27 de junio de 1982, p. 9.

³ Osiris Villegas, "La seguridad y su implicancia en la política y estrategia nacional y en las políticas y estrategias sectoriales", en Antonio Cavalla (comp.), *Geopolítica y seguridad nacional en América*, México, UNAM, 1979, p. 316.

⁴ Ponencia del general Roberto E. Viola en la Universidad de Belgrano, 25 de octubre de 1979, cit. por G. Selser, "¿Fue un discurso o un plan el que Viola llevó a Bogotá?" en *El Día*, México, 25 de agosto de 1979.

⁵ Véase la nota de Pedro Pablo Camargo en *Excelsior*, México, 12 de noviembre de 1979, p. 3.

⁶ Cit. por G. Selser, "Videla: primer paso en la 'argentización' de América", en *El Día*, 8 de agosto de 1980. Sobre el asunto boliviano, Videla abundó: "... entre dos opciones, la formalmente correcta —desemboque eleccionario— y la formal incorrecta —pronunciamiento militar—, visto el grado de riesgo que tenían una y otra para el gobierno argentino, hemos visto con más simpatía esta segunda alternativa".

⁷ Sobre la represión militar a los cuadros sindicales y los gremios pueden consultarse, entre otras, las siguientes obras: Francisco Delich, "Después del diluvio, la clase obrera", en A. Rouquié (comp.), *Argentina hoy*, México, Siglo XXI, 1982, p. 142; Héctor Palomino, "Argentina: dilemas y perspectivas del movimiento sindical", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 83, mayo-junio de 1986, p. 90, y Colectivo argentino de CIDAMO, "Argentina: economía y política en los años setenta", en *Cuadernos Políticos*, México, núm. 27, ene-mar 1981, pp. 43-48.

⁸ Véase F. Delich, op. cit., p. 145.

⁹ Cfr. el Informe de la CONADEP, resumido y publicado bajo el título de *Nunca más*, EUDEBA, Buenos Aires, 1984, 450 pp.

¹⁰ Cit. por G. Selser, "Argentina: las demasías verbales de un funcionario y los conflictos obreros", en *El Día*, 29 de octubre de 1979.

¹¹ Véase Esteban J.A. Righi, "Elementos de análisis para la situación argentina", en ILDIS, *El control político en el Cono Sur*, México, Siglo XXI, 1980, p. 199.

¹² Sobre el caso Timmerman, véase *Proceso*, México, 2 de abril de 1979, p. 46 y *Límite Sur*, México, año 1, núm. 3, pp. 28-32.

- ¹³ Un pormenorizado recuento de las agresiones militares contra las diversas expresiones de la cultura se encuentra en Julio Cortázar *et al*, "Argentina: una cultura asesinada", en *Sábado*, suplemento cultural de *unomásuno*, México, 6 de junio de 1981, pp. 6-10.
- ¹⁴ Cfr. Límite Sur, *op.cit.*, p.30.
- ¹⁵ J. Cortázar *et. al*, *op. cit.*, p. 9.
- ¹⁶ *Idem*.
- ¹⁷ G. Selser, "Argentina: ¿rige lo del genocidio cultural?", en *El Día*, 30 de julio de 1980.
- ¹⁸ Cfr. G. Selser, "Libros prohibidos y quemados, escritores exiliados o muertos", en *El Día*, 21 de marzo de 1984, p.16 y J.Cortázar *et al*, *op.cit.*, pp. 7-8.
- ¹⁹ Cfr. *La Nación*, Buenos Aires, 23 de octubre de 1981, p. 8 y *Clarín*, Buenos Aires 23 de octubre de 1981, p.24.
- ²⁰ Cfr. G. Selser, "Argentina: crecen los índices de deserción escolar", en *El Día*, 19 de diciembre de 1980, p.14.
- ²¹ Véase *Clarín*, 13 de febrero de 1980.
- ²² Informaciones *in extenso* sobre la estructuración del aparato represivo montado por los militares argentinos se encuentran en el testimonio del ex oficial de policía Rodolfo Peregrino Fernández publicado bajo el título "Historia íntima de la represión en Argentina" en *El Día*, 4 a 7 de mayo de 1983.
- ²³ Cfr. *Proceso*, 22 de mayo de 1978, p. 9.
- ²⁴ G. O' Donnell, "Argentina: la cosecha del miedo", en *Alternativas*, Santiago de Chile, sep-dic de 1983, p.9.
- ²⁵ CONADEP, *op. cit.*.
- ²⁶ Incluso algunos analistas ubican la fecha de la destrucción de la guerrilla argentina en diciembre de 1975, cuando los grupos armados que intentaron infructuosamente el asalto a un cuartel de policía quedaron muy diezmados al perder a 300 combatientes.
- ²⁷ CONADEP, *op. cit.*
- ²⁸ Cit. en Flavio Tavares, "Genocidas, Strassera a ex juntistas", en *Excélsior*, México, 13 de septiembre de 1985. Véase también Miguel Bonasso, "El juicio del siglo ya es irreversible", en *Proceso*, 23 de septiembre de 1985, pp. 44-46.
- ²⁹ Cfr. la entrevista concedida a Carmen Lira por el fiscal Strassera en *La Jornada*, México, 7, 8 y 9 de abril de 1987.
- ³⁰ G. O'Donnell, en "Argentina ..." *op. cit.*, p.7 dice al respecto: "Vimos y vivimos aterrados... el deleite con que en diversos espacios sociales (escuela, familia, la calle misma) muchos desplegaban sus tendencias más despóticas. Ya no había ni un cuadro institucional ni confrontaciones con otras orientaciones que detuvieran a los lobos -y a éstos los vimos cómo *kapos* de los campos de concentración, aún más violentos y autoritarios que lo que un régimen inusitadamente violento y autoritario demandaba".
- ³¹ Nada desdeñables fueron las consecuencias psicológicas de la "guerra sucia" sobre el grueso de la publicación argentina. En 1981 Silvia Fesquet comentaba: "Más del

20 por ciento de la población (tal vez el 25 por ciento) está en tratamiento con psicoanalistas ... o toman psicofármacos por trastornos de orden emocional", (apud Enrique Guinsberg. "Salud mental, paz y terrorismo de Estado", en *Nueva Sociedad*, núm. 89, mayo-junio de 1987, pp. 187-188). Este estado de angustia, sumado a la crisis económica, derivó en grandes problemas sociales; baste mencionar al respecto los datos proporcionados por el doctor Aldo Neri, ministro de Salud Pública del gobierno civil que asumió funciones en 1983, según los cuales el alcoholismo habría alcanzado al 5% de los mayores de 15 años, así como afectado potencialmente a otro 10%, y los suicidios habían llegado a un promedio de 180 diarios.

- 32 Véase R. Picchia, "Argentina: promulgada la feroz ley sobre los ausentes para siempre", en *El Día*, México, 17 de septiembre de 1979.
- 33 Para un análisis pormenorizado de las acciones de protesta y las distintas posiciones en el sindicalismo argentino de la época, véanse: H. Palomino, *op. cit.*, pp. 98-100; y *Proceso*, 30 de abril de 1979, pp. 45-46.
- 34 Véase G. Selser "Intimidación militar a un presidente de una organización empresarial", en *El Día*, 6 de noviembre de 1980, p.14.
- 35 Cit. por G. Selser, "Artistas, escritores, intelectuales, coinciden en denunciar a la censura", en *El Día*, México, 13 de enero de 1982, p.16.
- 36 Cit. por G. Selser, "Argentina: en extenso documento, la Iglesia habla de reconciliación y de crisis de autoridad moral", en *El Día*, México 19 de julio de 1981 p.14.
- 37 Véase Irene Selser, "Argentina: tumbas NN, para una década sin nombre", en *Página uno* (suplemento político de *unomásuno*) 26 de diciembre de 1982, p.6 y también Emilio Fermín Mignone, "Iglesia y dictadura: la experiencia argentina", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 82, mar-abr, 1986 p.128.
- 38 Cit. por G. Selser, "Argentina: Las fuerzas armadas tienen un compromiso por cien años o más", en *El Día*, México, 18 de junio de 1980.
- 39 Jorge Videla, cit. por G. Selser, "Argentina: un diálogo que será monólogo", en *El Día*, México, 14 de marzo de 1980.
- 40 Cfr. Guillermo Makin, "Argentine approaches to the Falkland/Malvinas: was the resort to violence foreseeable?" en *International Affairs*, Londres, vol. 59, núm. 3, verano de 1983 pp. 399-401.
- 41 Cfr. Las declaraciones de Galtieri a *Clarín*, suplemento especial conmemorativo de la toma de las Malvinas, 2 de abril de 1983.
- 42 Véase Susan Kaufman Purcell, "War and Debt in South America" en *Foreign Affairs*, Nueva York, vol. 61 núm. 3, 1982, pp. 663-665; para un detallado estudio de los pormenores propiamente militares del conflicto malvinense véase Lawrence Freedman, "The War of the Falkland Islands, 1982", en *Foreign Affairs*, vol.60, núm. 3, pp. 196-210.

CONSIDERACIONES FINALES

A partir de la elección de un marco teórico que inscribe la experiencia autoritaria de la Argentina entre 1976 y 1983 en la categoría de "fascismo dependiente", es que se ha desarrollado la presente tesis. En efecto, el nuevo militarismo latinoamericano que se plasma en regímenes como los de Uruguay, Argentina y Chile en la segunda mitad de los setenta y principios de los ochenta, y Brasil desde 1964, difiere esencialmente de lo que aquí hemos llamado, siguiendo a Rouquié, "pretorianismo arqueopolítico" que América Latina padeció con particular intensidad entre su independencia de la metrópoli española en el siglo pasado y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939.

Amén de que la composición de las clases y fracciones de clase que detentan la hegemonía es distinta en ambos tipos de sistema político, el fascismo dependiente va más allá, por lo mismo, de los moldes caudillistas que caracterizaron a las *banana republics* de América Central y el Caribe, así como a las tiranías mesiánicas de Sudamérica en décadas pasadas.

Con respecto a los fascismos clásicos, se ha dejado asentado que el neomilitarismo latinoamericano guarda muchas semejanzas y diferencias. Sin embargo, se insiste en la pertinencia de usar la tipología de "fascistas dependientes" para los autoritarismos de referencia, ya que se les considera como dictaduras en que los sectores grancapitalistas nacionales y extranjeros más reaccionarios son quienes ejercen el poder por la vía de la violencia contra el resto de la sociedad—en particular sobre la clase trabajadora—y quieren impedir una revolución.

El marco histórico, por su parte, ha intentado describir la entrada estelar de Argentina en el sistema capitalista internacional como exportador de mercancías de origen agropecuario. Antes y durante ese proceso, el país presenció la creación y fortalecimiento de una élite oligárquica sumamente poderosa, la cual, al irrumpir el siglo XX debió ceder de manera progresiva mayores cuotas de poder político—no así económico—ante la insurgencia de la Unión Cívica Radical, conglomerado de fuerzas que nucleaba en torno suyo a numerosos grupos marginados de alguna forma de los beneficios del auge agroexportador.

Los radicales gobernarían a partir de 1916, pero la crisis económica internacional desatada en 1929, aunada al desgaste de la administración radical y a la renovada beligerancia de la derecha argentina, condujeron, el 16 de septiembre de 1930 a un cuartelazo que, aparte de romper un larguísimo periodo de estabilidad institucional en el país, resultaría a la postre el primer paso de una serie de intromisiones militares en el Estado argentino. Esas intervenciones se prolongan hasta nuestros días. Así, los uniformados regresarían al poder por la fuerza de las armas en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, en muchos casos con el consenso implícito o manifiesto de ciertos partidos políticos y grupos de presión.

Por otra parte, al observar el devenir argentino de por lo menos los últimos 80 años, es posible detectar un evidente declive en ese país que, teniendo una serie de elementos físicos y humanos para ser una potencia (como de hecho creyó serlo entre 1880 y 1929), se ha convertido en un espacio asolado por el estancamiento productivo, la declinación económica, la fragilidad política y la crisis social permanente que, retroalimentándose en el comportamiento inmaduro de los diversos grupos y sectores políticos y sociales, así como en la cultura política dominante, han provocado la "tercermundización" de un pueblo que muchas veces resaltaba más sus rasgos europeos que su pertenencia a América Latina.

Tras ese paréntesis dedicado a la investigación de las causas de la decadencia platense, nos hemos abocado en este texto a la tarea de describir y analizar el golpe de Estado de 1976 en lo que respecta a sus motivaciones, supuestos y etapas. Dentro de éstas últimas hemos distinguido cuatro: la primera de ellas corresponde a la instauración del nuevo gobierno, y se caracteriza por una desmedida recurrencia a la represión -política y económica- destinada a crear terror y sumisión y facilitar de ese modo la instrumentación de un programa económico eminentemente concentrador y excluyente; la segunda etapa es la breve gestión de Roberto E. Viola, en donde comienzan a evidenciarse ciertas fisuras dentro del elenco militar, mismas que terminan por precipitar el golpe palaciego que Leopoldo F. Galtieri y sus "centuriones" realizan con éxito en diciembre de 1981; la tercera etapa comienza precisamente en esa fecha y va a caracterizarse por el intento de retomar el proyecto original (que los golpistas sentían traicionado por Viola), pero con el aderezo de una aventura diversionista que, de cuajar, haría recuperar al "Proceso de Reorganización Nacional" amplias cuotas de consenso; fracasada la toma de las Malvinas, la ola de movilización popular que ya se había manifestado previamente, retorna con particular intensidad y desemboca en la transición hacia un gobierno civil, administrada por el general Bignone.

Más adelante se ha realizado un breve análisis de la política económica aplicada por los cuadros civiles de la dictadura militar, distinguiendo sus fases y origen último, así como sus objetivos e instrumentos, basados, la mayoría de ellos, en una versión

criolla del ideario neoliberal del profesor Milton Friedman y su Escuela de Chicago. La notable incapacidad de esa doctrina y sus defensores para solucionar los problemas económicos latinoamericanos, junto con la pésima aplicación de que fue objeto en la Argentina, terminaron por mostrarse iatrogénicos: al querer solucionar el problema, no hicieron más que agravarlo. De este modo se agudizó el estancamiento productivo, la inflación no pudo controlarse, se redujeron los gastos sociales, el ingreso se redistribuyó en detrimento de los sectores asalariados, y el sector externo, después de mostrar ciertas cifras favorables, terminó por incurrir en severos desequilibrios de entre los cuales la deuda externa resulta el más representativo, pero no el único. Los tecnócratas argentinos no sólo no lograron establecer una práctica económica situada en los parámetros mínimos de crecimiento, sino también fueron incapaces de poner en práctica con éxito la estrategia económica diseñada de acuerdo con sus propias y arraigadas concepciones.

Finalmente, se analizó el desarrollo de la dictadura de 1976-1983 en el terreno político propiamente tal, es decir, en los supuestos que las fuerzas armadas (sobre todo la Doctrina de la Seguridad Nacional y sus rachas expansionistas plasmadas en la Doctrina Viola) esgriman al asaltar el poder; el desarrollo de la experiencia autoritaria tanto desde el punto de vista de las clases y estamentos hegemónicos, como desde el de las fuerzas populares; y las consecuencias de la interacción de ambos factores, que condujo finalmente al desgaste militar, la profundización de la crisis política, y la cesión del gobierno a los civiles en 1983.

En síntesis, la dictadura militar objeto de nuestro estudio profundizó y llevó hasta extremos alucinantes e inverosímiles (el terrorismo de Estado y la no menos violenta agresión a la economía) tendencias retardatarias profundamente inscritas en la cultura política y la historia argentina. Este país, tras sufrir diversas intervenciones militares desde 1930; parece debatirse en una cada vez más seria crisis no sólo de carácter político, sino también ideológico, económico, social y aún axiológico.

"Argentina es una enfermedad, no un país", dijo hace algunos años el científico Jorge Sábato, y duele decir, como latinoamericano, que tan lapidario aserto no deja de ser verdad. Pero los pueblos se mueven y las tendencias entrópicas no pueden prolongarse *ad infinitum*. Las espontáneas y masivas movilizaciones populares que en abril de 1987 y diciembre de 1988 realizó el pueblo argentino cuando sendos grupos de oficiales se amotinaron, abren ciertas esperanzas de que, ahora sí, y tras amargas experiencias como las ya descritas, la sociedad civil esté lista para quitar definitivamente a José de San Martín de manos de sus militares, como ha pedido Gregorio Selser. Ello requiere, en primer lugar, una revolución copernicana que transforme los hábitos negativos de los partidos políticos y los grupos de presión y, en segundo término, impulsar una transformación económica que modifique la correlación de fuerzas en detrimento de una oligarquía que, ensoñada en sus fantasmas

aristocratizantes, se ha mostrado incapaz de guiar al país por el camino del respeto a la vida, la estabilidad política y la prosperidad económica compartida.

Queda como incógnita para el futuro la manera en que el pueblo argentino habrá de neutralizar a sus fuerzas armadas y restarle poder a su vetusta oligarquía. Son, sin duda, algunos de los grandes retos para el futuro.

BIBLIOGRAFIA BASICA

1. Allub, Leopoldo. *Orígenes del autoritarismo en América Latina*, México, Editorial Katún, 1983, 268 pp.
2. Botzman, Mirta. "Argentina: autoritarismo, 'librecambio' y crisis en el proceso actual", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, núm. 2, marzo 1979, pp. 127-154.
3. Briones, Alvaro. *Economía y política del fascismo dependiente*, México, Siglo XXI, 1978, 326 pp.
4. Cavalla Rojas, Antonio. *Geopolítica y seguridad nacional en América*, México, UNAM, 1979, 475 pp.
5. Ciria, Alberto. *Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-46)*, Buenos Aires, Jorge Alvarez Editor, 1963, 337 pp.
6. Collier, David (comp). *El nuevo autoritarismo en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, 451 pp.
7. Escobar, Justo y Velázquez, Sebastián. *Examen de la violencia argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, 186 pp.
8. Ferrer, Aldo. "La economía argentina al comenzar la década de 1980", en *El Trimestre Económico*, México, FCE, vol XLVIII (4), núm.192, oct-dic 1981, pp. 809-851.
9. _____. "La reforma financiera: de la cesación de pagos a la Argentina viable", en *Comercio Exterior*, México, vol. 33, núm. 11, noviembre de 1983, pp. 1036-1044.
10. Garretón, Manuel Antonio. "Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur", en *Alternativas*, Santiago de Chile, CERC, núm.2, ene-abr 1984, pp. 5-23.
11. Gaspar, Gabriel (comp) *La militarización del Estado latinoamericano. (Algunas interpretaciones)*, México, UAM-Iztapalapa, s/f, 234 pp.
12. ILDIS. *El control político en el Cono Sur*, México, Siglo XXI, 1980, 302 pp.
13. Kaplan, Marcos. "50 años de historia argentina (1925-1975): el laberinto de la frustración", en González Casanova, Pablo (coord), *América Latina: historia de medio siglo*, México, Siglo XXI, 1985, pp. 1-73.
14. Moneta, Carlos Juan. "Fuerzas Armadas y gobierno constitucional después de las Malvinas: hacia una nueva relación civil-militar", en *Foro Internacional*, México, El Colegio de México, vol. XXVI, no. 102, oct-dic 1985, pp. 190-213.
15. O'Donnell, Guillermo. "El Estado autoritario en el Cono Sur de América Latina", en *Revista de la Universidad de México*, México, Vol. XXXVIII, nueva época, núm. 12, abril de 1982, pp. 17-27.
16. Potash, Robert A. *El ejército y la política en la Argentina, 1928-1945, de Yrigoyen a Perón*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1971, 441 pp.

17. Rivera Echenique, Silvia. *Militarismo en Argentina: golpe de Estado de junio de 1966*, México, FCP y S-UNAM, 1976, 123 pp.
18. Rouquié, Alain. *El Estado militar en América Latina*, México, Siglo XXI, 1984, 433 pp.
19. _____. *Poder militar y sociedad política en Argentina*, Buenos Aires, Emecé Editores, 1981, 2 vols.
20. Selser, Gregorio. "La guerra de las Malvinas: censura, autocensura y desinformación", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 61, jul-ago 1982, pp. 95-102.

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL

1. Abalo, Carlos, "Argentina 1976-1981. Objetivos y resultados de la política económica", en *Comercio Exterior*, México, vol. 31, núms. 6 y 9, junio y septiembre de 1981, pp. 635-648 y 1015-1017.
2. _____. "Aldo Ferrer y el dilema económico de Argentina", en *Comercio Exterior*, vol. 28, núm. 8, agosto de 1978, pp. 990-995.
3. Aceituno, Gerardo, et al. "Estados Unidos y los estados de seguridad en el Cono Sur", en Cavalla, Antonio, *Geopolítica y Seguridad Nacional en América*, México, UNAM, 1979, pp. 427-449.
4. Alimonda, Héctor. "Paz y administración 'Orden e progreso': notas para un estudio comparativo de los estados brasileños y argentino", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, IIS-UNAM, vol. 44, núm. 4, oct-dic 1980, pp. 1105-1144.
5. Andersen, Martin "Dateline Argentina: Hello Democracy" en *Foreign Policy*, Washington. D.C. núm. 55, verano 1984, pp. 154-172.
6. _____. "Kissinger and the Dirty War", en *The Nation*, Nueva York, vol. 245, núm. 14, 31 de octubre de 1987, pp. 477-479.
7. Bataillon, Gilles. "Sudamérica: del militarismo a la democracia", en *Vuelta*, México, vol. 8, núm. 92, julio 1984, pp. 22-28.
8. Beccaria, Luis y Orsatti, Alvaro. "Argentina 1970-1984: la dinámica del empleo en un periodo de inestabilidad económica y social", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, núm. 13, 1er. semestre 1985, pp. 21-46.
9. Borón, Atilio. "Argentina: el fin de una época", en *Le monde diplomatique en español*, México, año 5, núm. 59, noviembre 1983, pp. 7-8.
10. Brasseul, Jaques. "El resurgimiento del liberalismo económico en América Latina (1973-1981)", en Méndez Villarreal, Sofía (Comp.), *La crisis internacional y la América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica-CIDE, 1984, pp. 178-212.

11. Briones, Alvaro. *Ideología del fascismo dependiente*, México, Edicol, 1978, 206 pp.
12. CEPAL. Informes anuales del Secretario General correspondientes a los años 1976-1983, publicados en diversos ejemplares de *Comercio Exterior* entre 1977 y 1985.
13. CIDAMO. "Argentina: economía y política en los años setenta", en *Cuadernos Políticos*, México, ERA, núm. 27, ene-mar 1981, pp. 35-48.
14. Ciria, Alberto. "Las dos Argentinas", en *Revista Occidental*, Tijuana, B.C., año 1, sep-dic 1983, pp. 65-76.
15. Cueva, Agustín "¿Cuál democracia en América del Sur?" en *Nexos*, México, año VIII, vol. 8, núm. 89, mayo de 1985, pp. 29-32.
16. Dabat, Alejandro y Lorenzano, Luis. *Conflicto malvinense y crisis nacional*, México, Libros de Teoría y Política, 1982, 286 pp.
17. De Pablo, Juan Carlos. "El enfoque monetario de la balanza de pagos en la Argentina: análisis del programa del 20 de diciembre de 1978", en *El Trimestre Económico*, México, FCE, vol. L(2), núm. 198, abr-jun 1983, pp. 641-669.
18. De Riz, Liliana. "Argentina: ni democracia estable ni régimen militar sólido", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, IIS-UNAM, vol. 44, núm. 4, oct-dic 1982, pp. 1203-1224.
19. Díaz-Alejandro, Carlos F. *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*, New Haven, Yale University Press, 1970, 420 pp.
20. _____. "¿Economía abierta y política cerrada?", en *El Trimestre Económico*, vol. L (1), no. 197, ene-mar, 1983.
21. Eliashev, José Ricardo. "Las ruedas del engranaje están gastadas. Sindicalismo y clase obrera en Argentina: un fenómeno latinoamericano", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 26, sep-oct 1976, pp. 103-116.
22. Ferrer, Aldo. "La economía argentina 1976-1979", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, núm. 5, 2o. semestre 1980, pp. 171-192.
23. _____. "El monetarismo en Argentina y Chile", en *Comercio Exterior*, México, vol. 31, núms. 1 y 2, enero y febrero de 1981, pp. 3-13 y 176-192.
24. _____. "La deuda externa: el caso argentino", en *Comercio Exterior*, México, vol. 32, núm. 12, diciembre de 1982, pp. 1338-1345.
25. _____. "La reforma financiera: de la cesación de pagos a la Argentina viable", en *Comercio Exterior*, México, vol. 33, núm. 11, noviembre 1983, pp. 1036-1044.
26. García, Pfo. "Notas sobre formas de Estado y regímenes de militares en América Latina", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, IIS-UNAM, vol. 43, núm. 2, abr-jun 1981, pp. 545-553.
27. Geller, Lucio. "Argentina: La ofensiva del 76", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, núm. 3, septiembre 1979, pp. 147-170.

28. Giudici, Ernesto. "El problema de la izquierda en Argentina", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 61, jul-ago 1982, pp. 87-94.
29. Glucksman, André. *El viejo y el nuevo fascismo*. México, ERA, 1975, 122 pp.
30. Godio, Julio. "Argentina: acción sindical y estrategia socialista", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 43, jul-ago 1979, pp. 38-50.
31. González Arrili, Bernardo. *Vida de Lisandro de la Torre*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora 1962, 193 pp.
32. González, Oscar. "Argentina: el día de los cuatro presidentes", en *Límite Sur*, México, año 1, núm. 6, enero 1982, p.6.
33. Guevara de la Serna, Roberto. "La resistencia popular hace fracasar a los monopolios", en *Territorios*, UAM-Xochimilco, México, núm. 10 sep-oct 1981, pp. 3-6.
34. Guinsberg, Enrique. "Salud mental, paz y terrorismo de Estado", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 89, mayo-junio de 1987, pp. 180-190.
35. Huneeus, Carlos. La democracia en Argentina: comentarios desde el otro lado de Los Andes", en *Alternativas*, Santiago, CERC, núm. 2, ene-abr 1984, pp. 145-158.
36. Ikonikoff, Moisés. "La industrialización y el modelo de desarrollo de la Argentina", en *El Trimestre Económico*, México, FCE, vol. XLVII (1), núm. 185, ene-mar 1980, pp. 159-192.
37. Insulza, José Miguel et al "La democracia en América Latina", en *Nexos*, México, Año VIII, vol. 8, marzo 1985, núm. 87, pp. 21-36.
38. Kaufman Purcell, Susan. "War and Debt in South America", en *Foreign Affairs, America and the World*, 1982, New York, CFR, vol. 61, núm. 3, pp. 660-674.
39. Landi, Oscar. "Conjeturas políticas sobre la Argentina post-Malvinas", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, IIS-UNAM, vol. 44, oct-dic 1982, pp. 1225-1248.
40. LASA. *La represión en Argentina, 1973-1974, documentos*. México, FCPS-UNAM, 1978, 227 pp.
41. Lechner, Norbert. "De la revolución a la democracia. El debate intelectual en América del Sur", en *Opciones*, Santiago, CERC, núm. 6, may-ago 1985, pp. 57-72.
42. Macchling, Charles. "The Argentine pariah" en *Foreign Policy*, Washington, D.C., núm. 45, invierno 1981-1982, pp. 69-83.
43. Makin, Guillermo. "Argentine approaches to the Falkland/Malvinas: was the resort to violence foreseeable?", en *International Affairs*, Londres, Royal Institute of International Affairs, vol. 59, núm 3, verano 1983, pp. 391-403. ...
44. Marín, Juan Carlos. "La guerra civil en Argentina", en *Cuadernos Políticos*, México, ERA, núm. 22, oct-dic 1979, pp. 46-74.

45. _____. "La democracia, esa superstición y los hechos armados, Argentina, 1973-1976", México, CELA-UNAM, *Avances de investigación*, núm. 42, nov. 1979, 101 pp.
46. Méndez Villareal, Soffa, (comp.), *La crisis internacional y la América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, 513 pp.
47. Mignone, Emilio Fermín. "Iglesia y dictadura: la experiencia argentina", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 82, mar-abr 1986, pp. 121-128.
48. Moreno, Oscar. "Acerca del peronismo", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 36, may-jun 1978, pp. 105-116.
49. Movimiento Peronista Montonero, Dirección Nacional, "Bases para la alianza constituyente de la Nueva Argentina", en *Vencer*, México, núm. 12, ene-feb 1982, 96 pp.
50. O'Donnell, Guillermo. "Argentina: la cosecha del miedo", en *Alternativas*, Santiago, CERC, núm. 1, sep-dic 1983, pp. 5-14.
51. _____. "El Estado autoritario en el Cono Sur de América Latina", en: *Revista de la Universidad de México*, México, vol. XXXVIII, Nueva Epoca, núm. 12, abril 1982, pp. 17-27.
52. Palomino, Héctor. "Efectos políticos y sociales de los cambios en el mercado de trabajo en Argentina (1950-1983)", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, núm. 13, 1er. semestre 1985, pp. 47-62.
53. _____. "Argentina: dilemas y perspectivas del movimiento sindical", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 83, may-jun 1986, pp. 89-102.
54. Quijano, Carlos; "Argentina, la gran frustración", en *Cuadernos de Marcha*, México, CEUAL, segunda época, año V, núms. 30-31, dic 1984-ene 1985, pp. 95-127.
55. Rama, Carlos M. "Elementos para una sociología del totalitarismo", en *Deslinde*, México, UNAM, núm. 80, agosto 1976, 19 pp.
56. Rímez, Marc. "Las experiencias de apertura externa y desprotección industrial en el Cono Sur", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, semestre núm. 2, marzo 1979, pp. 103-124.
57. Rouquié, Alain (comp.) *Argentina, hoy*, México, Siglo XXI, 279 pp.
58. _____. "Argentina: the departure of the military-end of a political cycle or just another episode?", en *International Affairs*, Londres, Royal Institute of International Affairs, vol. 59, núm 4, otoño 1983, pp. 575-586.
59. Sábato, Ernesto. *Nunca más, Informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP)*, Buenos Aires, Eudeba, 1985, 490 pp.
60. Salazar Valiente, Mario. "Peronismo, proceso político argentino: una interrogante", en *Deslinde*, México, UNAM, núm. 52, abril 1974, 35 pp.

61. Selser, Gregorio. "El Pentágono impone las reglas del juego", en *Nueva Política*, México, CLAEP, vol. II, núms. 4-5, abr-sep 1977, pp. 293-316.
62. _____. "Rendición, derrota y ruina; pero siguen en el poder", en *Cuadernos de Marcha*, México, CEUAL, segunda época, año III, núm. 17-18, ene-abr 1982, pp. 47-60.
63. Schaposnik, Eduardo Carlos, y Vacchino, Juan Mario. "Argentina: ¿fracaso de un ministro o de un sistema?", en *Comercio Exterior*, México, vol. 32, núm. 1, enero 1982, pp. 2-13.
64. Schwarzer, Jorge. "Empresas públicas y desarrollo industrial en la Argentina" en *Economía de América Latina*, México, CIDE, semestre núm. 3, septiembre 1979, pp. 45-68.
65. _____. "Argentina 1976-1981: el endeudamiento externo como pivote de la especulación financiera", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, núm. 10, 1er. semestre 1983, pp. 53-78.
66. _____. "La perspectiva del deudor" en *David y Goliath*, CLACSO, Buenos Aires, año VI, núm 47, agosto de 1985, pp. 37-46.
67. _____. "Experiencias fracasadas de crecimiento. El caso argentino", en: *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 79, sep-oct 1985, pp. 48-66.
68. Tapia V., Jorge. "Neo militarismo y fascismo", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 50, sep-oct 1980, pp. 156-174.
69. Trías, Vivian. "Getulio Vargas, Juan Domingo Perón y Battle Berres-Herrera -tres rostros del populismo-", en: *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 34, ene-feb 1978, pp. 28-39.
70. Turner, Frederick C. "La élite empresarial y la terrateniente de Argentina: ¿coincidencias o divergencias de intereses?", en *América Latina*, Moscú, Instituto de América Latina, núm. 6 (42), 1981, pp. 41-53.
71. Vallier, Ivan A., y Vallier, Vivian. "América del Sur", en *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, Madrid, Aguilar, 1974, pp. 566-575.
72. Verbitsky, Horacio. "Argentina: rumbo a la democracia... por un camino minado", en *Cuadernos del Tercer Mundo*, México, año VI, núm. 63, agosto 1983, pp. 17-23.
73. Villarreal, René. "Diálogo con la Escuela de Chicago", en *Cuadernos de Marcha*, México, CEUAL, segunda época, año III, núm. 17-18, ene-abr 1982, pp. 75-84.
74. _____. "La contrarrevolución monetaria en el centro y la periferia", en *El Trimestre Económico*, México, FCE, vol. L (1), núm. 197, ene-mar 1983, pp. 429-471.
75. Vitelli, Guillermo. "La hiperinflación como instrumento de política económica, Argentina 1975-1985", en *Economía de América Latina*, México, CIDE, núm. 14, 1986, pp. 39-51.

HEMEROGRAFIA

Aparte de las ediciones periódicas antes citadas, se consultaron diversos ejemplares de los siguientes diarios, revistas y publicaciones especializadas que vieron la luz entre 1975 y 1986. En todos los casos se indica la localidad y periodicidad de las ediciones de referencia.

ARGENTINA

Clarín (diario)

Humor (semanal)

La Nación (diario)

La Prensa (diario)

ESTADOS UNIDOS

Newsweek (semanal)

The Nation (semanal)

The New York Times (diario)

MEXICO

Contextos (quincenal)

Excélsior (diario)

La Jornada (diario)

Le Monde Diplomatique en Español (mensual)

Uno más uno (diario)